

INDICE

ANALISIS DE COYUNTURA

LA DICTADURA MILITAR: UN BALANCE NECESARIO

JEFE DE FAMILIA Alberto Fuguet	14
PINOCHET EL GRAN TRASVESTIDO Luis Sepúlveda	16
PINOCHET FRENTE A LA HISTORIA Gonzalo Martner	18
DISCURSOS PSICOLOGICOS EN DERECHOS HUMANOS: UN ANALISIS CRITICO Isabel Pipper	20
TORTURA Y TORTURADORES Leslye Briceño	28
LA REPRESION: UNA CONTRIBUCION HISTORICA María Teresa Sánchez Della Chiara	36
LAS JORNADAS DE PROTESTA NACIONAL: Historia, Estrategias y Resultado (1983-1986). Patricio Quiroga Z.	42
LA ASAMBLEA DE LA CIVILIDAD Francisco Rivas	62
SIGUE PENDIENTE DESMONTAR HERENCIA ECONOMICA DEL PINOCHETISMO Hugo Fazio	68
"NUEVO PACTO" ; UN PASO EN LA LEGITIMACION DEL MILITARISMO J.C. Arriagada	76

HOMENAJE

COMBATIENTE DE TODAS LAS CAUSAS JUSTAS (A Manuel Piñeiro) Marta Harneccker	94
--	----

ENCUENTRO XXI

COMITE DE REDACCION

CLODOMIRO ALMEYDA † JAIME INZUNZA
MANUEL CABIESES DAVID MAC CONELL
JAIME CAVADA TOMAS MOULIAN
JACQUES CHONCHOL RAQUEL OLEA
HUGO FAZIO KEMY OYARZUN
MANUEL GAHONA FRANCISCO RIVAS
TOMAS HIRSH JOSE SANFUENTES

DIRECTOR

MANUEL RIESCO

EDITORES

MARIA E. HORVITZ
CARLOS ZUÑIGA

CO-EDITORES

PATRICIO QUIROGA PATRICIO RIVAS
CARLOS MOLINA

PRODUCTOR GENERAL

CARLOS GUTIERREZ

GERENTE

HARRY ABRAHAMS

REPRESENTANTE GENERAL

CARMEN HERTZ

COMITE EDITORIAL INTERNACIONAL

ROBERTO KOHANOF	ARGENTINA
ADAM SCHESCH	ESTADOS UNIDOS
RINA GIOLARDI	ITALIA
OSVALDO FERNANDEZ	FRANCIA
RUY MAURICIO MARINI †	BRASIL
ROBIN BLACKBURN	INGLATERRA
EMIR SADER	BRASIL
ANTONIO MELIS	ITALIA
JULIO CARRANZA	CUBA
MARTA HARNECKER	CUBA
ELVIRA CONCEIROS	MEXICO
JUAN VALDES	CUBA
ARNALDO MARTINEZ	MEXICO
MICHAEL LOWY	FRANCIA
MANUEL MONEREO	ESPAÑA
NARCISO ISA CONDE	REP. DOMINICANA
PHILIP OXHORN	CANADA
GÖRAN THERBORN	SUECIA

FOTOGRAFIAS

Encuentro XXI - LOMEdiciones

DIRECCION

HUERFANOS 1761 Dpto. 211 FONO: 6969690

Sitioweb: <http://ceda.cep.cl/xxi>

CONSEJO EDITORIAL

TATIANA AGUAYO	CARLOS DONOSO	CARMEN HERTZ	VIVIANA MIRANDA	PATRICIO PALMA	VICENTE SOTA
CLODOMIRO ALMEYDA	HECTOR DUQUE	TOMAS HIRSH	HECTOR MIRANDA	JUAN PALOMO	PAULINA SOTO
JOSE M. ARTEAGA	JAIME DURAN	MARIA E. HORVITZ	VICTOR HUGO	CELSA PARRAU	DANIEL TROMBEN
ROBERTO BAEZA	GALO EIDELSTEIN	JAIME INZUNZA	MIRANDA	MARTIN PASCUAL	JOSE MIGUEL VARAS
DANILO BAHAMONDES	GLORIA ELGUETA	RODRIGO INZUNZA	CARLOS MOLINA	JORGE PAVEZ	JAIME VALDES
PASCUALA BARRAZA	RAUL ESPINOZA	MARIO INZUNZA	RAFAEL MOLINA	TADEO PAVISICH	ANDRES VARELA
ANA BARRENECHEA	FAUD FARAH	ISABEL JARA	TIRSO MOLINA	CARLOS PEREZ	ANGELICA VEGA
ADIL BERCOVICH	HUGO FAZIO	LEONARDO JEFFS	GUILLERMO	FRANCISCA PEREZ	PABLO VEGA
ALICIA BASSO	JOSE FERES	SERGIO JIRON	MONTECINOS	RAMON PEREZ	LAUTARO VIDE LA
RICARDO BRAVO	HECTOR FERNANDEZ	JOSE JORQUERA	JUAN PABLO MORENO	BRUNO PEZZUTO	HUGO VILLAR
JUAN BUSTOS	ROSITA FERRADA	GASPAR KUSAR	TOMAS MOULIAN	PATRICIO QUIROGA	ALEX VOJKOVIC
LILIANA CASTILLO	GUILLERMO FERNANDEZ	HECTOR KOYCK	VICENTE MUÑOZ	MARIANO REQUENA	ALEJANDRO YAÑEZ
MANUEL CABIESES	AIDA FIGUEROA	JUAN LASEN	MARIO NAVARRETE	MANUEL RIESCO	CARLOS ZUÑIGA
ALBERTO CARVAJAL	CLAUDIO FONSECA	MIGUEL LAWNER	RAQUEL OLEA	NORA RIESENBERG	
JAIME CAVADA	CLAUDIO FRIEDMAN	ALEX LEIVA	ESTELA ORTIZ	EDITH RIVAS	
MANUEL CANTERO	FRANKLIN FRIEDMAN	BEATRIZ LIZANA	CARLOS OSSA	FRANCISCO RIVAS	
MARFA CERNA	TITAZ FRIEDMAN	ANA LOBOS	VICTOR OSORIO	PATRICIO RIVAS	
CLAUDIA CESPEDES	MANUEL GAHONA	MANUEL LOYOLA	CECILIA OTEIZA	ANTONIOROMAN	
PATRICIO CID	JORGE GAJARDO	DAVID MAC CONELL	CECILIA OSTORNOL	ISABEL ROBERT	
CECILIA COLL	TRISTAN GALVEZ	CARLOS MARGOTTA	FERNANDO OSTORNOL	PEDRO SADA	
MIRIA CONTRERAS	SERGIO GONZALEZ	ALBERTO MARTINEZ	FERNANDO	ANGEL SALAS	
LUIS CORVALAN	CARLOS GUTIERREZ	ENRIQUE MARTINI	OSTORNOL(Hijo)	ALICIA SALOMONE	
PATRICIO CHACON	HUGO GUTIERREZ	JORGE MARTINEZ	MARCIA OSTORNOL	JOSE SANFUENTES	
SERGIO CHAVEZ	NELSON GUTIERREZ	MARIO MATUS	ROBERTO OYARZO	MARCELA SANTIS	
JACQUES CHONCHOL	NELIDA HERESI	RAMON MENESES	KEMY OYARZUN	JACOBO SCHATAN	
SERGE DE LA FUENTE	JAIME HERRERA	ORIEL MICHELLE	ALVARO PALACIOS	NISSIN SHARIM	

¿DONDE ESTAN?

COMPAREXOTA

1. EL SECTOR PÚBLICO DE LOS RECURSOS HUMANOS
 2. EL SECTOR PRIVADO DE LOS RECURSOS HUMANOS
 3. EL SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL EXTERIOR

1. EL SECTOR PÚBLICO DE LOS RECURSOS HUMANOS
 2. EL SECTOR PRIVADO DE LOS RECURSOS HUMANOS
 3. EL SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL EXTERIOR

1. EL SECTOR PÚBLICO DE LOS RECURSOS HUMANOS
 2. EL SECTOR PRIVADO DE LOS RECURSOS HUMANOS
 3. EL SECTOR DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL EXTERIOR

SECTOR PÚBLICO		SECTOR PRIVADO		SECTOR EXTERIOR	
País	Industria	País	Industria	País	Industria
Argentina	Industria	Argentina	Industria	Argentina	Industria
Bolivia	Industria	Bolivia	Industria	Bolivia	Industria
Brasil	Industria	Brasil	Industria	Brasil	Industria
Chile	Industria	Chile	Industria	Chile	Industria
Colombia	Industria	Colombia	Industria	Colombia	Industria
Costa Rica	Industria	Costa Rica	Industria	Costa Rica	Industria
Cuba	Industria	Cuba	Industria	Cuba	Industria
Ecuador	Industria	Ecuador	Industria	Ecuador	Industria
El Salvador	Industria	El Salvador	Industria	El Salvador	Industria
Guatemala	Industria	Guatemala	Industria	Guatemala	Industria
Haití	Industria	Haití	Industria	Haití	Industria
Honduras	Industria	Honduras	Industria	Honduras	Industria
Jamaica	Industria	Jamaica	Industria	Jamaica	Industria
México	Industria	México	Industria	México	Industria
Nicaragua	Industria	Nicaragua	Industria	Nicaragua	Industria
Panamá	Industria	Panamá	Industria	Panamá	Industria
Paraguay	Industria	Paraguay	Industria	Paraguay	Industria
Perú	Industria	Perú	Industria	Perú	Industria
Puerto Rico	Industria	Puerto Rico	Industria	Puerto Rico	Industria
Uruguay	Industria	Uruguay	Industria	Uruguay	Industria
Venezuela	Industria	Venezuela	Industria	Venezuela	Industria

ANALISIS DE COYUNTURA

Análisis de Coyuntura

1.-¿ Transición a qué ?

Formalmente, la instalación de Pinochet en el Senado, pese al rechazo nacional y mundial, dio por terminada la transición.

Por cierto, salvo la derecha, nadie aceptó esto públicamente. El Gobierno y la Concertación reconocen tareas pendientes y hay quienes sostienen que ha habido transición ninguna y que sería ya hora de iniciarla.

En verdad es difícil una evaluación positiva del proceso de transición. Es claro que la dictadura finalizó, que en términos generales algunos derechos y libertades políticas son básicamente respetadas, que el terrorismo de Estado no es pan nuestro de cada día, pero, de eso a que se haya transitado a algo esencial y fundamentalmente distinto es, a lo menos dudoso y discutible.

Un somero balance reafirma que la senaturía vitalicia de Pinochet no es un dato secundario. Es el símbolo de la victoria total del dictador. La expresión de que su proyecto se cumplió íntegramente, que nada de lo esencial ha cambiado en estos 8 años de Gobiernos Concertación. De hecho, el modelo económico permanece, la legislación laboral pro empresarial sigue casi igual, con el modelo educativo, el de salud y el previsional sucede lo mismo; el sistema político permanece prácticamente incólume con sus poderes fácticos y paralelos intocados y su representatividad restringida, la injusticia socio-económica permanece o se ha acrecentado, los asesinos están en libertad y ni siquiera es posible detener, después de más de un año de empeños, a un delincuente extranjero protegido del poder militar y la derecha.

¿ Transición a qué ? es entonces una pregunta válida.

2.- Lo principal salvaguardar el modelo

Con todo, la salida de Pinochet de la Comandancia en Jefe del Ejército, agregada a los resultados de Diciembre, ha generado un nuevo momento.

Las diferencias de opinión en los partidos y en la Concertación en torno a la senaturía vitalicia y la acusación a Pinochet y la discusión abierta ante la propuesta de Plan Social del Gobierno, se agregan las diferentes lecturas de los resultados de la elección de Diciembre. Dejan claro que lo que está cursando son conflictos reales, que no es posible resolverlos con gestos de autoridad - como quedó de manifiesto en la reacción al llamado público del Presidente oponiéndose a la acusación constitucional a Pinochet - ni con maniobras u operaciones que, a lo más, podrán postergarse, inclusive, agudizarlos.

Parece previsible pensar que la política adquiere un tenor y un curso distinto. El pragmatismo político tiende a ser desplazado. La reinstalación de la política, como campo de confrontación y lucha, sigue cursando y es el factor más determinante del nuevo momento. Es eso lo que quedó de manifiesto en la instalación del nuevo Parlamento, en las distintas acciones políticas y sociales desarrolladas en torno al 11 de Marzo, que expresaron un amplio encuentro democrático por sobre opiniones o orientaciones partidistas y, sobre todo, en la acusación contra Pinochet.

Como es obvio, las fuerzas sistémicas - el bloque en el poder, incluido el sector hege-

mónico del Gobierno y la Concertación - hacen todo lo posible por impedir este curso de los acontecimientos.

El esfuerzo central va dirigido a impedir que las cosas se salgan del cauce. Quisieran que todo se redujera, a lo más, a un nuevo ajuste de poder en el bloque, que asuma el cambio de correlación que implica la salida de Pinochet de la Comandancia en Jefe.

La salida del dictador del mando militar, más allá de su designación como benemérito, debilita las posiciones de poder de la derecha. Izurieta no es Pinochet, pero, además, para el logro del objetivo principal - la consolidación y permanencia del modelo - le corresponde un rol diferente. Su responsabilidad es garantizar el papel político y de garante de la institucionalidad que las FF.AA. se autoasignaron, desde una imagen de normalidad, con una actividad política relativamente menos contingente y abierta, pero en ningún caso democrática. En su estudio laconismo, Izurieta ha sido en esto meridiano claro, como para evitar cualquier confusión. Una y otra vez ha insistido que su función es "garantizar el cumplimiento de las misiones que le asigna la Constitución".

Naturalmente, la derecha intenta que este debilitamiento le signifique el menor costo posible. Para ello, ha ejercido de diversas formas sus posiciones de poder. Ha defendido, aún a costa de mostrarse obsecuente, al dictador y su senaturía, se jugó por el juramento público y con todos de este a su cargo vitalicio, como una expresión de fuerza y de claro mensaje de compromiso con el modelo; intentó involucrar a las FF.AA. en acusación, y logró, con la inestimable ayuda del Gobierno, cambiar propagandísticamente el carácter de esta. Como siempre usó el garrote y la agresividad, para luego, logrados sus objetivos, mostrarse "generosa" y "reconocida" del Gobierno. Y, lo claro es que, una vez más, la táctica le funcionó.

Estos logros derechistas están determinados fundamentalmente por la actitud del sector hegemónico del Gobierno y la Concertación. En el Gobierno se privilegió claramente la defensa del proyecto. No arriesgar ni siquiera mínimamente el consenso básico del bloque en el poder. La sola posibilidad que cualquier presión pudiera ayudar al desarrollo del proceso de politización, con potenciales efectos no deseados a mediano plazo, ha hecho que, a diferencia de momentos análogos anteriores, el Gobierno se niegue o se limite seriamente en el uso de sus posiciones de fuerza. Es la única explicación posible del entreguismo con que se ha actuado.

En este marco, la actitud oficial y de un sector importante de la DC en la acusación constitucional a Pinochet es emblemática. Lo lógico, en el contexto de la lucha de posiciones en el bloque en el poder, es que el Gobierno tomara frente a ella una actitud favorable, aunque sin, obligatoriamente, fomentarla ni promoverla o, en el peor de los casos, prescindente. Como es claro no fue así sino todo lo contrario. Se involucró directamente en su rechazo y, en los hechos, se alió a la derecha más dura en contra de sus partidarios. Así, el argumento del Gobierno para rechazarla - el supuesto juicio a la transición y a los Gobiernos Aylwin y Frei, desconociendo la evidencia de que efectivamente esos Gobiernos fueron presionados ilegalmente en más de una ocasión por el poder militar, como lo reconoció en su contradictoria actitud P. Aylwin, y lavando con ello la imagen del dictador, que es el real acusado - se transformó en el argumento privilegiado de la derecha, con lo cual pudo, al menos debilitar la imagen de su compromiso irrestricto con el dictador. Es casi para la risa, la derecha «defiende» los Gobiernos de la Concertación contra sus partidarios.

Parece ser que, al sector hegemónico de la Concertación la presencia de Pinochet le conviene como factor "tranquilizador" de sus rebeldes y eso es más importante que aprovechar su salida para avanzar, no ya a la democracia,

siquiera en mejorar sus posiciones en el bloque.

En ese ambiente, sucedió lo que era previsible en ese cuadro: la acusación fue derrotada.

La propuesta de Agenda Social está marcada por lo mismo. La renuncia del Ministro Pizarro, con fuertes críticas a la gestión gubernamental, marcó la victoria total de la política Aninat. Fue el broche que cerró definitivamente la posibilidad de una Reforma Tributaria a la que el Gobierno se había comprometido. De hecho el Gobierno, descartó todas las propuestas que planteo la Concertación.

El Plan Social anunciado no apunta a nada sustantivo. Es más de lo mismo. Ni siquiera recoge, otra vez, lo planteado, por Villarzú: "una reforma en serio destinada a la tercera edad requiere al menos un par de puntos del PIB». Lo claro es que, con el reajuste ofrecido, las pensiones - la medida que aparece más significativa - continuarán por debajo del salario mínimo. Por otro lado, todo indica que la derecha logrará nuevos privilegios para el gran capital, si terminara por aceptar la derogación del escandaloso artículo 57 bis A de la Ley de Renta. Lo claro es que el Plan no va al fondo del asunto, no busca resolver el problema principal que es el de la redistribución del ingreso.

Por otra parte, la propuesta de plebiscito, la única medida política anunciada y que podría asumirse como la única iniciativa de fuerza gubernamental en la pugna bloquista, terminó, luego de la presión derechista, tan amarrada y disminuida que de aprobarse mantendría en la derecha y a los fácticos el poder de decisión.

Por todo esto no es extraño que, hacia finales del mes, el conflicto con la derecha haya bajado de tono y que hasta el lenguaje agresivo de ésta en ciertos momentos - del que la polémica Frei - Lavín fue el punto más alto - haya desaparecido, transformándose en propuestas "constructivas" al Plan Social y en alabanzas a la política oficial.

La derecha no se pierde. Tiene claro lo principal y actúa usando su fuerza con habilidad.

En este escenario, lo presidencial pasa a utilizarse como factor «tranquilizador», como elemento para estibar la rebeldía. El sector hegemónico intenta que todo curse por allí, para intentar por esa vía sacar del centro las contradicciones internas en la alianza y los partidos. Ante el riesgo de la candidatura Lagos, se busca bajar el conflicto en el PPD y el PS y de sectores de estos con el Gobierno, ante el riesgo de la candidatura DC se hace lo mismo.

En definitiva, todo el esfuerzo se pone en cerrar las posibilidades de avances democráticos reales, en reducir al máximo este riesgo. Lo principal es la persistencia del sistema y el modelo político, abriendo a lo más ciertas computas menores, pero sin intentar a lo sustantivo.

Lo que se busca desde el Gobierno es cerrar cualquier la posibilidad de un nuevo consenso democrático, ya no por temor a una vuelta atrás que pudo ser un argumento en los primeros años de la post dictadura, sino, simple y claramente, porque se privilegia la permanencia del modelo y del sistema.

La idea del plebiscito abriría o abre justamente esta posibilidad, siempre y cuando el Gobierno y la Concertación lo asumieran en esa dirección, es decir como un campo de confrontación con la derecha y el modelo pinochetista, como una lucha democrática de la sociedad. Eso obliga a sacarlo del campo de los "consensos", de la "clase política" y trasladarlo a la gente. Nada indica que el Gobierno vaya a irse por este camino. De no ser así, será un saludo a la bandera más, otra maniobra "comunicacional" - por lo demás cada vez más ineficiente -, una nueva "frustración", como gustan decir los personeros oficiales, anunciada.

Parece claro que el costo político de estas maniobras y operaciones es cada vez mayor

para el Gobierno. Su "victoria" en la acusación a Pinochet no anuncia días mejores. Al contrario todo indica que lo más probable es que las contradicciones se agudicen. Las contradicciones existen y expresan situaciones que se viven en la sociedad y no es por secretaría que podrán resolverse.

De hecho los procesos de discusión partidaria no se han detenido. El rechazo a la acusa-

ción los ha endurecido. Por vez primera en la DC, los progresistas han planteado la idea de levantar un candidato propio en las internas o incluso un posible apoyo a R. Lagos. Por otra parte, la persistencia, pese a los esfuerzos de la DC y de otras dirigencias políticas, del Movimiento por la Dignidad y del Movimiento de la Sociedad Civil son indicativos de que el proceso no parece fácil de detener y que no asumirlo arriesga trizaduras partidarias y debilitamiento del Gobierno XXI



LA DICTADURA MILITAR: UN BALANCE NECESARIO

Jefe de Familia

Alberto Fuguet
Escritor

Yo no puedo evitarlo. Me refiero a Pinochet. Está en todas partes, me sorprende que no esté en todas nuestras fotografías familiares. Algunas veces siento como si él estuviera en el puesto de cabecera en la mesa familiar en nuestra helada vieja casa de Santiago del conspicuo barrio de Providencia. Fue el noche de todos nuestros desfiles, la estrictez, el susto principal de nuestro colegio. Este flashback en blanco y negro al corazón de los años de dictadura es algo definitivamente extraño. Tengo muchos recuerdos de entonces. Buenos, aburridos, raros, decadentes, de miedo, normales. Recuerdo las entrevistas telefónicas, las brillantes mercaderías importadas, los feísimos show de televisión y el abundante y rasomalgusto militar. Chile fue una tierra baldía cultural cuando nosotros, los hijos de Pinochet, crecimos respirando el hedor rancio de la mediocridad totalitaria.

Para mí y para todos los que tienen menos de 35 años, los años de Pinochet fueron nuestros años. A veces nos hicieron reír. El tipo es divertido, pero también despiadado, rudamente cruel. Cada vez que tuvo la oportunidad de subrayar su poder lo hizo con la seguridad con que un comediante actúa en el escenario. "En este país no se mueve una sola hoja sin que yo lo sepa", fue una de sus declaraciones más famosas y terribles. Apunta al meollo de su pequeña y secreta guerra sucia. Ahora él solo parece un viejo joy todavía acapara la prensa. Un duro recordatorio de que la historia no se disipa rápido. Yo no tuve mucho de víctima. La mayor parte de mi familia apoyó a Pinochet (uno no elige a sus padres ni a los dictadores) o a lo menos ellos le dieron el beneficio de

la duda. Casi todos mis amigos pensaban que el toque de queda que él impuso, se ajustaba a alguna idea de sus padres.

Durante casi 25 años, prácticamente toda mi vida, sentimos que Pinochet atisbaba sobre nuestros hombros, primero reaccionamos con miedo, después con aburrimiento, ahora con una especie de olor a rancio que está siempre presente como el smog sobre Santiago. El decretó exilios, fusiló, impuso toque de queda, modernizó y nos puso a todos en línea. ¿Nos interesaría cambiar de tema? ¿Cuándo podremos hacerlo? .

Yo estudié periodismo cuando no había libertad de prensa, incluso las tiras cómicas eran censuradas. El país vivía apartado de los otros. La democracia no era solo un tipo de gobierno, era algo cool, el cielo de los adictos a los media. Estados Unidos colonizaban nuestras mentes y los mall: música, películas, sexo, drogas y todo aquello donde encontrábamos espacio seguro para rebelarnos.

Nuestro campus había sido el cuartel general de la DINA, el Servicio de Inteligencia de Pinochet. La guarida de sus secuaces tenía calabozos y pasadizos secretos. Cinco años antes de que yo llegara allí el lugar era centro de torturas y violaciones. Nosotros usábamos esas mismas piezas para jugar ping-pong, juntarnos a fumar y saborear nuestra acobardada depresión que no era política. Nos veíamos como punks del tercer mundo, pensábamos que no teníamos futuro. Debíamos irnos. Rápido.

Estamos todavía aquí. Para bien, éste es el lugar. Al menos eso es lo que dicen.

¿Cómo me gusta recordar a Pinochet? Me gusta detenerme en el pop fascista, la imagen de Terminator: el satánico tipo de los anteojos negros, los campos de concentración, el teatral bombardeo del Palacio Presidencial. Pero también se impone la imagen del viejo patriarca, corpulento, envuelto en su capa de gala. Como ocurre con aquellos que lo hicieron, nuestros propios padres y abuelos que a veces se le parecen mucho, el tipo es demasiado complejo para reflejarlo en imágenes reductivas. Pinochet es una parte sustancial de nosotros. Revoloteará en torno nuestro durante mucho tiempo. Es un regalo que nos hicieron nuestros mayores que intentaron cambiar el país. Ellos no cambiaron Chile. Pinochet lo hizo. ¡¡ Vaya paradoja!!.

Pinochet trató de eliminar a sus enemigos y expulsó a los políticos del país ensangrentado. Tuvo éxito, pero también fracasó. Muchos de sus enemigos están ahora en el poder. La oposición está integrada por sus fans. A veces en días como hoy, siento disgusto por todos ellos. Es una angustia infantil, de acuerdo, pero no por eso menos real.

Hace poco, para mi asombro, en la noche del concierto de U2, los mismos 70.000 jóvenes que abuchearon a Pinochet cuando lo mencionó Bono, terminaron la jornada profundamente divididos, cuando algunas mujeres familiares de los detenidos-desaparecidos subieron al escenario. Pifiar a Pinochet es fácil, no es ya una cosa muy política, sino generacional. Entender lo que sucedió es mucho más difícil.

Parece que donde Pinochet triunfó fue con nosotros los jóvenes.

Compramos la idea de que la política era mala, crecimos despolitizados. Yo comprendo a todos esos jóvenes y no tan jóvenes que no votan. Cuando las cosas cambian uno espera una especie de temblor, un vuelco. Pero ese no es nuestro camino. Nosostros cambiamos una vez y miren lo que nos pasó. Uno nunca puede tener suficiente cautela. Ese es el verdadero legado que heredamos de las generaciones anteriores.

Algún día Pinochet se irá con sus anteojos oscuros a la tumba y nosotros por fin podremos vernos unos a otros sin él. No será un espectáculo atractivo, pero ocurrirá. XXI

Pinochet; El gran travestido

Luis Sepúlveda
Escritor

Un curioso fenómeno de travestismo moral practicado por los que hoy gobiernan Chile y por los que están en la oposición de derechas ha conseguido que la dictadura militar, luego en gobierno de las Fuerzas Armadas y finalmente en 'modelo chileno' Estemismo fenómeno permite que Pinochet pase de dictador a senador vitalicio, y proclama que, una vez asumido su puesto senatorial, la transición chilena a la democracia habrá finalizado.

Es decir, que la normalidad institucional democrática se conseguirá cuando el sátrapa se haya travestido de tribuno.

'A la universidad no se viene a pensar, se viene a estudiar, y si quedan energías, para eso está el deporte', declaró en 1978 el futuro senador, y en 1989, en otra brillante pieza de oratoria, proclamó su respeto por la legalidad; 'Yo no amenazo, no acostumbro amenazar. No he amenazado en mi vida Yo solo advierto una vez. . . Nadie me toca a nadie. El día que me toquen a algunos de mis hombres se acabó el estado de derecho. Esto lo he dicho una vez y lo repito más, pero sepan que va hacer así'.

El matón travestido de chantajista.

A partir del 11 de Septiembre de 1973, miles de chilenos fueron asesinados o desaparecidos. Tal vez un día se sepa la cantidad exacta, pues no todos los familiares o amigos de las víctimas han tenido el valor de denunciar los crímenes de la dictadura. Una sola víctima de la barbarie militar hubiera sido más que suficiente para condenar a los gestores de la tragedia chilena, y sobre todo al responsable de ejecutar un plan cuyo único norte era un terror, pero el

travestismo moral se ha negado incluso ha reconocer la magnitud de la pesadilla.

Cuando en 1990 Chile recupera un gobierno civil, aunque vigilado por Pinochet, el presidente Aylwin, con los ojos irritados de llanto- pero no de emoción, sino fruto de las bombas lacrimógenas que la policía chilena arrojaba sobre los miles de chilenos que ingenuamente pedían justicia-, pronunció un discurso en el que tímidamente habló del sufrimiento de muchos a causa de los excesos cometidos por pocos y por llama la reconciliación. Que fácil es travestir el crimen en exceso. Qué ejercicio tan burdo de travestismo es proponer que se olvide la justicia y obligar al perdón. Qué ruina es invocar el dolor de muchos cuando los pocos causantes de tal dolor se mofan de las víctimas. Y que felonía mayúscula es aquella practicada por los defensores a ultranza del 'modelo chileno', sobre todo por los que antaño compartieron el digno camino de Izquierda y que ahora, políticamente correctos, se fotografían junto al futuro senador mientras se cambian las ropas y declaran; 'Es cierto que hubo hechos lamentables, pero también lo es que el general levantó el país'. Y entretanto, Pinochet sonríe porque, entre todos esos travestidos menores, él es el gran travestido.

Su carrera de travestido se inicia en 1959. Aquel año, la presidencia de Chile era ocupada por un ser repugnante llamado Gabriel González Videla, un ex aliado de los comunistas que, en una demostración de servilismo frente a los Estados Unidos, decidió proscribir a sus ex camaradas y encerrarlos en un campo de concentración. Pisagua se llamó tal lugar de trágico recuerdo. A dos mil kilómetros de Santiago, en pleno desierto de Atacama, cientos

de obreros, profesores, estudiantes, morían o sobrevivían según los dictados de un sádico con rango de capitán del Ejército; Augusto Pinochet.

Ahí se inició en la costumbre de la tortura, y cuando, alarmados por las noticias que consiguieron filtrarse, una delegación del parlamento acudió a Pisagua, el torturador travestido de samaritano les impidió el paso esgrimiendo su deber de mantenerlos alejados de un foco epidémico terrible. Nunca se conocer la cantidad de muertos que hubo en Pisagua porque, tras cerrar el campo por presión popular, Pinochet se encargó de hacer desaparecer los registros de prisioneros.

En 1968, los mineros de El Salvador, un yacimiento de cobre en el desierto de Atacama, se declararon en huelga exigiendo mejoras salariales. Pinochet, que ya era coronel, fue enviado para mantener el orden en el mineral. El presidente Frei, antecesor de Allende, lo nombró incluso mediador. Y vaya si medió. Una tarde convocó a los ocho dirigentes de huelga y los asesinó. Meses más tarde, el asesino travestido en defensor de estudiantes justificó el crimen argumentando que estos obreros fueron muertos cuando se disponían a atacar a una escuela.

En 1971, ya con Allende en la Presidencia, un grupo de ultraizquierda asesinó a un ex ministro del gobierno anterior. El caso conmovió al país y Allende dispuso que el Ejército también colaborara en la búsqueda y captura de los criminales. Al policía civil no le costó gran trabajo encontrarlos, y tras breve tiroteo decidieron entregarse. En eso estaban cuando apareció el entonces coronel Pinochet y dispuso que no había que hacer prisioneros. Captor Juez y ejecutor de sentencia en un solo acto de travestismo.

Al saber de esos cuatro muertos, rendidos y desarmados, Allende llamó a Pinochet. Nunca se sabrá qué lo llevó a aceptar la explicación del militar, que habló de un enfrentamiento muy duro, pese a los muchos testigos de aquella masacre. En cierto momento, Allende le preguntó si él era el mismo oficial de apellido Pinochet que

estuvo a cargo del campo de concentración de Pisagua en el 59 y que fue responsable de la matanza de El Salvador en el 68. Pinochet negó. Respondió que se trataba de otro, de un tal Manuel Pinochet. Varios años más tarde, en sus 'memorias', se ufana de Allende, y terminó indicando que nunca hubo un oficial llamado Manuel Pinochet en el Ejército chileno. El arte de travestirse frente al poder. El arte de travestirse que hizo escuela en Chile.

En 1988, el ministro alemán del trabajo, Norbert Blum, viajó a Chile en una clara muestra de apoyo a la oposición democrática y se entrevistó con el dictador, Pinochet, arrogante, le dijo que se sentía injustamente difamado, tan injustamente como lo fue Hitler. Sorprendido. Blum consultó por qué Pinochet le indicó entonces que, según su conocimiento de la historia, Hitler no había matado a seis millones de judíos sino solamente a cuatro. Una sola persona habría bastado para condenarlo, replicó el Ministro Alemán. Cuatro millones Usted no entiende la diferencia, concluyó Pinochet.

Así el mayor travestido de Chile llegar al Senado, pero los familiares de las víctimas seguirán pidiendo justicia. Los intelectuales del travestismo seguirán cantando los 'modelo chileno', pero los desaparecidos continuarán en un paradero que sólo Pinochet conoce. Los travestidos menores, de derecha e izquierda, lo llamarán honorable, pero las manos cercenadas de Víctor Jara seguirán rasgando la guitarra del recuerdo de los que no olvidan ni perdonan, ni a él ni a ninguno de los hijos de puta culpables de una herida que permanece y permanecer abierta hasta que se habrán esas amplias alamedas por las que transitarán los chilenos que han resistido el arrogante travestido del poder, los que siguen buscando entre las hienas, los que no vendieron ni la dignidad ni la memoria. XXI

LUIS SEPULVEDA
(Publicado en 'El País')
Madrid 03/03/98.

Pinochet frente a la historia

Gonzalo Martner
Dirigente del P. S. de Chile

Hemos vivido recientemente un momento político de repercusiones históricas. Pinochet ha dejado la Comandancia en jefe del Ejército en medio del repudio mayoritario. Las razones de ese repudio no son de poca monta.

En efecto. El general Pinochet asumió la Comandancia en jefe del Ejército en Agosto de 1973 jurando respeto a la Constitución, y presumiendo de una actitud de supuesta lealtad al Presidente Allende y al General Prats, que a la postre era sólo una inmensa ambición de poder. El propio historiador Gonzalo Vial, ex ministro de Pinochet, ha reconocido que éste sólo se sumó al golpe de Estado el 9 de Septiembre de 1973 y que al hacerlo, solicitó adelantarlos en 48 horas, pues el Presidente Allende le había revelado que convocaría el martes 11 de Septiembre de 1973 a un plebiscito para poner en manos del pueblo la decisión sobre la continuidad de su gobierno y de ese modo dar un cauce democrático y civilizado a la crisis que el país vivía. El general Pinochet se sumó al golpe de Estado que otros habían organizado y al hacerlo, asumió la responsabilidad históricamente imborrable e imperdonable de sepultar el sistema democrático y la salida pacífica que promovía el Presidente Allende y que tantos sufrimientos hubiera ahorrado a Chile.

Una vez violentado el orden democrático, el general Pinochet, para permanecer en el poder de modo indefinido, optó por la brutalidad y la violencia extrema y desproporcionada frente al menguado poder material de sus opositores. Así lo atestiguan tempranamente las comunicaciones radiales del 11 de Septiembre, que revelan su intención,

en caso de rendición del Presidente Allende (que éste con dignidad inigualable, jamás aceptó), de derribar el avión que le habían ofrecido los golpistas para abandonar el país. Así lo atestigua la reciente declaración del que fue jefe de su policía política, Manuel Contreras, al confirmar que Pinochet recibía información diaria a primera hora de la mañana del curso detallado de las acciones represivas. Así lo atestigua el balance de la verdad y reconciliación; durante el régimen de Pinochet murieron asesinadas 2.095 personas y otras 1.102 desaparecieron. Por órdenes suyas se asesinó, torturó, violó, encarceló, exilió y reprimió a los opositores como nunca en la historia republicana de Chile. Cada día emergen nuevas evidencias judiciales que involucran directamente a Pinochet en el asesinato de su predecesor, el general Carlos Prats. Como responsable de tales hechos, que repugnan irremediablemente a la conciencia civilizada de la Nación habrá de recordarlo la historia.

El general Pinochet pretendió justificar su permanencia indefinida en el poder por la necesidad de realizar transformaciones económicas drásticas.

Independientemente de sus resultados, que son mediocres en materia de crecimiento comparativamente a las décadas de los años 1950 y 1960, y totalmente lesivos para los pobres y trabajadores, constituye una falsedad histórica señalar que se necesita una dictadura sangrienta para llevar a cabo esas transformaciones: abrir la economía al exterior, liberalizar los mercados y disminuir el rol del Estado, al margen de lo que se pueda opinar al respecto, son políticas que han sido realizadas en menos

tiempo y con mayor radicalidad por regímenes plenamente democráticos como el de Menem en Argentina, o los de la Europa del Este después de la caída del muro de Berlín, sin necesidad de violar los derechos humanos o eliminar las libertades.

Según sus planes originales, el general Pinochet buscaba prolongar su gobierno al menos hasta 1997. Plebiscitar un gobierno de 16 años tenía poca presentación en 1980 y Pinochet supuso que un nuevo trámite plebiscitario era necesario a medio camino en 1988. Sin embargo, la recomposición de las fuerzas democráticas ya había madurado lo suficiente como para impedir la repetición de un plebiscito sin real oposición.

A regañadientes, Pinochet debió aceptar su alejamiento del gobierno en 1990, sin ce-

der a la petición del Presidente Aylwin de Abandonar la Comandancia en jefe del Ejército. El país ha debido sufrir una peligrosa prolongación de la transición a una democracia plena. Dos episodios ilegales de insubordinación de Pinochet y las permanentes intervenciones políticas a las que ha sido arrastrado el Ejército demuestran el grave desprestigio que ha debido sufrir la democracia chilena por la obra suya, el que se ha prolongado con la irrisoria declaración de sus generales incondicionales que lo han nombrado 'benemérito', en un intento agónico de prolongar su influencia política con la amenaza de las armas. En suma, el régimen de Pinochet fue radicalmente ilegítimo en su origen, trágico en sus consecuencias para la mayoría de los chilenos, históricamente inútil y sus secuelas institucionales siguen emponzoñando la convivencia nacional. XXI

Discursos psicológicos en derechos humanos :

Un análisis crítico¹

Isabel Piper Shafir
Sicóloga, ILAS (Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos)
Universidad ARCIS

I.- UN EJERCICIO DE REFLEXIVIDAD

A partir del golpe militar de 1973, nuestro país vivió 17 años de represión política. Las distintas formas de la represión afectaron de manera importante a quienes las vivieron y muchos de ellos consultaron a profesionales de salud mental. Esto llevó a un grupo de estos profesionales, la mayoría de ellos ligados a organismos de Derechos Humanos, a atender a esos consultantes, desarrollándose a partir de ahí un proceso de conceptualización, una práctica y un ámbito de investigación que situaron esta problemática tanto en el campo de la psicología como en el campo socio-político.

Las condiciones en las cuales se llevaba a cabo el trabajo eran precarias y bajo situaciones de amenaza. Los conocimientos tanto teóricos como prácticos que poseían los profesionales no contemplaban el tipo de problemas a los que se veían enfrentados. Algunos de ellos poseían una formación en psicología clínica, otros en psiquiatría y otros en psicología social, pero la necesidad de abordar la vinculación entre el padecimiento de las personas y el contexto político era común y los llevó a desarrollar un trabajo teórico y práctico, que permitiera responder de alguna manera a la demanda de la población afectada de aliviar su sufrimiento y su sintomatología. Los conceptos y las estrategias de intervención elaboradas han constituido lo que Agger y Jensen (1996) han llamado el modelo chileno. Este modelo se sigue utilizando hasta hoy, 7 años después del término de la dictadura militar.

Todos estos profesionales hemos asumido un compromiso explícito con la historia del país y hemos buscado desarrollar una práctica de nuestras disciplinas que se inserte dentro los procesos socio-políticos que en las últimas décadas han estado marcados por la violencia extrema. Hemos buscado combatir la violencia desde la especificidad de nuestras disciplinas, preocupándonos por la defensa de los que la han sufrido en forma directa e intentado revertir, o bien contribuir a transformar esta situación. Las intenciones (tanto personales como políticas) son claras y tienen que ver con los deseos de justicia y libertad para nuestro pueblo.

Cuando se reflexiona en torno al trabajo de los profesionales que se han dedicado al tema de la violencia extrema, es común que las intenciones se transformen en argumentos. El compromiso que implica el estar orientado a un tema social y políticamente relevante; el preocuparse de las víctimas, de los que sufren, de los que han sido marginados tanto por la sociedad como por los científicos; ocuparse de las necesidades de reparación social, de dar apoyo y atención a las víctimas directas mitigando su sufrimiento e intentando con ellos la elaboración de un daño que es de toda la sociedad; se transforman en argumentos de validación teóricos y prácticos. Es evidente que éstos son motivos que justifican el trabajo de manera contundente, pero si entendemos por validación el saber si hemos logrado los objetivos propuestos, entonces la validación de la práctica se confunde con su justificación. Efectivamente se ha dado mucho

apoyo, avanzado en la elaboración de algunos aspectos del daño y se han mitigado sufrimientos. Estos son logros tremendamente importantes y satisfacen las buenas intenciones. Sin embargo, hace falta algo más que voluntad política, buenas intenciones personales o ser progresista para ir más allá de estos logros y avanzar hacia los grandes objetivos propuestos.

Como plantea Ibañez (1993), la utilización de este tipo de criterios no es inadecuada en sí misma, de hecho puede resultar orientadora. Sin embargo, cuando se afirma que los conocimientos de las ciencias sociales pueden ser utilizados al servicio de finalidades antagónicas, se está aceptando implícitamente que dichos conocimientos son neutros en sí mismos, y que sus eventuales efectos socio-políticos dependen tan solo del uso (progresista o conservador) que de ellos se hace. En una forma más compleja del argumento se afirma que el compromiso socio-político de los científicos sociales no se reduce a utilizar de manera progresista los saberes acumulados por la disciplina, sino que pasa por una transformación de esos saberes. Así, lo que se trataría de hacer es construir los conocimientos que nos permitan comprender lo que sucede y articular las intervenciones psicológicas y sociales (o bien *psicosociales*) que nos permitan ayudar a transformar esta realidad. Sin embargo, se mantiene una perspectiva desde la cual el alcance político de nuestra práctica psicológica queda limitado a la cuestión de su aplicación a la realidad social (aplicación progresista o conservadora). No queda por lo tanto ningún espacio conceptual para considerar el posible carácter intrínseco de la relación entre la psicología y el ámbito político, y para analizar las implicaciones de esta relación.

Lo que me importa resaltar es que, aunque no se asuman explícitamente (y a veces ni siquiera implícitamente) los criterios de validación que se están usando, éstos no difieren fundamentalmente de los criterios de validación científica. Siguiendo a Ibañez (1993) parece

importante plantear que si se toma en serio el carácter intrínsecamente político de nuestro quehacer, es necesario construir nuevos ejes de reflexión.

Los profesionales que hemos trabajado con los efectos de la violencia política en la salud mental, lo hemos hecho en relación a un proceso histórico y político determinado. Los conocimientos y las prácticas producidas forman parte este proceso que es el que intentamos comprender y explicar. En este proceso se hace necesario constituirse en objetos de la propia reflexión y tomarnos a nosotros mismos, a nuestra práctica y nuestro discurso (que es también una práctica social) como objeto de análisis

Los criterios subjetivos (voluntades políticas y/o personales) no nos bastan y los criterios científicos le quitan el carácter intrínsecamente político a nuestro quehacer. Es decir: no nos basta ni con las intenciones ni con los procedimientos, entonces ¿cuál podría ser el camino de nuestro proceso reflexivo?.

El modelo chileno, que hemos elaborado en relación a los efectos de la violencia política, se ha constituido en un discurso social que ha llegado a tener acceso a espacios profesionales y académicos. Si entendemos al discurso como lo hacen Iñiguez y Antaki (1994), es decir como una práctica social, una práctica ideológica y de significaciones que, como tal mantiene y promueve ciertas relaciones sociales, no podemos dejar de pensar que nuestro discurso está contribuyendo a la construcción y mantenimiento de un cierto tipo de relaciones sociales.

Tomando como punto de partida una concepción dialéctica de la realidad social (Martín-Baró, 1985; Ibañez, 1989; Del Solar y Piper, 1994), para la cual persona y sociedad no son dos entes independientes que interactúan como algo constituido, sino que se constituyen mutuamente: la sociedad sólo existe a través de las prácticas de los individuos y éstos existen como seres sociales a través de la producción de la socie-

dad. Éste es, sobre todo un proceso relacional, en el que no es pensable la existencia de una realidad social independiente de nuestras prácticas. Se trata de un proceso dialéctico, donde las dicotomías pierden sentido: las causas y los efectos se intercambian; el espacio exterior, la sociedad, y el espacio interior, el individuo, en el que se encontrarían supuestamente internalizadas las características de la sociedad, no existen por separado. En este mismo sentido, si bien es cierto que los actos sólo adquieren sentido en el contexto en que se expresan, es importante no atribuir al contexto un status independiente de los actos: el contexto está construido por los actos que resultan de él.

Nuestra práctica (tanto a nivel del discurso como de la acción) está construyendo, manteniendo y promoviendo un cierto tipo de relaciones sociales. Es así como el criterio que busco seguir para reflexionar sobre nuestro trabajo, o sobre el modelo chileno es en términos del tipo de relaciones sociales que estamos construyendo, o dicho de otra manera, el tipo de realidad social que estamos construyendo, más allá de cuales sean nuestras intenciones o los procedimientos que utilizemos.

II.- DISCURSO DE DEFENSA DE LOS DDHH Y SU INFLUENCIA SOCIAL INCONSCIENTE

Tomando como punto de partida el hecho de que nuestro discurso, es decir, el discurso de los trabajadores de salud mental y Derechos Humanos, constituye una práctica social que construye un tipo de relaciones sociales, voy a reflexionar en torno a sus posibilidades de influencia social y al tipo de relaciones sociales que estaría promoviendo a partir de esta influencia. Para esto voy a retomar algunas ideas de Serge Moscovici² en relación a la influencia minoritaria y al proceso de conversión derivado de la influencia social inconsciente.

Unos de los aspectos interesantes de la Psicología de las Minorías Activas de Moscovici

es que redefine el tipo de direccionalidad que rige el proceso de influencia social, planteando que todo grupo es al mismo tiempo fuente y receptor potencial de influencia, al margen del poder que el sistema social le atribuya. Los grupos minoritarios que le interesan a Moscovici son minoría no por ser numéricamente inferiores (de hecho puede suceder todo lo contrario) sino por estar alejados de los centros de poder. Desde un punto de vista clásico estos grupos no tendrían demasiadas alternativas: si no ejercían su influencia desde el poder debían limitarse a «conformarse» o «adaptarse» a la visión mayoritaria o bien ser marginadas asumiendo su impotencia social, es decir la incapacidad de provocar cambio. Sin embargo Moscovici ha mostrado que las minorías pueden ser agentes de cambio y pueden ejercer una influencia importante sobre el resto de la sociedad, siempre que se constituya en una minoría activa.

El resultado de la influencia minoritaria es la conversión, esto es un sutil proceso de cambio de las representaciones o de modificación de la manera de conocer en el cual las personas continúan comportándose como lo hacen habitualmente mientras que implícitamente van adoptando las opiniones o respuestas de otros sin ser necesariamente conscientes de ellos. El fenómeno de la conversión se refiere a todos aquellos cambios de los cuales uno se da cuenta luego de ocurridos y no sabe ni como ni por quien fue influenciado. En el proceso de la conversión se olvida fácilmente el quien (o sea la fuente de influencia) y se conserva el que (o sea el mensaje). Nos encontramos con un camino por el que uno se convierte a las ideas de alguien sin por ello someterse a su autor y por ello verse obligado a reconocerle alguna superioridad. Mediante un sutil trabajo psicológico, se acepta la sugestión, pero se rechaza la autoridad que el sugestionador estaría en posición de ejercer. Así la función del olvido es separa la influencia del poder. Nos dejamos convencer, pero no por ello caemos bajo la influencia de quien nos convence.

Diversas experiencias en este ámbito han mostrado que puede suceder que manifiestemos nuestro desacuerdo con la discurso socio-político de determinado grupo social, pero eso no significa que no nos veamos influenciados por sus ideas. Esas opiniones pueden llevarnos a repensar ciertos problemas y modificar nuestra posición en campos relacionados.

El fenómeno de la conversión se presenta de manera involuntaria, diferida e indirecta. Es por eso que cuando las minorías tienen un escaso, o bien ningún impacto inmediato y manifiesto, después de un lapso de tiempo se puede comprobar que de hecho han marcado de manera importante el modo de pensamiento y la sensibilidad de una sociedad determinada. Nos encontramos con una influencia básicamente inconsciente.

Los movimientos de defensa de los Derechos Humanos así como las víctimas de las violaciones de éstos, pueden ser considerados una minoría activa en la medida en que ambos grupos tienen un punto de vista coherente y definido, son visibles (es decir, su existencia es reconocida por sus características específicas) y tienen un estilo de comportamiento que es (o al menos parece ser) consistente. Es desde esta condición de minoría que se tiene el potencial de innovar, esto es, de introducir, crear nuevas formas de pensamiento, modificar representaciones y conductas. Como ya se mencionó, esta influencia será más bien indirecta, esto es quizás no modificaremos la representación del tema central del discurso en cuestión aunque sí de una serie de temas relacionados. Será diferida, esto es aparecerá después de un lapso de tiempo y, lo más importante, es un proceso de influencia profundo, es decir que conduce a cambios relativamente permanentes.

Pero, ¿Dónde radica este potencial de cambio de los discursos minoritarios?. La minoría amenaza con romper el consenso mayoritario, resulta perturbadora en la medida en que introduce un conflicto. La existencia de este conflicto hace que se produzca un viraje de la

atención desde la fuente hacia el mensaje, las personas centran su atención en el examen de las posibilidades de resolver el conflicto y de restablecer el consenso. La escasa credibilidad de la minoría y su resistencia a las presiones de uniformidad ejercidas por las mayorías, hacen que la atención de los individuos se oriente hacia el contenido del discurso, llegando en último término a desligar el mensaje de su fuente original³. Es la ruptura de esta ligazón la que permite que las ideas innovadoras pasen a formar parte del discurso de las mayorías dominantes, sin que estas lleguen a relacionar estos contenidos con el grupo social que lo elaboró.

Parece interesante insistir en el hecho de que los movimientos de defensa de los Derechos Humanos, entre ellos nosotros y los que trabajamos en campos relacionados, tenemos un potencial importante para introducir nuestro discurso en el ámbito dominante, y llegar a producir con él un proceso de conversión que logre modificar las representaciones de distintos grupos sociales en relación a la violencia socio-política y/o a temas relacionados.

Sin embargo las mayorías también pueden resistirse a este proceso de influencia y parece ser que si nosotros hacemos análisis reflexivo de los efectos de nuestras prácticas, podríamos llegar a la conclusión de que les estamos ayudando.

III.- PSICOLOGIZACION COMO CAMINO DE RESISTENCIA A LA INFLUENCIA DE LA INFLUENCIA MINORITARIA.

Al estudiar los efectos de la violencia política se han hecho serios intentos por integrar teoría social y teoría psicológica. La incorporación del contexto social al estudio de la subjetividad ha permitido entender como el padecimiento intrapsíquico está relacionado directamente con las experiencias vividas en el ámbito social y político. Al conceptualizar un

problema que pertenece al mismo tiempo a éstos dos ámbitos han surgido importantes dificultades que tienen que ver esencialmente con el tipo de relación que se establece entre ellos.

Lo evidente que nos parece que existen individuos y que existen también sistemas sociales, nos conduce a plantearnos la relación entre ellos como la interacción entre realidades distintas y separadas. La sociedad parece constituir de esta forma una realidad que está fuera del individuo, aunque incida necesariamente sobre él. El problema queda reducido a la importancia que se le otorga a uno u otro polo de la interacción, o a como la realidad social (externa) es internalizada en la realidad intrapsíquica (interna).

Es posible constatar que en este proceso de conceptualización se ha recurrido constantemente a elementos psicológicos para explicar los procesos sociales. Esto ha contribuido a desplazar el acento y a presentar al individuo como una realidad en sí, para el cual sus relaciones sociales son una especificación secundaria.

Cuando centramos nuestra interpretación en los aspectos psicológicos del problema relegamos a segundo plano su carácter socio-político. Cuando el problema de las víctimas y/o de sus familiares es planteado en términos de las particularidades de sus procesos intrapsíquicos se establece un determinismo psicológico del contenido innovador de los planteamientos originales de las víctimas, negando así el «realismo» de sus proposiciones y enmascarando su carácter alternativo.⁴

Al mismo tiempo se exagera la percepción de la rigidez y se cuestiona la coherencia y estabilidad de la posición de las víctimas. Cuando el discurso de este grupo se relaciona con sus características psicológicas los comportamientos que antes eran considerados innovadores se transforman: la consistencia se percibe como rigidez, la flexibilidad como inconsistencia, etc.

Como ya se mencionó, el potencial de cambio de una minoría está ligada a su capacidad de introducir un conflicto, lo que atrae la atención hacia el mensaje y hace que las personas centren su atención en el examen de las posibilidades de resolver el conflicto y de restablecer el consenso. Lo importante de este proceso es que los grupos dominantes se concentren en la resolución del conflicto. Sin embargo cuando nosotros explicamos las condiciones intrapsíquicas de la persona que habla lo que hacemos es dar una guía para la resolución del conflicto. Y no es cualquier resolución.

Cuando en nuestra práctica (ya sea en el discurso o en la intervención) enfatizamos los aspectos psicológicos del problema, lo que hacemos es atraer la atención de las mayorías sobre las características de las víctimas consideradas como minoría, resaltando al sujeto que habla por sobre su discurso y en último término, reduciendo lo que es dicho a quien lo dice y las razones subjetivas por las cuales lo dice. Por esta vía estaríamos obstruyendo la vía habitual de impacto minoritario, es decir, obstruyendo la conversión. Es necesario destacar, que con esta práctica se obstruye la influencia de dos tipos de discurso minoritario, el de las víctimas por un lado, y el de nosotros mismos como pensadores sociales que trabajamos en el área de Derechos Humanos.

Si tomamos en serio la propuesta de evaluar nuestro trabajo en función de sus efectos políticos y según el tipo de realidad social que estamos construyendo, no podemos dejar de pensar que nuestra situación es paradójica. Nos situamos frente a la sociedad como una minoría activa, buscando promover un discurso que rescate la justicia, la igualdad y la defensa de los Derechos Humanos. Nos preocupamos de las víctimas, de los perseguidos, de los marginados de la sociedad. Intentamos ayudar a los grupos sociales que han sido acallados a recuperar su voz y su acción. Pero al mismo tiempo le quitamos radicalidad a ambos discursos, acallamos su carácter intrínsecamente político y anulamos el potencial de cambio que éstos tienen. Es temible:

los que nos decimos progresistas resultamos ser terriblemente conservadores en nuestro proceso de construcción de relaciones sociales.

IV.- NECESIDAD DE VOLVER LA MIRADA HACIA LOS FUNDAMENTOS

Me interesa mostrar que los efectos conservadores de nuestro trabajo van más allá de nuestros propósitos políticos y de los procedimientos utilizados. No basta con creer que estamos usando de manera progresista ciertos conocimientos, pues estos conocimientos en sí mismos nos conducen hacia una dirección diferente. Los cambios no se hacen ni con proclamas, ni con buenas intenciones, se hacen con la articulación de prácticas diferentes. El camino se hace al andar, practicando nuevas formas de hacer, construyendo nuevas relaciones sociales.

Si la práctica que hemos desarrollado se fundamenta en los mismos principios ideológicos de dominación a los cuales nos intentamos

oponer, entonces no vamos sino por el camino de la enajenación. Por lo tanto para poder articular una práctica diferente, capaz de dar cuenta de nuestros propósitos sociales y políticos, y que genere los efectos buscados, es necesario partir de principios básicos diferentes. Es necesario construir nuestra práctica desde fundamentos distintos a los que hacen de ella un arma de dominación.

Para eso es necesario hacer algo que suele provocar resistencia entre los profesionales de la salud mental y es volver la mirada hacia los fundamentos de nuestros conocimientos, reflexionar y reformular los principios epistemológicos en torno a los cuales hemos construido nuestro saber. Me parece que esta reformulación debería rescatar la dimensión intrínsecamente política de la violencia. Las perspectivas que transforman el problema en un fenómeno privado nos están condenando de manera conservadora a la presencia constante de este fenómeno en nuestra vida cotidiana. XXI

NOTAS

- 1 Los argumentos centrales expuestos en este texto, forman parte del artículo "Efectos psicosociales de los Discursos Psicológicos en derechos Humanos" escrito por la misma autora y publicados en el libro "Subjetividad y Política: Diálogos en América Latina" editado por Elizabeth Lira e Isabel Piper. CESOC 1997.
- 2 He tomado algunas de las ideas desarrolladas por Moscovici en: Moscovici, S. Psicología de las Minorías Activas. Ediciones Morata. Madrid, 1981; y La Influencia Social Inconsciente: Estudios de Psicología social experimental. Serge Moscovici, Gabriel Mugny y Juan Antonio Pérez Eds. editorial Anthropos. Barcelona, 1991.

- 3 Estos mecanismos implicados en la emergencia de un punto de vista minoritario han sido investigados por Maass, A.: Minorías y Procesos de Conversión. En: La Influencia Social Inconsciente: Estudios de Psicología social experimental. Serge Moscovici, Gabriel Mugny y Juan Antonio Pérez Eds. editorial Anthropos. Barcelona, 1991.
- 4 La psicologización como resistencia a las influencias de las minorías ha sido mostrada por Papastamou, S. en: Psicologización y Resistencia a la Conversión. En: La Influencia Social Inconsciente: Estudios de Psicología social experimental. Serge Moscovici, Gabriel Mugny y Juan Antonio Pérez Eds. editorial Anthropos. Barcelona, 1991.



Tortura y torturadores.

Lesley Briceño Valencia
Universidad de Valparaíso

Para poder hablar sobre la tortura durante el gobierno militar, debemos remontarnos a la época de la Inquisición e incluso hasta el siglo XVIII cuando en Europa y el resto del mundo las medidas punitivas han ido suavizándose. Durante este período se aplicaron las más diversas técnicas de tortura. Los procesados eran considerados altamente peligrosos, por que atentaban contra el orden establecido. Y a su vez, el ser detenido era sinónimo de culpabilidad. El error que cometieron fue sublimar el valor de la verdad y considerar lícito cualquier vía para obtenerla. En este período, una vez que el acusado era determinado como tal, se le conminaba a confesar el motivo de su aprensión. De esta forma la confesión es buscada, es un elemento en el cálculo de la verdad, se acepta la acusación y reconoce su legitimidad, pero a la vez esta confesión debe ser ESPONTÁNEA.

Una vez detenido el individuo es inducido a decir la verdad (o una verdad aparente); todo este proceso tiende a la confesión. El cual es un elemento de cálculo de la verdad, acepta la acusación y reconoce su legitimidad; con ella el acusado toma su sitio en el ritual de producción de la verdad penal. Ella es buscada y, por lo tanto debe ser espontánea, y que cumpla con ciertos requisitos como que se formule bajo el tribunal correspondiente, etc. La confesión presenta una doble ambigüedad es un elemento de prueba v/s la contrapartida de información, es un efecto de coacción v/s una transacción semivoluntaria; y esto explicaría los dos medios que el derecho criminal clásico utiliza para obtenerla. Por un lado está el JURAMENTO, que se le pide prestar al acusado antes de su interrogatorio; y, por otra parte, la TORTURA,

que en una definición bastante general, podemos decir que es la «violencia física para arrancar la verdad que, de todos modos, para constituir una prueba, ha de ser repetida después ante el juez, a título de confesión espontáneo».

Las tácticas de tortura eran utilizadas solamente para lograr la confesión del acusado. La tortura es considerada en este período como un medio legítimo para la obtención de la verdad. La tortura es un método absolutamente distinto del suplicio. El primero busca la confesión y el segundo, el castigo por el delito cometido. La tortura es un medio para obtener la verdad.

El objetivo de la tortura es producir la verdad por un mecanismo de dos elementos: el de la investigación llevada secretamente por la autoridad judicial; y el acto realizado ritualmente por el acusado. La obtención de información de parte de la víctima, se realiza para doblegar su resistencia o asegurarse de su veracidad; quebrar su resistencia o entereza física o moral, atemorizar a otros que presenciaban u oían las torturas y también intimidar a terceras personas. De esta forma no sólo se está torturando a un individuo en particular sino que a toda la sociedad. Los malos tratos, es la expresión de la crueldad o de las bajas pasiones de un agente o guardia. También se aplicó como modo de dar muerte o de castigar a un detenido. A diferencia de la tortura medieval, la cual tenía un estricto orden de aplicación solo cuando el juez lo autorizaba y contaba con un riguroso orden a seguir respecto a tiempo de aplicación y la forma de hacerlo, la tortura aplicada en Chile fue una de las más crueles que se tenga conocimiento, pues no sólo era física sino que también psicológica, y

muchos de los torturados eran posteriormente utilizados como informantes de los mismos servicios de inteligencia.

Michel Foucault nos dice en su libro «Vigilar y Castigar.» acerca de la tortura, que es un tormento como suplicio de verdad, el tormento no es una manera para arrancar la verdad a toda costa, no es la tortura desencadenada de los interrogatorios modernos; es cruel, pero no salvaje. «Se trata de una práctica reglamentada, que obedece a un procedimiento bien definido: momento, duración, instrumentos utilizados, longitud de las cuerdas, peso de cada pesa, número de cuñas, intervenciones del magistrado que interroga, todo ello se halla, de acuerdo con las diferentes costumbres, puntualmente codificado. **La tortura es un juego judicial escrito**».²

Vemos así que la práctica de la tortura es tan antigua como la humanidad, cada período de la historia está marcado, de una u otra forma, por esta tan desprestigiada práctica. En algunos momentos este método fue reglamentado y es así como se tenían reglas específicas en relación a la ejecución de ellas en el cuerpo del condenado. La tortura es, durante la época medieval, la forma para obtener la confesión del supuesto delincuente.

En este artículo teníamos la inquietud de presentar parte de lo que fue este sistema represivo chileno; donde la tortura es la más grave de las violaciones a los derechos humanos cometida, pues como se sabe no tuvo diferencia entre el sexo o la edad de la persona y así nos encontramos con niños pequeños, familias enteras que han sido torturadas para lograr un único fin: **amedrentar**; y donde el torturador pasa a formar parte de un complejo juego de intereses, transformándose el mismo en una pieza más del plan. El sistema represivo utilizado por el gobierno chileno entre 1973 y 1989, tenía como objetivo la consolidación, sin oposición de un nuevo Estado, el autoritario; de un modelo económico, el neoliberal; y de un nuevo bloque dominante.

Qué es la tortura? Para el caso chileno, muchas entidades han dado una definición a esta tan brutal técnica de «obtención de información». La Comisión Nacional contra la Tortura, nos dice que es «una forma de violencia detestable que mantiene a la población aterrada e insegura, creando con su existencia serios obstáculos a la búsqueda de medios pacíficos y políticos para volver a disfrutar de una auténtica vida democrática en Chile»³. A su vez el Informe Rettig considera como actos de tortura: «todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarlo por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideraran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.»⁴

La Iglesia Católica, en unión con las demás Iglesias, condenó las violaciones a los Derechos Humanos llevados a cabo sistemáticamente por el gobierno militar. Es así como publicaron una serie de declaraciones con el fin de dar a conocer su postura frente a ella; por ejemplo la declaración realizada por Pablo VI y los Obispos del cuarto Sínodo, donde se respalda a las Iglesias de los diferentes países latinoamericanos que luchan animadas por la fe en el hombre y en Dios por crear condiciones que hagan posible el bien común⁵. En el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, publicado hace cinco años, se señala que «la tortura que usa de la violencia, física o moral, para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen o satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana»⁶. Es una práctica que daña

tanto al torturado como al torturador.

La tortura es aplicada con el fin de «aterrorizar a la población para someterla al Estado, y subordinar a ello el objetivo es también destruir al detenido, quien es considerado como un 'enemigo interno', manipulando a la población al demostrar y exhibir tal poder»⁷. Las torturas aplicadas en Chile como en el resto de América Latina, persiguen once objetivos: 1. obtener información para seguir un proceso judicial; 2. obtener información para usarla en operaciones inmediatas o posteriores de la 'guerra'; 3. obtener información sobre el enemigo (tipo de gente, hábitos, métodos de trabajo, idioma, organización, etc.); 4. obtener una confesión (extraer, más bien dicho); 5. neutralizar al detenido, a los grupos a los que él o ella pertenecen, al sector social al cual pertenece y de la población opositora en general; 6. obtener colaboración inmediata y/o permanente: transformar al detenido en colaborador; 7. destruir o quebrar al detenido; 8. castigarlo; 9. castigar, a través del detenido, a los grupos que pertenece; 10. también la detención y confinamiento, puede ser usada para provocar desconfianza y rupturas en el grupo a los que pertenece el detenido; 11. la información reunida es utilizada para manipular a la población.⁸

Hemos leído testimonios de torturados y nos ha impresionado su fuerza para salir adelante, sus ganas de vencer la adversidad y la vida que han reorganizado después de esta experiencia. Muchos de los testimonios sobre las torturas que se cometieron bajo el gobierno militar, se han publicado en los documentos de denuncia que difundieron las diferentes organizaciones de Derechos Humanos que actuaban tanto en Chile como en el extranjero; como por ejemplo, Amnistía Internacional, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos del Pueblo (CODEPU), o los documentos de denuncia que se publicaron respecto al tema en este período.

Estos testimonios nos entregan impac-

tantes relatos de lo que fue la represión en Chile y cuales fueron los métodos que se utilizaron. Principalmente, las técnicas que se aplicaron fueron en base a la tortura física: golpes; privación de agua, de comida, de ropa; posturas forzadas; quemaduras; aplicación de electricidad; violaciones; asfixia; ingestión forzada de agua u otro elemento; aplicación de drogas; simulacro de fusilamiento; presenciar la tortura de un tercero; etc. En el testimonio entregado por Patricia Herrero Mediavilla detenida el 18 de Diciembre de 1986, nos relata que: «cuando llegué a casa me abrieron la puerta cinco individuos de civil fuertemente armados. Inmediatamente comienzan a golpearme y me amordazan para que yo no pudiera pedir auxilio, me ponen las manos atrás y me esposan, me introducen en el living, me desvistieron y me vendaron la vista, me allanaron en forma morbosa y me empiezan a gritar groserías»; posteriormente es constantemente golpeada, trasladada de un centro de detención a otro, se le aplica electricidad, etc., pero ella no conoce el motivo de su detención; es obligada a firmar una confesión (de la cual no conoce su contenido) y es procesada por la fiscalía militar por asociación ilícita y por la ley antiterrorista.⁹

Más difícil nos fue encontrar testimonios de torturadores, y luego de leerlos nuestro impacto fue aún mayor. ¿Cómo personas tan normales se fueron convirtiendo en asesinos especializados? ¿Cómo simples miembros de las Fuerzas Armadas se transformaron, primero en carceleros, luego en torturadores y más tarde en asesinos?¹⁰

Pero, ¿qué es lo que lleva a una persona común y corriente a convertirse en un torturador? O mejor dicho ¿cómo una persona se convierte en un ser así, en un hombre capaz de seguir las órdenes de sus superiores hasta tal punto que produce daño a sus semejantes de una forma intencionada y premeditada? ¿El torturador es un sádico, un loco, o simplemente un hombre que cree en el sistema?

Los agentes del Estado que cumplen con este rol han sido seleccionados y educados a través de un proceso específico, por el cual el Estado detecta a los individuos que puede utilizar para tal fin. El proceso de selección, por razones obvias, no es al descubierto; pues el torturador es una función que cada gobierno posee, pero que ninguno admite poseer. Principalmente son elegidos entre los miembros de las Fuerzas Armadas. Cada vez que los soldados son evaluados tanto física como sociológicamente durante su entrenamiento, se obtiene los resultados en relación a una serie de tópicos como por ejemplo cual sería su reacción frente a una matanza o como mejorar su puntería e incluso como sobreponerse a la traumática experiencia de un campo de prisioneros. Así los principales ejércitos del mundo se han esforzado para disociar las emociones de las situaciones de violencia a las que están expuestos; saber que soldados valoran más la vida ajena que la propia o la de ellos por sobre la de la mayoría, siendo estos últimos civiles o militares.

En el libro «Guerra, persona y destrucción. Usos militares de la psiquiatría y psicología.» del profesor Peter Watson, se nos muestra una serie de estudios que realizó el autor con el fin de obtener la información necesaria sobre las investigaciones que realizan, sobre todo, el ejército norteamericano para obtener los mejores resultados de sus combatientes en una batalla o frente a otras situaciones. Se hace mención a un estudio realizado por el doctor Sigmund Streufert, del departamento de psicología de la marina estadounidense, el cual preparó un estudio de 135 preguntas, a través de las cuales es posible distinguir a los elementos más propensos a la violencia. Reproducimos a continuación parte de ese cuestionario: «muestro de preguntas del cuestionario sobre la valorización de la vida (el sujeto debe indicar hasta que punto está o no de acuerdo con cada enunciado).

1. - Si un paciente terminal pide morir, uno debe cumplir sus deseos.

2. - En tanto y cuanto alguien muestre los más leves signos de vida, la ciencia debe prolongar la vida.

3. - Ninguna persona cuerda y decente podría jamás pensar en lastimar a un amigo cercano o a un pariente.

4. - El aborto nunca se justifica porque el feto, a pesar de todo, es una vida humana.

5. - La obediencia y el respeto a la autoridad son las virtudes más importantes que un niño debe aprender.

6. - El único grupo en el mundo con permiso para tener armamentos debería ser una fuerza policial internacional.

7. - La venganza por lo general es justificada: ojo por ojo, vida por vida.

8. - Sería un procedimiento muy peligroso el que toda persona en el mundo tuviera iguales derechos y que los mismos estuvieran garantizados por una carta internacional.

9. - La mayoría de nuestros problemas se solucionarían si de alguna manera pudiéramos sacarnos de encima a los inmorales, a los deshonestos y a la gente con mentalidad enfermiza.

10. - Una persona estaría mejor muerta que llevando una vida decididamente inmoral.

11. - En realidad nadie aprende nada importantes si no es a través del sufrimiento.

12. - Si un hombre le apunta con algo que está dentro de su bolsillo, y suponiendo que éste tenga un arma, usted debe disparar primero y preguntar después.

13. - La mayoría de la gente no se da cuenta en que medida nuestras vidas son controladas por tramas que se manipulan en lugares secretos.

14. - El cuerpo de una persona es inviolable, aún después de muerto.

15. - Es mejor tener algunas autoridades nazis en el gobierno alemán, para mantener el orden y prevenir el caos.»¹

Estas preguntas intentan definir cuatro patrones de actitudes; primero, la preocupación por el castigo agresivo v/s la rehabilitación de los criminales; segundo, la preocupación por la moralidad; tercero, la preocupación sobre si la vida humana debe sacrificarse por una causa fuera de lo común; y cuarto, la

preocupación sobre el derecho a morir de un individuo si las circunstancias son desfavorables.

Otro psicólogo, el doctor Thomas Narut, del Hospital Naval estadounidense, en su cuartel general de la OTAN en Nápoles (Italia), realizó un estudio donde se entrenaba a los hombres a sobreponerse al stress de matar. Este proceso contaba con tres aspectos: Selección, entrenamiento para reducir el stress y deshumanización del enemigo.

Ambos estudios (del doctor Streufert y Narut) apuntan a la selección y entrenamiento de asesinos para hacer 'trabajos especiales'. De esta forma «lejos de usar la investigación para evitar las atrocidades que pudieran ocurrir en el futuro, parecería que están siendo estudiados para aprender más sobre cómo matar y para entrenar gente que lo haga con mayor profesionalismo»¹².

Ha habido un entrenamiento tanto teórico como práctico para oficiales; se sabe que hay cursos especializados que son dados por expertos acerca de cómo sacar información con el uso de torturas físicas y psicológicas. Es allí donde los torturadores chilenos y, por qué no decirlo también del resto de Latinoamérica, han aprendido las técnicas más sutiles para la creación del dolor, un dolor medido y reglamentado, donde su fin no es matar sino que provocar temor entre la población. Por ejemplo existe información sobre cursos especializados y de for-

mación, en el tema de la tortura, en la zona del canal de Panamá, Brasil, Sudáfrica, etc. Ellos están conscientes de este entrenamiento, es más creen en él debido a que es la única forma para derrotar al enemigo.

En «El Diario de Caracas», apareció en diciembre de 1984 una entrevista al agente del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) Andrés Valenzuela Morales. Este agente formaba parte de un comando represivo que actuó directamente en la detención, tortura, asesinato y desaparecimiento de varios detenidos desaparecidos. «Sin querer queriendo me fui transformando», esto fue lo que susurró a la periodista que lo entrevistaba, relata su experiencia de cómo sufrió su transformación desde carcelero hasta asesino. «Yo diría que al principio cuando uno empieza, primero llora, escondido, que nadie se da cuenta. Después siente pena, se le hace un nudo en la garganta pero ya soporta el llanto. Y después, sin querer queriendo, ya se empieza a acostumbrar. Definitivamente ya no se siente nada de lo que se está haciendo».¹³

Así el torturador ya no es un sádico o un loco o un psicópata, sino que es un funcionario más del sistema represivo; «hace su trabajo y está convencido de lo que hace: obtener información, quebrar al enemigo, es un acto normal, que muchas veces es premeditado y calificado como heroico»¹⁴. XXI

NOTAS

- 1 Michel Foucault. Vigilar y castigar: el nacimiento de las prisiones. Siglo XXI editores. México, 1987. Página 45.
- 2 **Michel Foucault. Ob. Cit. Página 46. (El destacado es nuestro).**
- 3 Tortura (¡Jamás! Tortura en Chile en el informe Volio. Comisión Nacional contra la Tortura. Santiago, Mayo de 1986.
- 4 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago, Febrero de 1991. Volumen 1, tomo 1, primera parte, capítulo 2, página 25.
- 5 S.S. Pablo VI. Derechos humanos y reconciliación. Roma, noviembre de 1974.
- 6 Catecismo de la Iglesia Católica. Editorial LUMEN S.R.L. Uruguay, 1993. Tercera parte, segunda sección, capítulo 2, artículo 5, punto 2, página 512, N1 2297.
- 7 Inger Agger y S'ren Jensen. Trauma y cura en situaciones de terrorismo de Estado. Derechos humanos y salud mental en Chile bajo la dictadura militar. Ediciones Chile-América CESOC. Santiago, septiembre de 1996. Página 140.
- 8 Ibid. Página 140 - 141.
- 9 Testimonio de Patricia Herrero M. (4 de marzo de 1987). En: La situación de los presos políticos en Chile. Comisión chilena de Derechos Humanos. Santiago, Octubre de 1990.
- 10 Para que nunca más en Chile. Comisión chilena de derechos humanos. Santiago, diciembre de 1984.
- 11 Peter Watson. Guerra, persona y destrucción. Usos militares de la psiquiatría y de la psicología. Editorial Nueva Imagen. México, 1982. Página 144 - 145.
- 12 Ibid. Página 148.
- 13 ... para que nunca más en Chile. Comisión Chilena de Derechos Humanos. Santiago, diciembre de 1984. Página 22.
- 14 Inger Agger y S'ren Jensen. Ob. Cit. Página 144.

BIBLIOGRAFÍA

Inger Agger y Sören Jensen

Trauma y cura en situaciones de terrorismo de estado. Derechos humanos y salud mental en Chile bajo la dictadura militar. Santiago, septiembre de 1996.

Catecismo de la Iglesia Católica.

Uruguay, 1993.

Comisión chilena de derechos humanos.

... Para que nunca más en Chile. Santiago, diciembre de 1984.

Comisión chilena de derechos humanos.

La situación de los presos políticos en Chile. Santiago, Octubre de 1990.

Comisión Nacional contra la Tortura.

Tortura ¡Jamás! Tortura en Chile en el informe Volio. Santiago, Mayo de 1986.

Foucault, Michel

Vigilar y Castigar: el nacimiento de las prisiones. México, 1987.

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Santiago, Febrero de 1991.

Pablo VI.

Derechos humanos y reconciliación Roma, noviembre de 1974.

Watson, Peter

Guerra, persona y destrucción. Usos militares de la psiquiatría y de la psicología. México, 1982.

La Represión. Una Contribución Histórica.

María Teresa Sánchez Della Chiara
Universidad de Valparaíso.

Al analizar la coyuntura política, a propósito de la llegada de Augusto Pinochet al Parlamento, tras dejar la comandancia en jefe del ejército, según lo dispuesto por la Constitución de 1980, nos damos cuenta que tras 25 años de la instauración de la dictadura militar, en nuestro país existe un grave problema en nuestra memoria histórica respecto de 1973, sobre todo en lo que respecta a los acontecimientos que rodearon la actuación de los uniformados con posterioridad al Golpe militar en materia de derechos humanos. Vale decir a los miles de muertos, detenidos desaparecidos y torturados por el régimen que comandaba Augusto Pinochet.

Sin perjuicio de lo anterior dicha situación no nos resulta del todo extraña si consideramos el profundo cambio estructural que causó el gobierno militar en la sociedad chilena, cambio que caló en lo político, económico y más aun en su visión de mundo, trastocando la identidad nacional. Sembrando en el país un extenso velo de terror que mantenía a la ciudadanía en el más indeseable de los miedos. Es por esto que nos resulta sumamente necesario mirar atrás, de cara a la historia, para entender que la coyuntura actual no es más que el necesario reflejo de una situación que aún hoy no a concluido y que es producto de las políticas de represión que adoptó la dictadura militar como una forma de consolidar su régimen mediante la eliminación del «enemigo interno» que supelemente podría rearticularse.

Importante es que las nuevas generaciones sepan que existió una política de Estado represiva, donde la represión organizada institucionalmente surgió como parte del Gobierno, impuesta como una necesidad de este

para afianzar el régimen, que por ende destruyó la tradición democrática que caracterizó, enorgulleció y distinguió por casi medio siglo a los chilenos.

Fue así entonces como el proyecto socialista de 1970 con un Estado democrático, generador de bienestar público, fuente de equilibrio de los poderes, estabilizado entre el consenso y la coacción, fue completamente desmantelado y avasallado por una nueva forma de Estado, a la cual M. Carranza denomina: "Estado de Excepción en su forma de dictadura militar", que asume políticas de terrorismo de Estado dirigidas a la eliminación de la disidencia, adoptando para esto la Doctrina de Seguridad Nacional, «introducida» que se caracteriza por ser aplicada por regímenes autoritarios en zonas de influencias norteamericanas que pertenecen a áreas del capitalismo periférico, y que centran sus medidas represivas contra un enemigo interno en un contexto de guerra latente. La represión organizada de la dictadura militar ha sido un tema abiertamente eludido y acallado. Dicha situación se demuestra tanto en el periodismo como en el grave vacío historiográfico que al respecto existe.

De acuerdo a la información recopilada podemos decir que la represión de la cual fue objeto Chile desde 1973 hasta 1989 cuenta básicamente con dos características centrales:

1° La represión en Chile fue producto de una política de Estado que contaba con un objetivo y una estrategia clara y elaborada.

América latina desde 1966, con el golpe militar en Brasil, debió afrontar la difícil situa-

ción que los reiterados golpes de Estado en el continente causaron a la democracia, lucha que adquiere coherencia si la entendemos dentro del contexto global del que se desarrollan los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que llevaron al planeta a una división muy clara entre dos bloques de poder.

Como sabemos Chile respondía al área de influencia establecida por Estados Unidos en pro de sus intereses, influencia que fue determinante en el desarrollo político de dichas naciones ya que se perfiló entre otras cosas como un factor importantísimo de cooperación con la derecha y los militares para favorecer a los golpes militares en la zona, aportando no solo con ayuda material sino con un fuerte influjo ideológico que determinó por ejemplo un marcado antimarxismo y la entronización de la Doctrina de Seguridad Nacional.

La fuerte influencia norteamericana, tanto ideológica como material, la evolución que el Ejército chileno venía teniendo, sumado a la tensa coyuntura política que enfrentaba hacia 1973, precipitaron el golpe de Estado y la instauración de una dictadura militar que se prolongó por 17 años. Estos acontecimientos no se produjeron ni por azar ni a modo de casualidad sino que muy por el contrario como fruto de la más elaborada conspiración que contó con una acuciosa elaboración estratégica con objetivos claramente establecidos en lo que respecta a las políticas de represión y aniquilamiento. Lo descrito anteriormente se refleja, en la rapidez, precisión y coherencia con que actuaron los uniformados el 11 de septiembre, en el golpe, en los días posteriores y durante todo el tiempo que duró su gobierno.

La planificación anteriormente expuesta dará origen en 1974, el 14 de Junio, mediante el Decreto de fundación N° 521, según lo dispuesto en los Decretos Leyes N° 1 y 128 de 1973 y considerando «la necesidad de que el Supremo Gobierno tenga la colaboración inmediata y permanente de un organismo especializado

que le proporcione en forma automática y debidamente procesada la información que requiere para adecuar sus resoluciones en el campo de la seguridad y desarrollo Nacional» a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. El Decreto ley contenía 11 Artículos, tres de los cuales los números 9, 10 y 11, fueron contenidos en un artículo único transitorio, publicado en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial del cual hasta hoy se desconoce su contenido, ya que jamás fue dado a conocer a la opinión pública. Los demás Artículos dicen relación con la orgánica, las facultades y el financiamiento.

Las funciones principales de la DINA apuntaban directamente al «enemigo» mediante la recopilación de una gran cantidad de información que permitiera reconocer sus acciones, desmantelarlos y difundirle miedo, e incluso con acciones en el extranjero como el proyecto «Cóndor» proyecto de cooperación anticomunista del Conosur en el cual participaban Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Para lo cual se valían abiertamente de inhumanas sesiones de ablandamiento o tortura, habilitado lugares especiales en todas las regiones, siendo entre otras las más conocidas Tejas Verdes, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Alamos y Colonia Dignidad por mencionar algunas. Su dirección estaba al mando del entonces coronel Manuel Contreras, quien tenía como subalterno directo al actual brigadier en retiro Pedro Espinoza ambos uniformados dependían directamente del Presidente de la República, el general Augusto Pinochet U.

Dicha institución se encargó así de violar no sólo los Derechos Humanos de los chilenos sino que además sobrepasó acuerdos internacionales en la materia, transgrediendo por ejemplo, el Artículo 5° de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos de la ONU, el Artículo 7 de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de San Juan de Puerto Rico y la Declaración Americana de los Derechos Humanos, entre otros.

La DINA actuó en Chile hasta 1977 momento en el cual se multiplicaban las voces críticas a este organismo, en tanto se les vinculaba a las continuas evidencias de violaciones a los Derechos Humanos acaecidas y al asesinato en Washington, en una céntrica avenida repleta de Embajadas, del Ex Canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronny Mofitt, trayendo consigo un gran repudio internacional. A lo anterior, se suma la odiosidad que Contreras y los suyos habían sabido ganarse no sólo entre sus víctimas sino que también entre los uniformados por sus excesos en todo sentido y por la arrogancia con que se desenvolvían como «los niños mimados del Presidente». Recordemos que Contreras era sólo un coronel pero por su condición de jefe del Servicio de Inteligencia del gobierno sobrepasaba a todos, incluidos los generales.

Fue así, en base a las razones anteriores, que mediante el decreto Ley N° 1876 que dice, «considerando: la conveniencia de estructurar de acuerdo a las actuales circunstancias del acontecer nacional las atribuciones de un organismo creado en situación de conflicto interno y superado, la Junta de Gobierno de la República de Chile acuerda dictar el siguiente Decreto Ley: Artículo Unico.- Derógase el Decreto ley 521, de 1974, que creo la Dirección de Inteligencia Nacional». Creando así inmediatamente mediante el Decreto Ley N° 1878 a la Central Nacional Informaciones (CNI), decreto que constaba de 11 Artículos más uno transitorio.

Entre la DINA y la CNI existe solamente una gran diferencia y es que el Presidente de la República ya no podría servir más de la institución de inteligencia directamente ya que la segunda, dirigida por el general Odlanier Mena no dependería del Presidente de la República.

La represión organizada y dirigida por el Estado chileno, entre 1973-1989, como una forma de perpetuarse y consolidarse en el poder, se

caracteriza por generar políticas represivas, como ya señalábamos anteriormente que no solamente crea organismos de inteligencia con plenitud de facultades y libertad de acción, sino que además una serie de leyes, decretos, artículos, etc., que amparados en la declaración de Estado de sitio, confería al Presidente de la República facultades extraordinarias como por ejemplo prohibir o impedir la estadía o el ingreso al país, prohibir reuniones, restringir el derecho de información, obligando a la ciudadanía a someterse a las leyes de justicia militar.

2° La Represión en Chile no fue un proceso homogéneo en lo que se refiere a intensidad, estrategia y objetivos.

Resulta interesante conocer que en Chile existieron fases dentro del proceso represivo, tema que a pesar de su importancia a sido muy poco estudiado y evaluado. Es por esto que proponemos, de acuerdo a nuestro análisis, que las coyunturas y las necesidades políticas de la dictadura jugaron un rol determinante en la adopción de políticas represivas ya que estas variaron de acuerdo a las circunstancias.

Respecto a lo anteriormente señalado la primera etapa abarca desde el golpe militar hasta la creación de la DINA. En este período el gobierno militar se vio en la «necesidad» de apresar, torturar y fusilar a una gran cantidad de demócratas para extraer información y elaborar redes de inteligencia que les permitieran desmantelar los tejidos sociales. Esta etapa se caracteriza por ser masiva y desorganizada no por falta de objetivo o estrategia, sino por carecer de un organismo de inteligencia centralizado.

La estrategia que asume la dictadura en esta etapa pasa por la centralización del mando, centralización que una vez logrados los objetivos es encabezada por A. Pinochet, como jefe de la Junta Militar. Para dichos propósitos se valieron en una primera etapa de los servicios de inteligencia de las FF.AA. y de Carabineros como son: el Servicio de Inteligencia mi-

litar (SIM), Servicio de Inteligencia de las Fuerza Aérea (SIFA), Servicio de Inteligencia Naval (SIN), Dirección de Inteligencia de Carabineros (SICAR) y el Servicio de Inteligencia de Investigaciones, destacándose entre ellos la SIFA por el alto grado de especialidad que tenían en la aplicación de torturas. Dichos organismos dependían indistintamente de sus instituciones de origen y no contaban con una planificación central que las coordinara.

Ante esta carencia, el 14 de Junio de 1974, se creó la DINA, que dependió directamente de A. Pinochet y que representó la dirección centralizada de los aparatos de inteligencia otorgando un carácter mucho más selectivo a la represión y un corte institucional que los ampara en la legalidad, pero que no los aparta de la ilegitimidad por el tipo de conductas en las que incurren, entre otras, allanamientos, encarcelamientos, torturas; conductas que ya para 1976 han logrado impedir la incapacidad de rearticulación del movimiento político y social a través de la desestructuración de los partidos políticos, con la persecución y el aniquilamiento mediante la cárcel, el exilio o la muerte de sus militantes impidiendo así cualquier posible foco de resistencia.

En 1976 se inició otra etapa, en este contexto se entronca la creación y sustitución de la DINA por la CNI, pretendiéndose dar un cariz diferente al servicio de inteligencia del gobierno, ya que técnicamente este servicio había accedido a un gran nivel de tecnología tanto al interior como al exterior del país, contando con una gran capacidad de acción y con la necesidad de hacer mucho más selectivo el trabajo. Será así como en 1979 se ponga a prueba nuevamente a la CNI cuando deba reprimir la llamada «operación retorno», que consistía en el ingreso clandestino de importantes cuadros de refresco para la resistencia. Otro hito que atraviesa por esta etapa y que le dará fin ocurre en

1983 con el surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo capaz de sortear la represión, logrando articularse.

La siguiente etapa está atravesada por la severa recesión económica que aqueja al país desde 1982, tanto por razones exteriores como por la instauración, desde 1976 del modelo económico neoliberal, en reemplazo del modelo de sustitución de exportaciones, lo cual provocó en el país elevadísimos índices de pobreza y desempleo que exasperaron a la ciudadanía.

En 1986 se inició otra etapa como producto de la combinación de varios elementos, entre ellos el fallido intento de tiranicidio, el fracaso del paro nacional de julio, la llegada a la presidencia de la democracia cristiana de Patricio Aylwin con una postura proclive al pacto y la negociación con los militares y al fortalecimiento del socialismo dirigido por R. Nuñez. La decomización e incautación - por otra parte - de las armas de Carrizal Bajo, lo cual dejó sin efecto la posibilidad insurreccional, y por último, la salida del PS (Almeyda) del MDP, dejó a los militares en una irremediable situación. Esta fase se caracterizará por ser menos masiva y más selectiva y por mantenerse hasta los últimos días del régimen.

Otra de las características principales de la represión organizada por la dictadura militar fue el nulo respeto por los Derechos Humanos y la alta ferocidad y ensañamiento con que se trató a los compatriotas que participaron no solo activamente de la Unidad Popular, conductas que no tienen ningún parangón en la historia de Chile, a no ser que recordemos los tiempos de Conquista y Colonia con el maltrato y aniquilamiento de los indígenas; ya que no es ni comparable ni con la revolución de 1891 ni con los problemas políticos de 1924, lo cual contribuyó en buena parte a que los chilenos tuvieran casi cero conciencia del significado del concepto «represión» XXI

BIBLIOGRAFIA

1) Alan Angell : *Chile de Alessandri a Pinochet, en busca de la utopía. Santiago, 1993.*

2) Mario Esteban Carranza : *Fuerzas Armadas y Estados de Excepción en América Latina. Siglo XXI Editores, México, 1978.*

3) Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. *Informe Rettig. Santiago, 1991.*

4) Francis Guibal : *Gramsci filosofía, política, cultura. Lima 1981.*

5) Patricio Quiroga : *Fuerzas armadas y violencia: las fases de la represión en Chile. Berlín, 1981.*

6) María Eugenia : *La Represión Política en Chile: los Hechos. Madrid 1988.*

7) Jorge Tapia : *Estrategocracia, el gobierno de los generales. Santiago, 1986.*

8) Vicaría de la Solidaridad. *Cuadernos Jurídicos, 1977. Revista Hoy, 1998.*



Las jornadas de protesta nacional Historia ,Estratagias y Resultado (1983- 1986).

Patricio Quiroga Z.
Universidad de Valparaíso

I) Presentación. - Durante diez años el Estado de excepción (1) contuvo toda clase de disidencia, eliminándola o relegándola a la clandestinidad, el exilio, o el autosilencio. Pero, el 11 de mayo de 1983, entró en erupción un volcán que pronto se transformó en la fuente de energía social sobre la cual se cimentaron opciones estratégicas, temores, sueños de poder y ansias de recuperación democrática. La oposición pasaba a la ofensiva. Los trabajadores del cobre recuperaban la iniciativa a través de las «Jornadas de Protesta Nacional» (JPN). En sumario se señalaban:

... « nuestro problema no es una ley más o ley menos, o de una modificación u otra de lo existente, sino que es mucho más profundo y medular. Se trata de un sistema completo económico, social, cultural y político que nos tiene envueltos y comprimidos que se contradice con nuestra idiosincracia de chilenos y de trabajadores».

Las Jornadas de Protesta Nacional (2), de las cuales se cumplen ya 15 años, representan un hecho histórico trascendente, porque sacando a la oposición del reflujo político, inauguraron el proceso que culminó en 1989 con el inicio de la transición a la democracia. En efecto, hacia 1983 las organizaciones democráticas habían pasado las fases de sobrevivencia y reconstrucción, tardándose la implementación de estrategias. La actividad política estaba limitada a la clandestinidad, a los núcleos más golpeados por el Terror de estado, a movimientos

sociales que penosamente se reconstruían y a la actividad del exilio. El paro y la huelga nacional eran objetivos aún en exploración, no obstante desde los partidos políticos se realizaban denodados esfuerzos por llevar adelante sus líneas. Desde los grupos más afectados por la represión se levantaban organizaciones como la de los Familiares de los Detenidos-Desaparecidos y Mujeres por la Vida. En el mundo del trabajo, entre otras, afrontaban la reconstrucción de los destruidos tejidos sociales la Coordinadora Nacional Sindical y la Confederación Campesina e Indígena Nehuén. La flama de la rebeldía estaba presente, pero no encontraba salida, no obstante el empeño y sacrificio en medios y militantes.

El epitafio puesto a la languidescente Unidad Popular, la irrupción de la discrepancia entre ortodoxos y renovados, la derrota guerrillera del MIR en Neltume y la imposición de la Constitución de 1980, sumieron en la crisis a la vieja izquierda. Mientras tanto, la Democracia Cristiana se debatía entre tres proyectos contrapuestos, el de la cooptación con el régimen militar, el de la ruptura negociada y la propuesta de acción por la base (3). Ergo: no existía una estrategia unitaria. Primaba la razón de partido. Ahora bien, aquí radica, sin lugar a dudas, la importancia de las Jornadas de Protesta Nacional porque sorprendiendo al autoritarismo y sobrepasando a los partidos políticos, los movimientos sociales sacaron a la disidencia del encapsulamiento, logrando movilizar a los actores de contra-poder, en una

coyuntura confusa en la que numerosos intelectuales comenzaban a valorar la «refundación» de la sociedad chilena. Acto seguido, las Jornadas de Protesta Nacional paralizaron Santiago, silenciaron Arica, agitaron Rancagua y rechazaron con el «puntarenazo» la visita a esa ciudad del capitán general, Augusto Pinochet. En suma, desde el polvo calameño, la llovizna valdiviana y el sol viñamarino, se levantó la exigencia de libertad.

II) La teoría. - Pero, antes de continuar el balance histórico se propone desde una perspectiva teórica: a) reconocer la importancia que tienen los estudios del tiempo presente, b) acudir a la complementariedad metodológica, y c) resaltar la relación entre proceso histórico y estrategia política.

Respecto al estudio de la historia del tiempo presente se hace necesario constatar que (habidas excepciones) en nuestra historiografía prima un tipo de positivismo (decimonónico) que aboga por la lejanía del hecho histórico antes de emprender su reconstrucción, negando así el carácter de ciencia de la disciplina. Pero, el historiador, como cualquier cientista social, está capacitado (teórica y metodológicamente) para analizar su entorno, encontrando así sentido la propuesta del Prof. J. Fontana en el orden de señalar que la historia es la disciplina del estudio del pasado que permite comprender el presente y elaborar prognosis (4). Contexto en que cobra particular importancia la propuesta del historiador S. Flores en el sentido que no es necesario, «poner entre el pasado y la actualidad un tiempo de reposo o distanciamiento para que el historiador pudiera investigar» (5).

Ahora bien, para dar forma historicista a esta reflexión, hemos optado por la complementariedad metodológica, subordinando a la teoría crítica, lo que P. Burke denomina como nueva historia narrativa (6), o sea, el acercamiento entre narrativa y análisis de estructuras. De la teoría crítica tomaremos tres aspectos fundamentales: movimiento, dinámica y

holismo con el fin de entender el proceso, sus rupturas y la globalidad, y con el afán de reforzar la exposición acudiremos a la narrativa y al análisis de las estructuras, agregando el enfoque polemológico (teoría del conflicto) atendiendo a las operaciones (estrategias) y resultados (cambios) protagonizados por los actores. Se trata de encontrar la lógica historicista, esa «lógica diferenciada» que reclama E.P. Thompson (7), la lógica del «aparente caos» del movimiento humano, aquella apropiada a los fenómenos que están en constante movimiento.

Finalmente, si entendemos que la estrategia política es la ciencia-arte de dirigir, distribuir y coordinar fuerzas y medios para lograr un objetivo trazado de antemano, tendremos la clave para la medición del plan general del enfrentamiento midiendo comparativamente entre los actores la correlación general, los medios disponibles y la ubicación en el escenario de la confrontación. Desde esta perspectiva consideraremos como aspectos estratégicos de la coyuntura: la lucha por el aislamiento (nacional e internacional) del régimen militar, la política de alianzas, el desarrollo de la fuerza político-social, los niveles de organización, la posición política, el desarrollo de una fuerza dirigente y el estado de ánimo de los actores.

III) La Historia. - A continuación, apoyándonos en la técnica del relato-síntesis enfocaremos los aspectos medulares de las Jornadas Nacionales de Protesta.

Cuando, el 21 de abril de 1983, el congreso de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), llamó a organizar una Jornada de Protesta Nacional contra el gobierno militar, se puso en marcha un episodio histórico de insospechadas consecuencias incluso para los convocantes del acto, porque a partir de la primera JPN (11, mayo, 1983) la sociedad chilena entró en una nueva modalidad de articulación de los actores ante el conflicto, modificándose el marco político-nacional, hecho posible porque existían factores como el repudio a diez años

de Estado de excepción, la pertinencia en la memoria de los vencidos del sistema democrático, la fractura del frente autoritario, y la crisis del modelo económico (8), quebrantado desde 1982. Al respecto es necesario recalcar que la Protesta tuvo un componente importante en el estado de ánimo de una ciudadanía que mantenía en su memoria la idea democrática. De manera que como señalaban los trabajadores del cobre había llegado... «el momento de ponerse de pie y decir BASTA», comenzando un nuevo capítulo para el movimiento democrático.

La convocatoria de la CTC era del más tradicional orden político pues en las mentes de los dirigentes rondaba el llamado a Paro Nacional, aspiración imposible de concretarse, debido al corte de la relación entre los partidos y los movimientos sociales. Radicando allí su transformación en JPN y en el detonante que condujo a la re-politización de la sociedad civil (9). Circunstancias bajo las cuales vale la pena preguntarse ¿cómo un paro nacional fracasado y convertido en JPN logró tanta trascendencia? ¿la re-politización de la sociedad civil corresponde, entonces, a una sensación nacional de fastidio con el ejercicio del poder por los militares? En efecto, la primera Jornada de Protesta Nacional recogió un estado de ánimo adverso al gobierno militar transformando la disidencia soterrada en una abierta oposición demandante de cambios políticos. La jornada elevó a la oposición a calidad de actor nacional e incluso catapultó la constitución del Comando Nacional de Trabajadores (CNT), contribuyendo a la reconstrucción de la sociedad civil. Ahora bien, desde el punto de vista de la estrategia política la JPN demostró que: el disenso era posible, que los partidos políticos habían sido rebasados, que los movimientos sociales no tenían estrategia de cambio y que los militares habían sido sorprendidos.

La segunda Jornada de Protesta Nacional (14, junio, 1983), llamada por el movimiento sindical, consolidó una nueva forma de enfrentamiento al autoritarismo, pero el actor

convocante, tributario de un precario liderazgo, debió buscar el apoyo de organizaciones políticas como la Multipartidaria y el Proyecto Democrático Nacional (PRODEN), rearticulándose los nexos entre el movimiento sindical y los partidos democráticos para enfrentar activa y coordinadamente a la dictadura. El movimiento sindical, ajeno a la idea de negociación, intentó nuevamente la convocatoria a un paro nacional indefinido, con un consiguiente fracaso a consecuencia de la debilidad sindical, la censura, la represión y la defeción del gremio del transporte. Pero, a pesar de los reveses había comenzado la transferencia de su capacidad de convocatoria hacia los partidos con la consiguiente reaparición de la competencia.

Ahora bien, estratégicamente la fusión de los intereses del movimiento social, del PRODEN y la Multipartidaria indicó la presencia de sectores que presionaban para una rápida negociación (centro), también quedaba de manifiesto la debilidad de la izquierda (sorprendida por los acontecimientos) y la confusión en la respuesta autoritaria.

La debilidad del movimiento sindical permitió que la tercera JPN (12, julio, 1983) pasara a manos de los firmantes del Manifiesto Democrático (10), alianza a la que adhirió el CNT. A partir de este momento se reconstruyó el PDC y la alianza de centro fundándose la Alianza Democrática (AD), quedando sellado el desplazamiento del movimiento sindical por partidos políticos en reconstrucción y nuevos actores también provenientes del movimiento social: pobladores, estudiantes, profesionales, dueñas de casa, empleados... proliferando organizaciones de base como el Movimiento por la Dignidad, el Secretariado de las Organizaciones Sindicales de Base, la Coordinadora de Organizaciones Sociales Populares, los Comandos de Protesta, etc. La sensación de desperfilamiento gubernamental engrosaba las filas de la Protesta, vacilando bases de apoyo del autoritarismo como el comercio detallista y el transporte ca-

mionero. A nivel estratégico-político pudo constarse que el gobierno pasaba a la contraofensiva a través de la censura informativa, allanamientos, detenciones, relegaciones despidos y toque de queda, que el centro no había decantado aún una estrategia de transición explorando el diálogo sobre una base puramente espontánea y que la izquierda era incapaz de implementar sus diseños estratégicos.

Ahora el balance. Las tres primeras JPN convocadas por movimientos y partidos en proceso de reconstrucción pecaron de subjetivismo y sobrevaloraron la capacidad de convocatoria. Situación que obligó a considerar, en la perspectiva del Paro Nacional, a la JPN como una estrategia intermedia sustentada en actores políticos y sociales fragmentados que debieron buscar en la unidad y lucha la construcción de su fuerza, perspectiva posible por la aparición de *nuevo estado de ánimo y nuevas formas de lucha*. Por otra parte no puede omitirse del balance, la respuesta gubernamental. Pasemos al relato. El gobierno militar respondió con censura y represión; aunque en la primera JPN jugó la carta de la desmovilización confiando en los efectos de diez años de Miedo (11). Ante la eventualidad acentuó la imagen de un enemigo propulsor del «caos, la anarquía y la violencia marxista». Fracasado en el intento, enfrentó la segunda JPN acudiendo a la represión abierta. Vano intento. Porque en cada acto participaron los más diversos sectores de la población: sindicatos, profesionales, dueñas de casa, pobladores, trabajadores públicos y privados, etc. Las expresiones de descontento serían múltiples e inéditas, en las mañanas arreciaban los «viandazos», las protestas de abogados y otros profesionales en los Tribunales de Justicia, las asambleas y mitines estudiantiles. En horas de la tarde se observaba una notoria disminución del flujo vehicular y la ausencia de escolares en sus centros de estudio, luego el estridente sonido del «caceroleo», para finalmente, en horas del crepúsculo, cubrirse Santiago del crepitar de fogatas y barricadas.

La población que protestó vivió un clima «festivo», producto del mutuo reconocimiento de los manifestantes en un lugar común que rompía con el arrinconamiento y aislamiento de la política arrojada al marco del grupo familiar y/o a la ilegalidad. Simultáneamente se produjo la re-politización de la sociedad civil, experimentándose la pérdida del Miedo por la reapertura de la comunicación social. La protesta permitió articular una forma de lucha altamente comunicativa y participativa sobrepasando la lucha orgánico-individual y solitaria de la clandestinidad. El rango de las conductas varió entre la población en general y los grupos de mayor politización, aunque ningún grupo social logró articular una estrategia coherente; por lo tanto, el espontaneísmo sobrepasó con largueza la conducción del movimiento. Pero, a pesar de carencias y vacíos, las tres primeras JPN impulsaron la participación a amplios sectores de la nación, sacando el conflicto por la democracia a la calle.

La Protesta cambió el clima nacional. Sin convocatoria igual se manifestaba. En otras palabras, las JPN eran largamente precedidas por formas diversas de enfrentamiento con el Poder. De hecho, entre la tercera y la cuarta jornada la sociedad chilena se polarizó. Los sectores democráticos estaban ganando presencia, produciéndose manifestaciones frente a la Biblioteca Nacional (Santiago), en los campus universitarios (UC/Pedagógico) y fábricas, las mujeres articulaban diversas formas de protestas, fundando la MEMCH 83'. También copaban las calles profesionales y familiares de la agrupación de detenidos-desaparecidos, estado de cosas ante el cual el gobierno intentó bajar la presión social, liberando a dirigentes detenidos y anunciando el retorno de exiliados. Medidas complementadas por el anuncio de un cambio de gabinete dirigido por S.O. Jarpa para dar paso a una «apertura política». Comenzaba a quedar atrás la improvisación y comenzaba a perfilarse la competencia entre una salida pactada (12) y una rupturista.

Continuemos. Sometamos al análisis la cuarta Jornada de Protesta Nacional (11, 12, agosto, 1983). Esta vez convocaron la AD y la CNT, llamamiento al que se sumó la izquierda planteando la prolongación de las acciones durante el día 12, demostración del grado de división del movimiento democrático. Una vez conocida la convocatoria, el propio general A. Pinochet advirtió a la población que había impartido «instrucciones para hacer responsable ante cualquier desmán, aunque digan que la protesta es pacífica, a los señores que firmaron el llamado. Ellos van a sufrir las consecuencias, y que tengan cuidado, porque yo no voy a ceder un paso. Además, tengan la seguridad que Santiago está cubierto por 18 mil hombres, y con órdenes de actuar duramente». La amenaza no podía ser más diáfana. Eran las instrucciones de un «guerrero», actuando en la escena política (13). Acto seguido, Santiago, el epicentro de las Jornadas hasta ese momento, sería dividida en cinco zonas bajo control militar.

Zona Oriente: General de Ejército, Enrique Valdés.

Zona Occidente : General de Ejército, René Vidal.

Zona Centro : General de Ejército, Rolando Figueroa.

Zona Norte: General de Ejército, Cristián Arkenett.

Zona Sur: General de Aviación, Ramón Vega.

Las acciones disuasivas no tendrían parangón histórico. Por doquier causaron estragos las ráfagas de amas de grueso calibre, patrullas militares rompieron a culatazos los vidrios de modestas viviendas, mientras proferían insultos, gritos amenazantes y calificativos denigratorios contra la población, constituyéndose en un acto usual la conducta obscena enfilada contra la población femenina. Uniformados, carabineros, detectives, funcionarios de la CNI y jóvenes de la Secretaría Nacional de la Juventud apedrearon casas y departamentos, causaron destrozos y desmanes, insultaron, detuvieron, golpearon y balearon a la población, dejando un saldo de 35 muertos, 200 heridos y millones de pesos en

pérdidas materiales. A la dura respuesta deben agregarse la imposición del toque de queda, el estado de emergencia, la censura a los medios de comunicación y los allanamientos masivos. El clima de violencia, amedrentamiento, y angustia cristalizó en un estado de ánimo confrontacional que condujo a un fenómeno inédito: la *auto-defensa*. Al respecto debe tomarse en cuenta que la estrategia de recomposición del Terror se basó en la represión indiscriminada. Pero también apareció el antídoto: la *auto-defensa* (14).

La cuarta JPN tuvo trascendencia histórica, porque la suerte de la democracia quedó ligada a la capacidad de convocatoria de los partidos políticos, colapsando los intentos gubernamentales por corporativizar el sistema político. Después de diez años de prohibición, escarnio y persecución reaparecían los vilipendiados partidos políticos. Desde la base de la protesta surgieron nuevas formas de lucha, que aunque impregnadas de espontaneismo, dieron forma a dos opciones: las estrategias de ruptura y negociación. Ahora bien, ambas estrategias, en la particular coyuntura, a pesar de sus diferencias tenían un elemento común: la subjetividad y la falta de precisión para enfrentar a un rival que transformaba la política en un duelo. Pero, a pesar de estas carencias ambas habían contribuido a que el Miedo y la insularidad, la soledad en compañía, quedaran atrás. Expandiéndose el acto de ruptura con el Estado de excepción por Antofagasta, La Serena, Los Andes, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Chillán, Talcahuano, Concepción, Temuco, Osorno, Valdivia y Punta Arenas. Así la JPN tomó un carácter nacional.

Un dato curioso. Contra todo lo que pueda suponerse las demostraciones anti-gubernamentales no se limitaban solamente al día prefijado. A pesar del desgaste y el peligro que implicaba cualquier forma de manifestación la calle permanecía en permanente estado de ebullición. Fue el reflejo de un especial estado de ánimo libertario. Por ejemplo, entre la cuarta y

la quinta Protesta la convulsión social alcanzó un punto culminante, manifestaban los profesores de la AGECH (Asociación Gremial de Educadores de Chile), los estudiantes (Comités de Bases), los arquitectos, los médicos (Colegios Profesionales), los pobladores (Metropolitana de Pobladores) y las mujeres (MEMCH-83). Marchas de pobladores, manifestaciones de jóvenes, encuentros de artistas, se sucedían uno tras otro. En medio de esta maraña de sucesos sociales se realizaron sendas conferencias de prensa de partidos opositores que emergían cual ave fénix de la clandestinidad. Chile estaba a punto de estallar. El fantasma centroamericano no era solo una hipótesis, eventualidad ante la cual el gobierno buscó fórmulas para descomprimir la caldera social recurriendo al «diálogo».

Recordemos que mientras el 11 de agosto, 18.000 hombres controlaban las calles, S. O. Jarpa era nombrado Ministro del Interior con la misión de frenar la creciente insurgencia a través de negociaciones con un sector de la oposición, anunciando para tales efectos la «posible anticipación de partidos y parlamento y la solución definitiva al problema del exilio» (21). Poco después, el arzobispo de Santiago ofrecía su mediación y la AD publicaba el documento «Bases del diálogo para un gran encuentro nacional» (15), demandando plebiscito, asamblea constituyente, gobierno provisional y un plan económico de urgencia. Dos días después gobierno y opositores de la AD iniciaban el diálogo en las oficinas del arzobispo de Santiago *confrontándose la estrategia de mantención en el Poder y la transición negociada*. En la reunión, la AD rebajó sus demandas al término del estado de emergencia, al fin de la aplicación del artículo 24 transitorio, al reconocimiento de los partidos políticos, al acceso a los medios de comunicación de masas, al retorno de los exiliados, a la dictación de una ley electoral y a la reposición de la libertad de reunión e información. Pero, cinco días más tarde el general A. Pinochet señalaba... «no habrá precipitaciones. La transición no es una senda fácil, pues existe la posibilidad de perder el control de la

situación» (16), El diálogo quedaba en la nada.

La AD estupefacta insistía en la realización de un calendario fijo de transición a la democracia (con agendas, plazos y objetivos), produciéndose el 5 de septiembre un nuevo «diálogo», que también fracasaría. Pronto las alternativas de recambio centristas sufrirían otro golpe, puesto que el gobierno militar declaró que mantenía los plazos impuestos por la Constitución de 1980 (elecciones en 1988). Alejándose así la posibilidad de una transición pactada. Para el PDC el diálogo implicaba la posibilidad de imponer su estrategia, de lograr una salida bajo presión-negociación. La estrategia de «concertación y pacificación de los espíritus» guardaba coherencia con el cuerpo doctrinario demócrata-cristiano, intentando articular una estrategia con fuerzas de la derecha (Derecha Republicana), de la centro-izquierda (Radicales y Socialdemócratas) y con sectores socialistas (PS-Núñez). La negociación debía contener todo desborde libertario, de no ser sobrepasada, renunciando de antemano a cualquier actitud de rebeldía-activa, incentivando alianzas, fisuras y divisiones en la izquierda marxista.

El frustrado diálogo mostró un triunfador, A. Pinochet. El comandante en jefe había ganado tiempo, a través de interlocutores dejó incólume su poder y acentuó su autonomía respecto a los grupos de poder en trance de desarticulación. El diálogo correspondió a una concepción militar de la política, se trató de descomponer, desmovilizar y paralizar la *primera gran ofensiva* del movimiento democrático. En suma, ganó tiempo y rearticuló las líneas defensivas de las fuerzas dictatoriales. Pero, de la ruptura del diálogo a nuevas JPN mediaba un corto trecho, porque las marchas, las huelgas, las manifestaciones y toda clase de declaraciones aumentaban la fermentación social. Ante lo cual el gobierno preocupado ante la hipótesis de guerra civil puso fin al Estado de emergencia, anunció un plebiscito y la promulgación de leyes orgánicas. Pero, es-

tas no eran concesiones sino logros del sostenido avance opositor, al extremo que el propio Ministro del Interior, alarmado por la *creciente ingobernabilidad* terminó por llamar a los sectores oficialistas a «organizarse para defenderse» (17), marco en que se inscribió la quinta Jornada de Protesta Nacional (8, septiembre, 1983).

El preludeo de la nueva JPN estuvo marcado por dos acontecimientos: el asesinato del general Carol Urzúa y el inicio de un nuevo «diálogo». Acto acompañado de «gestos» gubernamentales como el retorno de parte del exilio y ofertas relativas a la convocatoria a plebiscito, leyes orgánico constitucionales y de partidos políticos, registros electorales y congreso. Pero, a pesar de la oferta la JPN se realizó. Como en la anterior ocasión compartieron la convocatoria la Alianza Democrática y el Comando Nacional de Trabajadores. Aunque, simultáneamente, la izquierda llamó a prolongar las acciones durante los días 9, 10 y 11, Jornadas dedicadas a 7 homenajes a Salvador Allende y al entierro masivo de 15 manifestantes caídos en las manifestaciones, porque en la ocasión se escenificaron nuevamente los luctuosos sucesos ya conocidos. La agitación generaba confianza, incluso los obreros enganchados a los planes de empleo mínimo (POJH/PEM), paralizaban sus obras por primera vez... la actividad de los partidos iba «in crescendo»... los estudiantes comenzaban a exigir la restitución de sus derechos... Pero, lo más importante de esta jornada radicó en la proliferación de nuevas formas de protesta y en la confirmación de una hipótesis: sin lucha no habría democracia.

Estratégicamente la jornada había mostrado el equilibrio alcanzado entre las fuerzas opositoras, las que en estado de *equilibrio* mostraban gran *contundencia* cuando *complementaban las acciones anti-dictatoriales*; pero, comenzaba rondar el fantasma del fracasado diálogo cundiendo la frustración, constatación ante la cual el recién fundado MDP (18) convocó a la sexta Jornada de Protesta Nacional (11, 12, 13, octubre, 1983), retirando en el acto su con-

vocatoria la AD, acentuándose la dualidad de líneas, el «vidas paralelas» de la oposición.

El llamamiento izquierdista se basó en el estado de eferescencia traducido en huelgas de hambre, manifestaciones, tomas de terreno y en la frustración colectiva ante el tercer fracaso del diálogo. Rondaba el desánimo. La izquierda se arriesgó dando origen a una cuasi semana de manifestaciones que desbordó con creces su capacidad de conducción política, sobrepasada por la acertada *periferización* de las acciones, acompañada de una creciente radicalización juvenil, escenificándose nuevamente los luctuosos sucesos ya conocidos, aunque un hecho marcó la diferencia: la realización de la primera manifestación masiva desde septiembre de 1973. En efecto, al llamado del Comando Unitario Democrático (CUD), constituido por el PRODEN y el MDP, 80.000 personas, desafiando al régimen manifestaron su repudio (19). La contrarrespuesta fue dura. En adelante, junto a las balizas convencionales, fueron empleados, balines, bombas, perdigones y perros amaestrados. Por su parte, los sectores de contra-poder comenzaban a variar sus formas de lucha, junto a la no-violencia (*sit-in*, ayunos, *caceroleos*), se desarrollaron formas pre-insurreccionales (quema de microbuses, atentado a instituciones estatales, apagones, sabotaje menor, fogatas-barricadas), entendidas como medidas de autodefensa y de ofensivas parciales en un marco de lucha masiva con perspectivas insurreccionales y limitadas a barrios y poblaciones determinadas. Ahora bien, tras la respuesta gubernamental de mantener los plazos institucionales de 1980, *estratégicamente* quedó demostrado que la *unidad por la base era posible*, y que en ese marco se *complementaban* las estrategias de la renuncia y el derrocamiento.

Tras las Jornadas de octubre pasaron varias semanas antes de una nueva convocatoria. En el intertanto, no bajaba la marea social, nuevas formas de manifestaciones mantuvieron la presión, una nueva convocatoria concentró el 18 de noviembre a 300.000 opositores en el

parque O'Higgins de la capital, concentración seguida de una de similares características, llamada por la AD, en Valparaíso. Los partidos seguían reconstruyéndose, pasando de la ilegalidad a la *legalidad de hecho*, como lo demostró la celebración de la primera Asamblea Nacional del MDP (3,4,5, febrero, 1984). La pérdida del Miedo y el resquebrajamiento de la censura permitió que algunos medios opositores dieran cuenta de grandes escándalos financieros en los que estaba envuelto el gobierno, teniendo una espectacular repercusión la denuncia de la construcción de la « casa de Lo Curro» (20), empresa presidencial que se construía a un costo de 20 millones de dólares. Por su parte, el régimen militar contra-atacaba, entregando a publicidad un proyecto de ley anti terrorista, el anteproyecto de partidos políticos y abría un frente de confrontación con la Iglesia. Decisiones tomadas en un contexto de crecientes dificultades con el FMI y de nuevas diferencias con el gobierno de los EE.UU. (21).

Mientras arreciaba la controversia fue convocada la séptima Jornada de Protesta Nacional (27, marzo, 1984). Nuevamente la guerra psicológica ocupaba la escena, pues el llamado coincidía con rumores de «autogolpe», centrándose el rumor en la posible eliminación masiva de opositores, acción acompañada por la prisión del presidente del MDP (Manuel Almeyda), una violenta golpiza al presidente del Proden (Jorge Lavandero) y profusión de autoatentados. Pese a todo, la Protesta (por común acuerdo opositor) fue convocada por el CNT, *lográndose el mayor arco de convocatoria* desde el inicio de las Jornadas, puesto que a ella adhirieron el MDP, la AD, la Metropolitana de Pobladores, MEMCH-83, la Agrupación de Familiares Afectados por la Represión, organizaciones juveniles (JS, JJ, CC, JDC) y estudiantiles (FECH), a los que se sumaron los transportistas y el comercio minorista, quebrándose el frente autoritario. Ante el reto el gobierno decretó el Estado de emergencia, estableció el toque de queda, censuró publicaciones (Hoy, Análisis, Cauce y Apsi), requirió el tabloide Fortín

Mapocho, detuvo y relegó a dirigentes poblacionales, trasladó tropas de provincia a la capital, dividió las ciudades en función de operaciones bélicas y utilizó profusamente las técnicas de la guerra psicológica, creando a través del rumor confusión y amedrentamiento.

Sin embargo, nada pudo aminorar el impacto de la séptima JPN. Por doquier se realizaron manifestaciones, en universidades, poblaciones, ante los Tribunales de Justicia, en la vía pública, etc. En la mañana el ausentismo escolar alcanzó el 90%, percibiéndose desde tempranas horas una notoria disminución de la locomoción colectiva, completamente paralizada en la tarde; por su parte, el comercio también cerró en forma parcial en la mañana y totalmente a mediodía. En diversas industrias hubo paralizaciones laborales, inasistencia a los casinos y fin de jornada de acuerdo con la parte patronal. Al anochecer se inició el «caceroleo», acompañado de fogatas y barricadas con transgresiones masivas al toque de queda. La sociedad civil se manifestó. Los sectores medios serían los más estridentes, especialmente los de Providencia, la Reina y Nuñoa en Santiago. En tanto, los sectores medios bajos levantaban barricadas, predominando en las poblaciones obreras y marginales acciones de resistencia como el oscurecimiento (medida de auto-defensa) y barricadas-fogatas, surgiendo acciones de sabotaje masivas y selectivas con utilización de armamento liviano y operaciones de pequeños grupos combativos en ciudad caracterizados por una relativa coordinación. Actos ante lo cuales la respuesta no se hizo esperar: allanamientos, baleos, amenazas, bombas lacrimógenas, detenciones, muerte y desolación.

La séptima JPN tuvo enormes repercusiones, fue el movimiento social más amplio, involucró al sindicalismo, a movimientos de mujeres, a federaciones estudiantiles, a comerciantes, a asociaciones afectadas por la represión, a pobladores, comerciantes, transportistas, colegios profesionales, maestros, docentes, etc. La

nueva Jornada abarcó también a una mayor cantidad de sectores políticos, integró tanto a la AD como al MDP, es decir desde la Derecha Republicana hasta el MIR, las expresiones más encontradas del en ese entonces espectro político. También, debe constatar que la séptima protesta involucró a un mayor número de clases, fracciones y grupos sociales sumándose nuevos sectores socio-económicos como la pequeña burguesía (tanto propietaria como no propietaria), capas de la burguesía comercial, agraria e industrial, robusteciendo al movimiento democrático en general, hecho de enorme trascendencia pues contribuyó al aislamiento gubernamental, reduciéndola a su propio campo: las fuerzas armadas, el componente tecnocrático-empresarial, el capital financiero, además de grupos-apoyo fragmentados (22).

El resquebrajamiento en el bloque-apoyo social brindó la apariencia de haber afectado las alturas del poder político, interpretándose como un contrapunto la fórmula militar-represiva del capitán general y la opción civil-represiva del ministro del interior, en circunstancias que A. Pinochet estaba explorando las dos fórmulas, llegando incluso a plantearse la posibilidad del «auto golpe», habilitando estadios para atender prisioneros (Santa Rosa de Las Condes, Recoleta), trasladando tropas a las principales ciudades, cursando órdenes de captura y voces de combate, previendo la eliminación, el relegamiento, el encarcelamiento, el exilio forzoso y la eliminación física de disidentes, en total unas 2.000 personas. Al mismo tiempo el ministro del interior ejecutaba la otra parte de la maniobra. Tras el atemorizamiento con la imagen del autogolpe, se concentró en la tarea de abrir un nuevo diálogo con la AD, sobre la base de la Constitución de 1980 y la exclusión del MDP. Pero, lamentablemente, para el capitán general no estaban dadas las condiciones para llevar a cabo el primer plan de «pacificación», lo impidió el alto grado de movilización y la reacción internacional, incluso la Casa Blanca se vio forzada a enviar apresura-

damente al Subsecretario Adjunto para Asuntos Interamericanos con el fin de paralizar la ofensiva «manu militari» (23).

Para el movimiento democrático-popular la JPN del 27 de marzo *estratégicamente* marcó el surgimiento de formas de rebeldía activa de carácter pre-guerrillero e insurreccional, *complementándose* con la estrategia de no-violencia. Ambas estrategias entraban en *estado de equilibrio*, ensombrecido por el espontaneísmo de sectores populares que continuaban superando y sobrepasando la acción de los partidos políticos. Desde el momento en que se produjo una *paralización sin paro* era evidente el nivel que alcanzaba el conflicto; pero, las fuerzas democráticas aún mostraban carencias e imprecisiones en la formulación de estrategias, vacío que paradójicamente dejaba espacio para la confluencia, para la unidad de acción, porque tanto la AD como el MDP desconocían la Constitución de 1980, exigían gobierno provisional, llamaban a una constituyente y rechazaban la presencia de A. Pinochet, además ambas fuerzas necesitaban construir fuerza político-social, pero, mientras una conducía a la renuncia (AD), la otra proclamaba al derrocamiento (MDP)... por lo que al parecer ningún estratega se había preguntado... ¿existía fuerza político-social para la exigir la renuncia? ... ¿existía fuerza político-militar para el derrocamiento?..

A principios de 1984 continuaba la búsqueda del paro nacional, empresa que costó a los trabajadores del PEM/POJH la cancelación del proyecto. El fracaso del diálogo también tuvo repercusiones, la AD se concentró en la realización de actos públicos de carácter auto-afirmativo para legitimar su proyecto ante el avance del MDP, equilibrio que condujo a la fundación del Consejo de Confederaciones, Federaciones y Sindicatos Nacionales (CONFASIN), cuya primera resolución fue llamar a una nueva JPN (27, marzo, 1984). Mientras tanto, en el extremo austral, ante una visita del capitán general, se había escenificado el «puntarenazo» (24), mo-

vilización que mostró el descuelgue de sectores oficialistas llamados por el costo de la política económica. En Concepción se inmolvaba Sebastián Acevedo para protestar por la detención de sus hijos por los servicios de seguridad. En la capital eran allanadas docenas de poblaciones, transformándose las rondas en lugares de reclusión. A todo esto continuaban reapareciendo los partidos políticos, ahora le tocaban el turno al PDC y al PS. Uno a otro se repetían las manifestaciones, los actos de sabotajes eran cada vez más sofisticados... irrumpía en la escena la organización para-militar: FPMP, Milicianos, MPA/ Destacamentos 5 de Abril, brazos armados del PC, MIR y PS, respectivamente... un fantasma recorría Chile... luego, tras embravecidas y multitudinarias manifestaciones, con ocasión del Día Internacional de la Mujer (8, marzo), el autoritarismo impuso el toque de queda. Era el preludio de la octava JPN.

La principal característica de la octava Jornada fue la *paralización sin Paro*. ¡Por fin el Paro Total!. Pero, al mismo tiempo gran paradoja puesto que no coincidía con el tipo de convocatoria. Una vez más fueron rebasados los movimientos sociales y los partidos políticos. De hecho, la AD sólo se sumó a último momento, cuando el MDP guardó silencio para evitar la desmovilización. En fin, la paralización sin Paro se logró por la adhesión de la Confederación del Comercio Detallista y el Gremio del Rodado, de manera que el cierre del comercio y la paralización del transporte público transformó a las ciudades chilenas en pueblos fantasmas, remecidos por el fragor de las manifestaciones que se concentraron en los barrios cívicos, en poblaciones y universidades, donde el aire cruzado por la consigna pronto se fundió con el tronar del sabotaje a escala, traducido en atentados al tendido eléctrico, a líneas férreas a patrullas militares... en la coyuntura se produjeron los primeros enfrentamientos característicos de la lucha en ciudades, siendo tal la preocupación del poder central que el propio capitán general, sobrevolando Santiago y Valparaíso, comprobó en terreno la gravedad

de la situación. En suma; el gobierno decidió cerrar toda posibilidad a la transición fijando el plazo en 1989, la AD persistiría en el diálogo con presión-de-masas como vía para la transición negociada, y la izquierda pasaba a presionar en la perspectiva de la ruptura y construcción simultánea del sujeto histórico.

Los días post-protesta fueron un torbellino (29). El 1° de mayo (25), al llamado de la AD, 250.000 personas, se concentraron en el parque O'Higgins, manifestación que al atardecer pasó a manos de una izquierda ya abiertamente insurreccional. Día tras día las Comunidades Cristianas Populares escenificaban el Vía Crucis de los detenidos-desaparecidos, los mineros de El Teniente iniciaban huelgas de hambre y la propaganda armada se extendía afectando al Metro, el Mercurio y TVN, comenzando a proliferar las primeras emboscadas, especialmente a buses de carabineros y asaltos a supermercados. Por su parte, el autoritarismo tomó medidas asegurando el frente interno con un cambio de gabinete con la misión de producir cambios económicos e impedir que continuara fragmentándose el bloque dominante, a continuación expulsó del país a diplomáticos franceses y al presidente del MDP (Jaime Inzunza), para luego cancelar el diálogo, sin oportunidad de contrarreplica, al aplicar una severa censura a los medios informativos, arremetiendo finalmente contra la Iglesia por su «parcialidad contra el gobierno». Así se inició una nueva JPN (11, mayo, 1984), esta vez convocada por el CNT y apoyada por la AD/MDP para mantener la movilización. Jornada que demostró: que los sectores medios comenzaban a descolgarse esperanzados en los cambios económicos que prometía el nuevo gabinete, que el centro persistiría, como lo señaló el Gran Acuerdo Nacional para el retorno a la democracia, en la perspectiva de transformar a la ciudadanía en masa-de-presión para negociar la transición pactada, que la izquierda presionaba transformando el clamor libertario en una política de exclusivo carácter popular, restringiendo el frente de alianzas y que en amplios sectores comenzaba

a experimentarse un *sentimiento de instrumentalización* por parte de la AD/MDP.

Posteriormente al 11 de mayo continuarían las Marchas del Hambre, la desobediencia civil, las Asambleas Populares, las Jornadas por la Vida y los Paros Comunales acompañados del crepitar de explosiones y disparos de armamento liviano... la ciudadanía ya convivía con apagones a nivel nacional, asaltos a supermercados, atentados explosivos y emboscadas. El régimen respondía con violencia y política, mientras reprimía al MDP y a los aparatos paramilitares, intentaba aislarlos invitando al diálogo. Mientras tanto la oposición seguía atrapada, la AD insistiendo en el veto al MDP comenzaría a explorar la alianza con la derecha, alejando ipso facto la posibilidad de una «salida a la crisis nacional». El CNT (dominado por el PDC) intentaría romper el impasse llamando a una Mesa de Concertación. Nuevo Fracaso. El CONFESIN haría un nuevo intento llamando a un Paro. Fracaso Estrepitoso. No estaban dadas las condiciones para una salida con exclusión de las fuerzas de izquierda, de manera que finalmente no quedaría otro camino que la reposición de la Protesta. Como señalaría una fuente de la época, ... «sólo por la vía de la movilización se puede avanzar en mayores entendimientos». Movilización que se expresó en una nueva JPN (4,5, septiembre, 1984). Esta vez convocó el Comando Nacional de Protesta, una de las tantas organizaciones de fachada ante la incapacidad de AD/MDP de ponerse de acuerdo. Era la salida intermedia.

Bajo la consigna, «Sin protesta, no hay cambios», el día 4 sería de protesta, el 5 de paralización (26). Por primera vez resultaría el llamado al Paro-Protesta, cuyo prelude había resultado particularmente violento, porque mientras la iglesia celebraba las Jornadas por la Vida (9, agosto), 10 chilenos fueron abatidos en diversos puntos del país, sin razón ante la cual los propios obispos exigieron clarificar los excesos, siendo la respuesta la amenaza de un «nuevo 11 de septiembre». Seguía rondando el

fantasma del auto-golpe. El espiral de violencia aumentaría hora tras hora hasta alcanzar su climax con el asesinato del sacerdote francés André Jarlán (27) durante un allanamiento-asalto a la población La Victoria. Pero, pese a la descarga represiva la JPN continuó su curso, a las acciones del primer días propias de la no-violencia, se superpusieron acciones de carácter para-militar con acompañamiento masivo de población civil. En fin, la Protesta repuso la movilización demostrando que el régimen amenazaba con el auto-golpe para obligar al respeto de los plazos institucionales, que la izquierda continuaba presionando a través de operaciones tácticas en la perspectiva de la ruptura pero sin claridad estratégica y que el sector mayoritario de la AD intentaba separarse del MDP y reabrir el diálogo.

Mientras tanto se impuso el toque de queda y las relegaciones... pero, también cundía el desánimo ante el creciente desencuentro AD/MDP, porque mientras la ciudadanía en general pagaba un alto costo en las manifestaciones la AD/MDP no lograban ponerse acuerdo. Y, mientras esto ocurría era dinamitada una iglesia en Punta Arenas (acción con resultado de muerte para el militar a cargo), una a otras eran disueltas las romerías al cementerio Santa Inés en Valparaíso, lugar del panteón de Salvador Allende, convertido a estas alturas en santuario de homenaje al ícono popular, los liceanos también protestaban cundiendo las tomas de liceos, agregándose la quema de locales del POJH y múltiples atentados de mayor envergadura que afectaron los suministros de agua potable y energía eléctrica... cundía la zozobra. Empero, el proceso de diferenciación interior de la oposición se agravaría aún más cuando ante el llamado del CNT/CONFASIN a una nueva Jornada de Protesta Nacional (29,30, octubre, 1984), la AD sólo solidarizó, mientras el MDP manifestaba su adherencia. Ahora bien, pese a la división opositora era perceptible una *situación de ingobernabilidad*, el gobierno estaba siendo rebasado y sólo atinaba recurrir al estado de sitio, a la relegación, a la tortura, a la coersión pura

... estaba en ciernes una crisis nacional con una oposición incapaz de implementar una estrategia unitaria.

Meses más tarde, las desavenencias, la frustración y la desconfianza precipitaron al primer fracaso de la protesta, cuando la AD intentó por sí sola convocar a una nueva JPN (27, 28, noviembre, 1984). Bastó con que el MDP ignorase la convocatoria y la jornada fracasó. Fortalecido temporalmente el autoritarismo impuso el Estado de sitio (noviembre-marzo 1985), «pacificando» el país por la vía militar, momento elegido para un cambio de gabinete, caracterizado por el desplazamiento del nacionalismo extremo, por una nueva élite integrista sin peso político (28), con la misión de iniciar la *transición institucional*. Ante la gravedad de la situación el MDP convocó a una nueva JPN (27, marzo, 1985) que abortó no sólo por el copamiento militar, sino por el descuelgue (ahora) de la AD. En otras palabras, AD/MDP se anulaban recíprocamente... mientras tanto los movimientos sociales seguían expresando su rebeldía, recuperando la FECH para los estudiantes, congregando a los artistas e intelectuales en las Jornadas de Movilización Cultural y movilizándolo a la Asociación de Deudores Hipotecarios afectados por los dividendos habitacionales; mientras tanto, aparecía una nueva forma de homenaje a los humillados: el velatón (29). Desde un punto de vista *estratégico-político*: se había establecido un equilibrio que anulaba tanto a la AD como al MDP si no establecían relaciones de cooperación, el gobierno mantenía los límites y plazos de su proceso de institucionalización, iniciando la *transición institucional*. Finalmente, dada la permanencia del conflicto entre los partidos políticos, los movimientos sociales iniciaron un proceso de *re-autonomización*, fórmula de repudio (además) a la instrumentalización de los partidos.

La confrontación por la recuperación democrática se estancaba por la incapacidad de los partidos políticos para encontrar una salida a la crisis nacional. De manera que, luego del

fracaso sucesivo de dos JPN, serían nuevamente los movimientos sociales quienes superaron el impasse. En efecto, desde agosto se incrementaron las demandas sectoriales; así, la Coordinadora de Pobladores demandaría seguridad para el diario vivir, la CONAFECH llamaría a la ingobernabilidad estudiantil, el MEMCH exigiría respeto por la vida, los Comités de DD.HH., clamarían por el paradero de los detenidos-desaparecidos, etc. La paralización de la Protesta por la competencia AD/MDP estaba siendo contrarrestada por la nueva *irrupción política* de los movimientos sociales, los que a través del CNT convocaron a una «Jornada de Movilización Social por la Democracia» para el 4 de septiembre recordando, «que en esa fecha todos los chilenos democráticamente decidían quién regiría los destinos del país» (30). A continuación sobrevino el nuevo acto del drama, cuyas características fueron la masividad popular y la incorporación mesocrática, esta última lograda a través de la participación del Gremio del Transporte, la Confederación de la Producción Agrícola, la Confederación Gremial Unida de la Pequeña y Mediana Industria y la Confederación del Comercio Detallista. En suma, tras la nueva JPN los sectores democráticos recuperaron el estado de ánimo que había animado las Jornadas anteriores. Prueba de ello sería la convocatoria a una nueva JPN (4, 5, noviembre, 1985) en respuesta a la detención de algunos líderes sociales. Pero, eso no fue todo, porque sobre la marcha se llamó a una concentración opositora para el 21 de noviembre, acto al que concurren medio millón de personas, gratificante experiencia para el nuevo organismo que emergió de la coyuntura: la Asamblea de la Civilidad.

Los movimientos sociales durante seis meses *repusieron* la Protesta y profundizaron, por la vía de la movilización permanente, el conflicto político y social, el cuestionamiento al régimen era global, la concentración del 21 de noviembre había demostrado que los movimientos sociales generaban *masividad* en la convocatoria, *consenso* en la exigencia demo-

crática y *compatibilidad* en el empleo de todas las formas de lucha, de manera que el país ingresaba en un estado de efervescencia pre-insurreccional, ante el cual las fuerzas involucradas sacaban sus conclusiones. El gobierno, con el cambio de gabinete, preparaba la transición institucional, asegurándola a través de dos vías: a) la represión selectiva (secuestros, flagelamientos y destrucción del «enemigo infame» (31), y b) el terror masivo (copamiento de calles y poblaciones, allanamientos, censura y empleo de la Unidad Fundamental Antiterrorista -UFA- unidades operativas adaptadas de la guerra en ciudad al enfrentamiento con la guerrilla urbana)

El centro político, fortalecido por la alianza lograda con la firma del Gran Acuerdo Nacional para la transición a la plena democracia, persistiría en una salida negociada. De las demandas globales (no a Pinochet, no a la Constitución, Constituyente, Plebiscito y Renuncia), había rebajado sus expectativas a un encuentro de personalidades civiles y militares para dirigir la transición. Finalmente, con el ánimo de negociación, paulatinamente iría cundiendo la idea de reconocer la Constitución de 1980 para ensayar *desde adentro* su transformación, lo que *transformaría* la Protesta en base electoral para una transición institucional. Es el momento de decisiones estratégicas, porque la izquierda, no sin divisiones internas, acumulaba sobre la marcha fuerzas «en caliente», internando recursos humanos y medios. Comunistas/FPMR, socialista/MPA/Dest. 5 de Abril y miristas/milicianos se preparaban para el enfrentamiento, considerando la Protesta como una escuela de aprendizaje, en que al copamiento de calles y poblaciones se respondía con la barricada, al allanamiento con caza-bobos, al armamento convencional con armamento casero, al desplazamiento de unidades moto-mecanizadas con minas «vietnamitas», a la clausura de medios de comunicación con radios clandestinas y a la UFA con micro-grupos operativos. El equilibrio se tornaba catástrfico. Así llegamos a un 1° de mayo extraordinariamente violento. Luego, vendría la

Demanda de Chile (32), donde los movimientos sociales repetirían las exigencias libertarias, para finalmente convocar, en medio de un clima abiertamente pre-insurreccional, a una nueva JPN (2,3, julio, 1986).

Como se ha podido apreciar, las JPN constituyeron momentos de explosión social, fueron el desate de las pasiones tras largos períodos de permanentes enfrentamientos, tanto pacíficos como violentos. Fueron la respuesta a la estrategia-militar con que actuaba el régimen con el objetivo de infundir Miedo. La Protesta constituía una catarsis colectiva tras semanas de enfrentamiento. La nueva JPN no fue una excepción; ya con ocasión del 1° de mayo, ante la denegación de la autoridad para realizar una concentración, se produjeron batallas campales con opositores que decidieron copar la calle, enfrentándose con fuerzas policiales acompañadas de «gurkas». Mayo fue un mes tenso. Culminó con una pacífica manifestación, en la que miles de personas se dieron cita en el barrio cívico santiaguino para «chutear» pelotas con letreros alusivos a la recuperación democrática. En la tarde, por primera vez en trece años los estudiantes se tomaban la casa central de la Universidad de Chile. Mientras tanto eran detenidos, incomunicados y flagelados 13 conscriptos de fuerzas especiales por corear consignas contra el capitán general. La protesta de julio se preveía violenta.

Pero, el discenso en la oposición seguía impidiendo la constitución de una *fuerza estratégica* que pusiera en peligro al régimen. Este jugaba al desgaste opositor y sometía a la población a la guerra psicológica para quebrantar su estado de ánimo. La *represión selectiva* se expandía, a los muertos y heridos que provocaban los disparos desde autos polarizados, se sumó la aparición de cuerpos destrozados por explosiones dinamiteras (L. Castillo, P. Crocco), simultáneamente decenas de jóvenes, líderes en sus comunidades, eran golpeados o amedrentados. La *represión masiva* la sufrían los pobla-

dores con allanamientos prolongados y la ciudadanía –en general– con el vuelo rasante de helicópteros. Las ciudades habían sido militarizadas. La espera era tensa. Profundizándose la tensión a partir de las tres de la mañana con allanamientos a poblaciones, donde las fuerza de seguridad se encontraron con que los pobladores, «cavaban zanjas, se hacían trincheras, se preparaban fogatas» (33), al unísono y luego de un allanamiento en la calle Mamiña 150, en el sector sur de la capital, tres presuntos miembros del FPMR eran aniquilados. Si el Terror produce paralización, la faena estaba cumplida, de manera que confiadamente el ministro de defensa podía declarar 24 horas antes de la JPN... «no creemos que vaya a ser un paro general» (34).

Sin embargo, la paralización fue total. Sorprendiendo, incluso, a los convocantes. De nada sirvió el Bando N° 46 de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia suspendiendo los servicios informativos, ni el descabezamiento de la dirigencia de la Asamblea de la Civilidad requeridos por el Ministerio del Interior, porque finalmente paralizó el 90% de los trabajadores, entre ellos el 80% de los textiles, el 85% del cuero y calzado, el 95% del comercio detallista, el 80% de los médicos, el 80% de los profesores, el 70% de la locomoción colectiva y el 80% de los escolares. Además, el Paro había concitado el 60% de apoyo en Arica, el 80% en Antofagasta, el 90% en Valparaíso y el 100% en Punta Arenas y Temuco (35).

Todo un éxito, si se toma en cuenta la virulencia de los enfrentamientos, porque mientras miles de ciudadanos protestaban en los barrios cívicos, se producían vuelos rasantes de helicópteros, baleos y acciones que culminaron incluso con dos manifestantes quemados vivos por parte de una patrulla militar (C.G. Quintana y R. Rojas Denegri). Ante lo cual la contra-respuesta no se hizo esperar expresándose a través del derribo de 12 torres de alta tensión (FPMR), proclamas en radios clandestinas (PS/SA) y 50 atentados explosivos que estreme-

cieron al país. Incluso las implemencias del tiempo agregaron una nota trágica por cuanto Santiago llevaba tres días sin consumo de agua potable, cortada por la fuerza de los temporales.

La nueva JPN, «incorporó masivamente a los sectores profesionales y a la clase media (una diferencia ostensible respecto de otros paros)» (36), de manera que el frente anti-gubernamental continuaba, sin duda alguna, en expansión. Pero, era evidente que las estrategias políticas se encontraban en estado de «equilibrio catastrófico», comenzando a prevalecer opciones derechizantes en la AD y anti-sistémicas en el MDP; simultáneamente se fisuraba el bloque en el poder, porque mientras A. Pinochet declaraba enfáticamente que la Constitución no sería modificada, el almirante J.T. Merino era «partícipe de hacer ciertas correcciones», quedando demostrado que la convocatoria proveniente de los movimientos sociales era de una amplitud superior a la de los partidos y que por esa vía podía construirse la fuerza social capaz de enfrentar el desafío del derrocamiento... pero, flotaba en el ambiente una sensación de incapacidad para encontrar una estrategia política que dispusiera de la fuerza, el tiempo y los espacios logrados. Así, culminó una nueva JPN. Pero; ahora, el tiempo comenzaba a conspirar en contra del ideal democrático... los discensos se habían convertido en una barrera.

Empero, las barreras abruptamente quedaron eliminadas al ensayarse *uni lateralmente* la estrategia del PC/FPMR. En efecto, el PC/FPMR acicateado por transformar 1986 en el «Año Decisivo» ejecutó dos operaciones que al fracasar trasladaron la iniciativa política al autoritarismo. La primera fue la internación de armas por Carrizal Bajo (37), en la III región, donde en minas y socavones abandonados («Palo Negro», «Aurora», «Cerro Blanco», «El Túnel» y «Rosario») fueron almacenadas alrededor de 70 toneladas de armamento. El 23 de mayo se había realizado el primer trasbordo de material cubano a los pesquero «Astrid» y «Chompalhue». Dos meses

más tarde se realizaron otros dos traslados»... pero, el desenlace sería distinto, porque los servicios de inteligencia norteamericanos (vía satelital) detectaron la operación y pasaron la información a los organismos pertinentes chilenos. Acto seguido, el 11 de agosto, DINACOS (Dirección Nacional de Comunicaciones) anunciaba el descubrimiento de los arsenales poniéndose en ejecución una estrategia de desarticulación total de la ofensiva opositora. De manera que, en el marco de la reposición de la estrategia del Terror de Estado, las embajadas extranjeras fueron sometidas a espionaje, el 6 de agosto sucumbiría asesinado un líder estudiantil (Mario Martínez) y el país sería cubierto por charlas de expertos en «terrorismo», volviendo a imperar la censura. Se reinstauraba el Terror.

En suma; la oposición experimentó un severo retroceso atemorizada ante un previsible desbordamiento militar, ni siquiera la liberación, tras 40 días de detención, de los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad podría reponer la masividad de la Protesta, tampoco operaciones como el secuestro del coronel Mario Haerberle (FPMR) pudieron sacar del reflujó al movimiento anti-dictatorial. Por el contrario una segunda operación fallida, la «Operación Siglo XX», terminó por cerrar el camino a todas las estrategias en juego. Se trató del fallido atentado perpetrado contra A. Pinochet el 7 de septiembre de 1986, quién a pocas horas de los sucesos declaraba que «el terrorismo es serio, es más grave de lo que están hablando. Así que ya es bueno que los señores políticos se den cuenta de que estamos en una guerra» (38). Siete horas después, se iniciaba una parafernalia que comenzó con profusos llamados en clave por radio y televisión...

«Se cita a reunión a Deportivo Colina. Alerta Rojo».

Cundía la alarma entre los opositores y no sin razón. Porque, en horas de la madrugada eran asesinados José Carrasco, Abraham Muskatblit, Gastón Vidauzárraga y Felipe Rive-

ra, también eran detenidos 44 dirigentes tanto del MDP como de la AD, poco después fueron expulsados del país tres sacerdotes franceses, entre ellos Pierre Dubois, el párraco de La Victoria, población que debió soportar, además, un largo y prolongado allanamiento junto a sus homónimas Elías Gonel, Santa Julia, Santa Olga, José María Caro... al mismo tiempo fueron requisados Apsi, Fortín Mapocho, Cause y Análisis; en tanto, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile fue baleada por patrullas de soldados que habían copado todas las arterias de las principales ciudades del país aprovechando la imposición del Estado de Sitio. No era todo. Porque inmediatamente después del atentado A. Pinochet abrió la campaña para su proyección, despejando escollos al interior del ejército llamando a retiro a los generales G. Frenzy y L. Danus (contrarios a la privatización del cobre), removiendo al general J. Canessa (factor de tensiones en la Junta), reemplazándolo por el general H. Gordon para recomponer las deterioradas relaciones intra-militares, implementar la estrategia conducente al Plebiscito de 1988, asegurar la transición institucional e imponer el proyecto de mantención en el poder.

En este nuevo contexto histórico era impensable una nueva JNP, como efectivamente sucedió al fracasar el llamado a una nueva Jornada los primeros días de Septiembre de 1986. Se impuso la ofensiva militar, interrumpiendo abruptamente el proceso desencadenado en 1983. Estamos frente a un cambio de escenario político favorable a una transición institucional ya iniciada, por lo demás. De manera que todos los esfuerzos alternativos puestos en práctica durante los próximos dos años serían vanos. Las esperanzas democráticas habrían de esperar hasta una nueva coyuntura.

IV) El resultado.- A partir del mes de septiembre de 1986 se perfilaron cambios tanto coyunturales como estructurales. Entre los primeros nos limitaremos a mencionar los siguientes: a) terminó derrotada la primera ofensiva democrática-popular, b) el autoritarismo pasó a

imponer sus dictados, c) ante la posibilidad de expansión del conflicto armado la Casa Blanca apoyó la transición institucional, d) en la democracia cristiana se produjo el desplazamiento de G. Valdés por P. Aylwin configurándose una nueva constelación interna, y e) finalmente, el giro de los representantes de Clodomiro Almeyda en Chile condujo al colapso del MDP, terminó con tres décadas de alianza PC/PS y perfiló la unificación del socialismo.

Desde una perspectiva estructural en la coyuntura se delinearón algunos rasgos que habrían de caracterizar posteriormente la evolución nacional, a saber: cambió la correlación de fuerzas. La izquierda pagaba el precio de la mantención «paralera» de tres estrategias; a saber: la de guerra popular y prolongada (MIR), la de rebelión popular (PC/FPMR) y la perspectiva insurreccional (PS). Ninguna había logrado definir plenamente sus modalidades de aplicación, diferenciándose además en un aspecto sustancial, mientras la perspectiva insurreccional socialista apelaba a un levantamiento desarmado con el objetivo de reponer la democracia, las estrategias del MIR y del PC/FPMR apuntaban más bien al cambio sistémico. El resultado final sería la quiebra del MDP. Por su parte, tampoco la AD había definido una estrategia coherente. El maximalismo de la primera hora (No a Pinochet, Constituyente...) fundamentado en la no-violencia activa había pretendido beneficiarse de las movilizaciones desencadenadas por las estrategias rupturistas, pero terminó paralizándose y entregando terreno a la izquierda en la medida que fracasó el diálogo. El resultado final sería un cambio profundo en la DC (G. Valdés x P. Aylwin) y la aparición de una idea-fuerza: la integración a la oferta gubernamental de transición para ensayar el cambio «desde dentro». Era el fin de la estrategia de ruptura pactada. En otras palabras, todas las estrategias opositoras fueron doblegadas, imponiéndose el diseño ofrecido por los militares: la transición institucional.

Los dos años siguientes, a pesar de grandes esfuerzos por reponer la disidencia masiva,

fueron prácticamente años de inmovilización para los partidos políticos. Entanto los movimientos sociales languidecían. Pero, el congelamiento social comenzó a experimentar un deshielo producto de una delicada operación política puesta en marcha con el ingreso clandestino de Clodomiro Almeyda (marzo, 1987). El objetivo central de tan osada maniobra era romper con el inmovilismo para lo cual se buscó el entendimiento con la DC. De manera que prontamente, en la Junta Nacional del PDC, en agosto de 1987, Patricio Aylwin logró presentar un programa político que teniendo como eje la alianza DC-PS, proponía la fundación de la nueva fuerza política que habría de enfrentar al autoritarismo en las elecciones de 1988: la Concertación de Partidos por la Democracia. En suma; la derrota y el realismo político condujeron a un escenario inexplorado como era la competencia desde dentro del sistema autoritario. Se trataba de incursionar por la transición institucional, para muchos - la mayoría - aún confundida con la ruptura pactada.

La idea de maniobra contempló el rápido desmantelamiento del Poder militar a través del Programa de Gobierno de la Concertación. Pero, las líneas de defensa de los militares, las vacilaciones concertacionistas, la inexperiencia parlamentaria, el desconocimiento del nuevo escenario político y la rápida legitimación de la derecha, culminó con una transición institucional culminada en 1998 con A. Pinochet instalado en el senado de la República. Transición que apoyada en los denominados «enclaves autoritarios» permitió una serie de transformaciones que cambiaron la fisonomía nacional; a saber: a) apareció un híbrido estatal, una nueva forma de Estado, a medio camino entre el Estado de excepción y el Estado democrático (el Estado-capturado), b) cuyo fundamento recide en la mantención del modelo económico anterior, c) administrado por una nueva clase política ligada a la práctica del consenso. Fenómenos acompañados por la pérdida de capacidad teórico-crítica de los sectores derrotados por la transición institucional y por la evaporación del esta-

do de ánimo democrático-participativo.

La transformación de los actores de las Jornadas Nacionales de Protesta en masa-de-maniobra electoral tuvo insospechadas consecuencias, las deudas políticas y sociales impagas, la irresolución del drama de los derechos humanos y la explosión libre-mercadista trajó modificaciones sustantivas. La deuda política (participación, revolución de expectativas) tomó la forma nihilismo colectivo y rechazo ante el partido político, el cual mantiene generosos caudales electorales no por eficiencia orgánica y propuesta, sino gracias al marketing. La deuda social ha configurado a la nación como uno de los Estados con ma-

yores diferencias sociales a nivel universal, acrecentándose la diferencia entre ricos y pobres, al extremo que se postula que la brecha podría cerrarse recién en 30 años más. Por último la explosión libre-mercadista elevó la arrogancia a nivel de «modo de ser», relegando la tradicional sobriedad chilena en beneficio del ostentamiento de los nuevos ángeles tutelares del Dios-mercado. En suma; cunde la insatisfacción.

Finalmente, debo señalar que estas tendencias han sido posibles gracias a la amnesia historicista, al *olvido inducido*, siendo la historiografía del tiempo presente el antídoto para evitar la evaporación de la historia (39). XXI

NOTAS

- 1 Mario E. Carranza. Fuerzas Armadas y Estado de Excepción en América Latina. Siglo XX, 1978.
- 2 Patricio Quiroga. El movimiento social en Chile. Balance de un año (1983-1984) En: Araucano Nº1, julio. Santiago, 1984. Consultar también, M. Garcés, G. de la Maza. La explosión de las mayorías. Protesta Nacional. 1983-1984, ECO. Santiago, 1985.
- 3 Robinson Pérez. El dilema del PDC. En: Cuadernos de Orientación Nº1, abril. Berlín, 1980.
- 4 Josep Fontana. Historia. Análisis del pasado y proyecto social. Crítica, Grijalbo. Barcelona, 1982.
- 5 Sergio Flores. Algunas reflexiones sobre el tiempo del historiador. Noción de su presente. En: Notas históricas y geográficas Nº3. Universidad de Playa Ancha, 1993. Pág. , 213.
6) Peter Burke. Historia de los acontecimientos y nacimiento de la narración (cap.11) .En: Formas de hacer historia. Alianza, 1994.
- 7 E.P. Thompson. Miseria de la teoría. Grijalbo, Barcelona. 1984.
- 8 En general el análisis sobre la Protesta ha realzado el rol de la crisis económica. Son los casos de, «La explosión de las mayorías» (1985), de Garcés y de la Maza; y del texto, «1983-1986. La unidad frustrada» (colectivo de autores). Santiago, 1988.
- 9 La DC se mostró esceptica ante las posibilidades de un paro nacional. Incluso, en la coyuntura, un sector presionó a la CTC para suspender el paro y reemplazarlo por una protesta nacional que sería reiterada el día 11 de cada mes.
- 10 También llamada Multipartidaria. Tanto el Proden como la Multipartidaria fueron posibles por un cierto relajamiento acompañado de incapacidad del gobierno militar, sorprendido por los acontecimientos políticos. No estaban preparados luego de haber quebrantado a sucesivas direcciones políticas, especialmente de la izquierda.
- 11 E. Lira, M.I. Castillo. Psicología de la amenaza política y del Miedo. CESOC. Santiago, 1991.
- 12 Véase el Documento: Constitución de la Alianza Democrática (AD). Santiago, 22.08.1983.
- 13 Algunos días más tarde A. Pinochet señalaría ... « No se debe hablar de transición sino de normalización. Dicho de otra manera, el cambio emprendido no conduce a la antigua democracia, que está definitivamente terminada». Entrevista, Madrid, 24.08.1983.
- 14 El concepto auto-defensa debe entenderse como el arte de la auto-protección, colectiva y personal frente a una fuerza infinitamente superior. No tiene características de ofensiva o político-militar, sino de sobrevivencia en el enfrentamiento entre fuerzas dispares.
- 15 Véase el Documento. Bases del diálogo para un gran encuentro nacional. Santiago, 23.08.1983.
- 16 Revista Hoy Nº 318, 1983.
- 17 Revista Hoy Nº 319, 1983.
- 18 Véase el Documento: Manifiesto del Movimiento Democrático Popular (MDP). Septiembre, 1983.
- 19 Las sucesivas demostraciones, el clima general de fronda democrática llegaron a dar la sensación del inminente colapso del régimen. En el exterior se hablaba de la «inminente caída de Pinochet». Consúltese, El Diario, (España) 11.09, 1983; también, El Atlante (México) Nº12.
- 20 Revista Causa Nº , 1984.
- 21 Véase el Documento: Informe elaborado por el Departamento de Estado norteamericano sobre la realidad chilena. 1983.
- 22 Las JNP, evidentemente, terminaron por requebrajar el bloque dominante. De hecho desde 1976 había desaparecido el antiguo bloque político (CODE), tampoco quedaba nada del bloque social con la ruptura de la burguesía industrial y ahora de transportistas, comerciantes y burócratas. Por otra parte solamente cuatro grupos políticos aceptaban la invitación de A. Pinochet para construir la fuerza-

- apoyo al régimen: el Movimiento de Unión Nacional, la Democracia Radical, el Movimiento Social Cristiano y los Talleres Socialistas Democráticos. Véase, *El País*, 2.09.1984.
- 23 *Revista Hoy* N° 348, 1984.
- 24 *Revista Hoy* N° 348 y 349, 1984.
- 25 *Revista Hoy* N° 354, 1984.
- 26 *Revista Hoy* N° 372, 1984.
- 27 *Revista Apsi* N° 152, 1984.
- 28 Con esta maniobra A. Pinochet comenzó la transición institucional. Agudos observadores internacionales señalaban... »la idea de que sea el propio Pinochet el que presida una transición hacia una democracia en Chile no parece demasiado inverosímil. Hay sin embargo, tres grupos que están obrando en ese sentido. El primero tiene su centro motor en la propia política norteamericana... el segundo grupo es el de esta oposición moderada, formada principalmente por quienes cerraron política y económicamente contra el régimen de Allende... el tercero es el propio régimen que trata de perpetuarse como clase y como fuerza capaz de evitar todo tipo de represalias, incluyendo la conservación de los privilegios materiales. Véase, *El País*, 25.02.1985.
- 29 El velatón es tal vez una de las formas de la memoria mas impresionantes de la que se tenga memoria en Chile. En lugares donde disidentes fueron ejecutados, detenidos, humillados o desaparecidos, la memoria democrática encontró la forma de rebdir homenaje poniendo cientos, a veces miles de velas encendidas al atardecer.
- 30 Fortín Mapocho, 26.08, 1985
- 31 Gonzalo Achondo. La Doctrina de la Seguridad Nacional. En: *Cuadernos de Orientación* N°1. Berlín, 1979.
- 32 Véase el Documento: La demanda de Chile. Santiago, 26.04. 1986.
- 33 *Apsi Extra*. 7.07.1986.
- 34 *Revista Hoy* N° 468, 1986.
- 35 Idem.
- 36 Idem
- 37 *Revista Hoy* N° 474, 1986.
- 38 *Revista Hoy* N° 478, 1986.
- 39 Patricio Quiroga Z. Memoria, Monumento y Amnesia Histórica. En: *Encuentro XXI*, N° 8. Santiago, 1997.

La Asamblea de la Civildad

Francisco Rivas
Médico y Escritor

La Asamblea de la Civildad (AC), que nace en enero de 1986 estimulada por las movilizaciones sociales en contra del régimen militar iniciadas en 1983, fue una organización exitosa, la cual fue conducida posteriormente al fracaso cuando hubo evidencia, en sectores políticos que en un principio la apoyaban, que ella podía ocupar el espacio destinado a esos sectores.

Hasta 1983 Chile estaba casi vacío de oposición pública excepto los organismos de derechos humanos, vinculados a la Iglesia Católica y sólo se percibía la lucha clandestina violentamente reprimida por los servicios de seguridad.

Ese año, el Comando Nacional de Trabajadores convoca a la primera y segunda protesta nacional, en la cual, después de 10 años, el pueblo se manifiesta en forma masiva, movilizándose en las calles y poblaciones, contra Pinochet.

Pero aquello era insuficiente. Era necesario sumar a ese sector de los trabajadores organizados, otros gremios, otras organizaciones sociales, representativas de un universo más vasto.

Este proceso se inicia a mediados de 1985 desde la Secretaría General del Colegio Médico de Chile, poderoso gremio profesional, que durante el gobierno del Presidente Salvador Allende había hecho una despiadada oposición al Gobierno popular.

Pero los tiempos habían cambiado en el Colegio Médico y confiados los médicos de derecha, la oposición democrática gana la directiva de la organización en 1981.

Lo mismo ha sucedido en el Colegio de Profesores y en otros gremios profesionales. Otros organismos sociales se habían ido fortaleciendo con el proceso movilizador iniciado en 1983 y estaban en manos de dirigentes afines o militantes del PDC, del PS o del PC. Las más significativas eran las organizaciones de pobladores, campesinos, jubilados, mujeres, jóvenes universitarios y secundarios, artistas intelectuales, empleados públicos, comerciantes, transportistas y profesores organizados en torno a una Asociación gremial la AGECH.

Durante los últimos meses de 1985 se inicia un proceso progresivo y acumulativo de confluencia de todas estas organizaciones, buscando acuerdos en torno a un documento político programático, a un diseño y a un itinerario que provoque consenso. También se busca una dirección formal y un liderazgo para la naciente organización.

La A.C. se formó en 1986 con la participación de 15 organizaciones sociales, representativas de la mayoría de las entidades sindicales y gremiales activas del país.

Para la elaboración del documento se llevaron a cabo múltiples reuniones, reservadas en muchos casos, clandestinas en otros,

entre los dirigentes más activos de esa organización, y no fue difícil acordar un texto único que se llamó «La Demanda de Chile». En ella no sólo se expresaban los principios y las motivaciones de la «Asamblea de la Civilidad», sino las exigencias en términos políticos, económicos y sociales que se le exigía a la dictadura.

La Asamblea de la Civilidad tenía como último objetivo terminar, en un plazo no mayor de seis meses, con la dictadura de Pinochet y ello sería posible por medio de movilizaciones y paralizaciones nacionales progresivas que harían ingobernable el país.

Los partidos políticos de izquierda habían logrado una importante articulación clandestina y tenían dirigentes políticos y sociales de gravitante influencia, especialmente el P.S. Almeyda y el PC. Por otro lado la DC. estaba relativamente intacta y predominaba en otros gremios y asociaciones gremiales. Sin embargo ya en esa época los dirigentes políticos miraban con recelo a los líderes sociales, de allí que el acuerdo sobre quién dirigiría esta iniciativa de tan enorme potencialidad se transformó en una tarea estratégica. No se quería construir un liderazgo que pudiera poner en riesgo aquellos que se preparaban para emerger inmediatamente antes o durante la transición que se visualizaba próxima.

Hubo grupos políticos en todos los partidos políticos opositores a la dictadura que fueron contrarios a la Asamblea de la Civilidad desde el comienzo. La constitución de 1980 fijaba un plebiscito para 1988 y ese era el desafío que había que privilegiar. El triunfo en ese plebiscito generaría los espacios de crecimiento de los partidos políticos de la transición. Ese era el argumento de quienes se oponían a la construcción de una organización multisindical.

La AC funcionaba en tres niveles. Uno formal, sin facultades resolutorias de ninguna especie, que se presentaba ante la prensa y que aparecía públicamente como la respon-

sable de las políticas de la organización. Este fue el último en conformarse. Hubo otros dos niveles privados. Uno social (CSP) integrado por cuatro dirigentes sociales y uno político (CPP), compuestos por otros tantos dirigentes de los partidos opositores, clandestinos o no, pero que tenían importante presencia en las organizaciones sociales que eran parte de la AC. Dos de los cuatro integrantes del CSP eran parte de la dirección formal.

En estas dos últimas se decidió la configuración de la AC pública, designándose por consenso como Presidente de ella al entonces Presidente del Colegio Médico, un hombre sin interlocución política en su propio partido el PDC, sin personalidad y sin carisma. El hombre apropiado que no ponía en riesgo las aspiraciones futuras de nadie. Fue la excepción, ya que los otros cargos formales de la mesa de la Asamblea fueron asumidos por dirigentes con respaldo y experiencia en las luchas sociales ya emprendidas

En los dos Comités privados se planificó hasta el último detalle de lo que serían las actividades de la AC y su itinerario. Aquí hubo que superar algunos puntos de conflictos entre el CPS, CPP respecto a las fechas de las movilizaciones, extensión y características de ellas y especialmente en relación a estas últimas.

Porque todos entendían que marchas y concentraciones eran importantes, pero irrelevantes a la hora de imaginar que por ellas y sus eventuales consecuencias Pinochet dejaría el poder. El tema era paralizar el país a través de la desobediencia civil y la movilización social pacífica, aun cuando durante esa movilización se produjeran hechos violentos.

La Asamblea de la Civilidad convocaba a la prensa, los periodistas acudían a las conferencias, pero las noticias en los diarios eran escasas o nulas, los noticieros de televisión prácticamente la ignoraban y los locutores y comen-

taristas de ayer los mismos de hoy, autocensuraban, cuando las había, las informaciones sobre la Asamblea de la Civilidad.

A pesar de ello, la red se extendió y las primeras concentraciones públicas organizadas por la AC juntaron a decenas de miles de chilenos. Se crearon asambleas regionales que en conjunto con el CPP y CSP trabajaron en la planificación del itinerario definitivo cuyo primer paro nacional fue fijado para mayo de 1986.

Este fue un paro nacional medianamente exitoso, pero levantó las expectativas de la AC que fijó para el 2, 3 de Julio de 1986 el segundo paro Nacional.

Estas paralizaciones se realizarían cada treinta días e irían prolongándose de 24 en 24 horas, hasta el Paro Nacional indefinido fijado para el 2 y 3 de Octubre de ese año, el cual sólo se levantaría con la renuncia y el abandono del poder del General Pinochet.

Pero el enemigo de la AC no sólo estaba afuera de ella, también se irrobaba en su interior.

Tres errores fueron decisivos a la hora de dar cuenta del destino final de la AC. El primero, la creencia del CPS de que el CPP impulsaba sin condiciones a la AC; el segundo, la designación a requerimiento y sugerencia del CPP de los dirigentes de reemplazo de la AC y el tercero la poca gravitación del liderazgo formal de ella: el presidente de la AC no tenía capacidad alguna de convocatoria.

El paro nacional del 2 y 3 de Julio fue preparado cuidadosamente por el CSP, el cual informaba diariamente al CPP de esos preparativos. Se sabía que la dirigencia formal de la DC podía ser requerida por el gobierno y en una breve reunión, poco antes de la fecha, se formalizaron los reemplazos del presidente, el vicepresidente, el secretario nacional y se elaboró un diseño de continuidad del itinerario.

En términos objetivos el paro nacional tuvo una convocatoria extraordinaria y el país se detuvo por 48 horas.

Los manifestantes fueron reprimidos con la violencia habitual y durante este movimiento fueron quemados por una patrulla militar Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas quien posteriormente murió a consecuencia de sus quemaduras.

La Dirección general de la AC en esa oportunidad tenía su cuartel general en el Hotel Sheraton, donde se alojaba un gran número de periodistas extranjeros y donde se creyó habría cierta protección contra la rápida acción represora del gobierno.

El Régimen Militar no vaciló en requerir a la dirigencia pública de la AC y en 10 días, la mayoría de esta fue detenida. Entre ellos los dos miembros que además formaban parte del CSP.

Fue el comienzo del fin. La AC había sido capaz de reunir casi medio millón de santiaguinos en el Parque O'Higgins, de concitar un acuerdo político social en las organizaciones más importantes del país, e incluso había logrado ciertos consensos entre los partidos políticos que luchaban contra la dictadura.

Junto a eso había puesto, por primera vez, en dificultades reales al régimen de Pinochet, al que no sólo le había bastado la fuerza: también tuvo la obligación de recurrir a la asesoría del Departamento de Estado de los Estados Unidos de EEUU, como fue constatado con la visita de altos funcionarios de esa repartición durante esos días críticos de Julio.

Durante el encarcelamiento de los dirigentes en la AC, la suplencia, presionada por los dirigentes de los partidos políticos, decidieron suspender su funcionamiento, en una medida incomprensible y sólo avalada por el presidente formal de la organización y rechazada por los otros encarcelados, que desde su encierro tenían

las manos atadas.

Cuando los dirigentes fueron liberados, el hecho había sido consumado. No existía AC, ni CSP ni CPP. El rumbo de la dictadura estremecido por las movilizaciones de la AC y luego por el frustrado atentado contra Pinochet seguía su curso hacia el plebiscito y la transición pactada.

Algunos intentos se hicieron por revivir la AC que fueron infructuosos y a fines de Octubre de 1986 en el Club de Campo del Colegio Médico se llevó a cabo una reunión entre algunos miembros de CSP, del CPP y de la dirección formal de la AC. A los primeros acompañaban algunos dirigentes políticos que emergerían a la luz pública posteriormente. La decisión por parte del CPP y de los dirigentes políticos ya estaba tomada y de inmediato ella fue comunicada a los dirigentes sociales que insistían en la estrategia movilizadora. Ya no habría respaldo de ningún tipo para ese tipo de acciones. Con la complicidad del presidente de la AC, ella quedó disuelta formalmente.

Las últimas movilizaciones de significación en nuestro país se hicieron en torno a la opción «No», utilizando la base de la AC, pero fueron rápidamente desactivadas después del triunfo en el plebiscito.

Esta breve reseña de la AC y la poderosa fuerza movilizadora que construyó puede ser útil para obtener algunas enseñanzas.

La movilización social fue funcional a los partidos políticos que después conformaron la Concertación en la medida que no ponía en riesgo el liderazgo de ellos. Por eso, entre otras cosas, impusieron en su cabeza un dirigente sin verdadero potencial de liderazgo, sin capacidad política y fácilmente desechable.

La AC y su movilización social era un peligro para una transición pactada con la derecha y el gobierno militar, pues ella habría podi-

do incidir en forma gravitante en la naturaleza de esa transición.

Un pueblo movilizado habría hecho con imposible una transición que en la práctica lleva 8 años administrando un modelo político, económico, social y cultural heredado de la dictadura.

Las lecciones emanadas de la convocatoria de la AC señalan que los procesos sociales puedan tomar una dirección distinta a la planificada políticamente poniendo en riesgo las pretensiones hegemónicas de los partidos políticos tradicionales.

La movilización social, sin duda la herramienta más poderosa que pueda utilizar un pueblo para provocar los cambios que requiere, nunca será estimulada por quienes detentan privilegios o poder, ya sean políticos, financieros, culturales o sociales.

- La movilización social no se produce espontáneamente, obedece a ciertas normas y realidades objetivas y requiere de dirección y planificación.

- La movilización social será siempre un gran peligro para las direcciones sociales y políticas de origen cupular y de todos los partidarios del continuismo, cualquiera sea su forma de expresarse.

La AC y su protagonismo no existe hoy ni en las crónicas de la época. O sólo excepcionalmente. Lo mismo tiende a ocurrir con todas las manifestaciones sociales o culturales de verdadero cambio que se dan en una sociedad conservadora. Esto es una realidad reiterativa en procesos como el nuestro en el cual no hay transición sino continuidad. Aquí solo han cambiado los personajes, algunos, y si hubo durante el primer gobierno de la Concertación el intento por modificar verdaderamente esa continuidad ellos fueron abortados rápidamente. El segundo gobierno de la Concertación retomó de inmediato el

diseño del gobierno militar, incluso reproduciendo algunas acciones represivas que se creían desentendidas.

No parece ser posible hoy recrear una AC. Ni las organizaciones sociales ni el contexto político lo harían posible. El traslado de las pugnas políticas por el poder desde el Gobierno y los partidos políticos a las organizaciones sociales las han desnaturalizado y hoy día casi ninguna de ellas podría asumir un rol similar al que tuvieron cuando fueron parte de la AC.

Ello no ha sido casual. Las consecuencias desmovilizadoras de las contiendas por el poder en la CUT y en otras organizaciones sociales promovidas en gran parte desde los partidos políticos, ya sea utilizando a dirigentes inexpertos o a antiguos cuadros sindicales y sociales ofreciéndoles cuotas de influencia o de poder, han sido evidentes y fatales para el movimiento social.

Es obvio que un régimen no democrático no puede permitir la existencia de estructuras democráticas en su seno. Debe reprimirlas, y si es posible destruirlas. Esto intentó el régimen militar con la AC y sus organizaciones que aun en dictadura, elegían democráticamente a sus dirigentes.

El régimen actual se rige por una Constitución no democrática y ello permite y sustenta organizaciones políticas y sociales que no practican la democracia, reproduciendo sus propias prácticas antidemocráticas entre sus integrantes y en la sociedad toda.

Cabe aún preguntarse cuál habría sido el resultado del Plebiscito sin el impulso que a la campaña del «No» dieron las movilizaciones sociales iniciadas por la AC.

Es fácil saberlo. La respuesta está contenida en los resultados de la última elección parlamentaria, en la que sólo la inercia de los votantes concertacionistas le evitaron a esa coalición un desastre mayor. La no inscripción electoral, los votos nulos y blancos fueron la expresión de un auténtico rechazo que tiene su origen en la desmovilización de nuestro pueblo y en especial de la juventud.

Las políticas del consenso, las decisiones cupulares han restado la posibilidad de participar a la inmensa mayoría de la gente, lo que la vuelve en definitiva indiferente a todo lo que no le afecta en la más directa cotidianeidad.

Lo anterior nos arroja al individualismo y se fortalece un modelo en el cual la solidaridad no tiene ningún valor.

Durante la dictadura se vivió en peligro, sin embargo fue posible movilizar a la gente. La movilización hizo posible el cambio. Hoy desde el gobierno no hay intenciones de cambio, por lo tanto no hay interés alguno en la movilización social. La AC con sus dificultades, sus éxitos y su extinción deben ser motivo de reflexión para quienes creen que el cambio y las transformaciones son posibles a través de los acuerdos o las movilizaciones electorales XXI.

Sigue pendiente desmontar la herencia económica del Pinochetismo.

Hugo Fazio
Economista, Director de CENDA

Han transcurrido ocho años de gobiernos de la Concertación y sigue vigente - como en muchas otras áreas de la vida nacional - la herencia económica y los amarres del pinochetismo. En consecuencia, está pendiente la tarea de desmontar esa herencia y sus amarres, recuperando al mismo tiempo con cargo a sus beneficiarios las elevadas pérdidas al patrimonio público provocadas por diferentes decisiones de la dictadura en abierta oposición al interés nacional.

La primera herencia a desmontar es el propio modelo económico neoliberal, puesto en ejecución en los años de dictadura en sus formas más extremas. Como escribió Perry Anderson, el régimen de Pinochet fue «la primera experiencia neoliberal sistemática del mundo» y constituyó «el verdadero pionero del cicloneoliberal en la historia contemporánea». « Todo esto - añade Anderson - comenzó en Chile, casi una década antes de Thatcher. En Chile, naturalmente, la inspiración teórica de la experiencia pinochetista era más norteamericana que austríaca. Friedman y no Hayek, como era de esperarse en las Américas». Los gobiernos de la Concertación hicieron suyo explícitamente este modelo. El actual senador institucional y ex secretario general de la Presidencia en la administración Aylwin, Edgardo Boeninger - como lo relatamos en «El Programa Abandonado» - afirmó explícitamente que el gobierno del cual formó parte cumplió la misión de «legitimar» por «su propia convicción» el modelo económico de la dictadura.

Altos personeros del régimen de Pinochet han destacado regocijadamente esta continui-

dad. «Desde que el Gobierno militar entregó el poder - ha señalado, otro nuevo senador institucional, Julio Canessa, vicecomandante en jefe del Ejército en los años de dictadura -, las grandes líneas se han mantenido . . . Los dos gobiernos de la Concertación - reafirma - han mantenido la línea gruesa y, gracias a eso, el país ha aprovechado el impulso que traía» (Cenda, base de datos, 5/1/98). Las consecuencias de la aplicación del «modelo» han sido hacer de Chile un país marcadamente dependiente y vulnerable, de una fuerte concentración de la riqueza, con una de las más malas distribuciones funcionales del ingreso a nivel mundial, fuertemente transnacionalizado y en que la presencia económica del Estado se jibariza.

Desmontar este modelo tiene una importancia no sólo nacional, dado el papel jugado por la experiencia chilena en la aplicación a nivel mundial de las formulaciones neoliberales.

Los Hijos de Pinochet.

Los años de dictadura dieron también lugar al nacimiento de nuevos grupos económicos, creados con el activo apoyo del aparato del Estado. Un ejemplo relevante de ello lo proporciona el grupo Yuraszeck - que estuvo en un primer plano noticioso durante 1997, por su escandaloso acuerdo con Endesa España -, constituido a partir del proceso privatizador de Chilectra Metropolitana a mediados de la década de los ochenta. Yuraszeck y otros ejecutivos de Chilectra encargados por la dictadura de la privatización de la mayor empresa de distribución eléctrica del país, crearon un meca-

nismo para su control sin prácticamente colocar fondos. Endesa España entró al país el año pasado adquiriendo este mecanismo, mediante el cual primero se controló Chilectra y más adelante el conglomerado Enersis - surgido a partir de la empresa de distribución -, una de cuyas filiales es Endesa, la mayor empresa del sector. Endesa España lo hizo, en un primer momento, a través de la compra al grupo Yuraszck de su sofisticado mecanismo de control, que le permitió con sólo un 0,06% del capital manejar Enersis y sus filiales.

Posteriormente, cuando el escándalo que rodeó a esa operación la frustró, Endesa España estableció un nuevo acuerdo, ahora con el directorio del conglomerado Enersis, a cargo en ese momento, en lo fundamental, de representantes de los consorcios financieros controladores de las administradoras de fondos de pensiones, en condiciones muy similares. El presidente de Endesa España, Rodolfo Martín Villa, se vanaglorió ante el parlamento español que este segundo acuerdo permitió a la eléctrica española acceder al control del conglomerado Enersis «con un costo inferior en US\$ 138 millones a como estaba planteada inicialmente, a pesar de implicar una participación mayor» (Cenda, base de datos, 11/2/98).

Martín Villa, es diputado del derechista Partido Popular y se le considera un hombre muy cercano al Primer Ministro (español) José María Aznar. Su principal objetivo en Endesa España es concretar su plena privatización, tarea que entró a la fase final de su ejecución. Este proceso y la matriz política de Martín Villa, si se vincula con el origen de Yuraszck y la «experiencia» que acumuló en privatizaciones en su beneficio, hace plantearse el interrogante sobre cuál era el objetivo último de la alianza establecida en su momento entre Endesa España, encabezada por Martín Villa, con el grupo económico chileno formado en los años de dictadura. Este acuerdo de materializarse habría convertido seguramente al grupo Yuraszck en parte del «núcleo duro» que se está conformando

en Endesa España para dirigirla cuando culmine su proceso privatizador.

La jactancia de Martín Villa deja muy mal parada la forma cómo se defendió por el directorio de Enersis el interés nacional y de los imponentes del sistema de fondos de pensiones, que tienen colocados en el conglomerado una suma muy superior a la usada por Endesa España para tomar su control. En ese momento, el directorio de Enersis era encabezado por el ex ministro del Interior de Pinochet, Carlos Cáceres, quien fue responsable directo, a su vez, de nominar a Yuraszck a cargo del proceso privatizador de Chilectra. El antidemocrático sistema de fondos de pensiones, en el cual los dueños de los recursos no tienen la menor ingerencia en la administración de ellos, los cuales en un alto porcentaje quedan en la práctica entregados a ex personeros del régimen dictatorial, nominados en representación de los consorcios financieros controladores de las mayores AFP, constituye otra de las herencias de la dictadura a modificarse necesariamente. Esta realidad empuja los procesos de concentración patrimonial y de desigual distribución de la riqueza.

Si se revisa el listado de los directores de sociedades anónimas nominados con el apoyo de AFP aparecen varios personeros de alta figuración en los años de dictadura o ligados a grupos económicos o grandes intereses empresariales. Saben, por ejemplo, los imponentes de Cuprum, ¿ que ésta AFP dio sus votos para elegir a Hernán Büchi director de Soquimich, y los de Habitat, Bansander, Planvital, Protección, Provida, Qualitas y Summa para designar también en el mismo directorio a otro ex ministro de Hacienda de Pinochet, Sergio de la Cuadra?. ¿ O que Felipe Lamarca, también alto personero del equipo económico de Pinochet y uno de los principales ejecutivos del grupo Angelini, contó con los votos de las AFP Habitat, Planvital. Provida y Summa para su designación como director de CCU?. Obviamente, los intereses que representan no son los de los imponentes.

El sistema de fondos de pensiones condujo a un resultado absolutamente diferente al propagado por sus autores en los años de dictadura. Las concepciones centrales del proyecto puesto en marcha a comienzos de la década de los ochenta se fundamentó en el documento preparado, antes del golpe de Estado, que delineó la política económica de la dictadura, conocido con el nombre de «El Ladrillo». En esta formulación programática se sostuvo textualmente, al referirse a los cambios previsionales implementados posteriormente en la legislación sobre AFP, que «un proceso de esta naturaleza, mantenido por un número largo de años, conduciría a una socialización de la riqueza...». Agregándose que constituiría «no sólo una solución eficiente al sistema previsional sino que además creará un mecanismo de acumulación de riqueza en manos de los trabajadores. Ellos pasarían a ser, con el tiempo, - se enfatizaba en «El Ladrillo» - una de las principales fuentes de ahorro para financiar inversiones».

Efectivamente, se creó un mecanismo de acumulación de recursos - apoyándose en un ahorro forzoso impuesto a los trabajadores -, pero no con el fin de «socializar» la riqueza, sino para aumentar su concentración, dado que los fondos reunidos se pusieron al servicio directo e indirecto del capital, mientras los imponentes han recibido rentabilidades muy inferiores a si hubiesen colocado directamente los mismos recursos en el sistema financiero y por largos períodos incluso han percibido rentabilidades negativas. Esta es, por lo demás, la lógica del modelo económico neoliberal.

Son numerosos los personeros de alta figuración en los años de dictadura que tiene presencia muy activa en el aparato económico, ya sea representando intereses propios o nominados en altos cargos por varios de los mayores grupos económicos. El ex ministro de Hacienda, Sergio de Castro, que estuvo en ese cargo hasta el derrumbe de su sistema de tipo de cambio fijo, encabeza el grupo empresarial Ecsa con inversiones en Chile y Argentina. Por su parte,

el también ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, ocupa cargos de presidente o director en distintas sociedades anónimas. El grupo Luksic, uno de los mayores del país, lo nominó presidente de los directorios de Empresas Luchetti y de su filial en Perú, y director de sus conglomerados Madeco y VTR.

Büchi es también presidente de Previsión y Seguros Cruz Blanca desde su constitución bajo el control del grupo Hurtado Vicuña y presidente del directorio de Forestal Terranova, perteneciente al grupo suizo Schmidheiny, en cuyo directorio también participa otro ex ministro de Hacienda de Pinochet, Jorge Cauas Lama. En Falabella se le nombró director apenas la empresa decidió abrirse a la bolsa. Estas nominaciones no son casuales. Grandes intereses económicos consideran la participación de altos personeros de la dictadura como una forma de establecer ligazones con las posiciones de poder que representan.

Millones de Dólares de Pérdida de Patrimonio Público.

Los hechos concretos demuestran que durante el régimen de Pinochet se traspasaron a intereses privados, en contra del interés nacional, miles de millones de dólares de patrimonio público. Estos hechos no constituyen temas del pasado - lo que tampoco justificaría su olvido ni la exigencia de que se rinda cuenta por ellos -, sino que siguen manifestándose hoy, como se puede demostrar fácilmente. Por tanto, deben constituir temas de permanente debate público.

Un primer ejemplo. En la Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública, efectuada por el ministro Eduardo Aninat, en los últimos meses de 1997, y en el informe entregado por el Banco Central al Senado, en septiembre del año pasado, estuvo presente el problema patrimonial del instituto emisor. La llamada deuda fiscal y las obligaciones subordinadas de bancos comerciales con el Banco Central constituyen herencias dejadas por el régimen de Pino-

Deuda Externa de Chile 1982-1987					
(Fuente: Banco Central. En millones de dólares)					
Año	Pública	Privada	Año	Pública	Privada
1982	6.880	10.493	1985	14.078	5.365
1983	9.795	7.636	1986	15.763	3.738
1984	12.343	6.354	1987	16.380	2.828

chet que significan pérdidas gigantescas de patrimonio público, que siguen creciendo. En general, consistieron en recursos utilizados en apoyar a bancos o empresas en virtual situación de quiebra.

Massad unilateralmente destacó en su intervención en el Senado «que una parte de las pérdidas (del instituto emisor) por reajuste real tienen como contraparte una ganancia para el Fisco, que ve disminuir el valor real de su deuda en dólares con el Banco Central». En verdad, no hay ninguna ganancia para el fisco, que se hizo cargo de una deuda originada en el masivo traspaso de recursos públicos al sector privado. Por lo demás, en último término las pérdidas patrimoniales del Banco Central son cubiertas con recursos fiscales, o más explícitamente con cargo en definitiva a todos los chilenos. Desde 1990, sólo por concepto de prepago de esta deuda el fisco ha desembolsado, de acuerdo a antecedentes entregados por el ministro Aninat, US\$ 1.552 millones. Próximamente, desde el Presupuesto se debe cubrir el déficit patrimonial del instituto emisor - ascendente a unos US\$ 1.200 millones - y capitalizarlo.

La determinación - anunciada por Aninat y Massad - de redefinir «las condiciones a que están afectos los activos y pasivos que el Banco Central mantiene con el Fisco», si bien mejora la situación patrimonial del instituto emisor, y puede justificarse en función de este objetivo, conduce a que directamente la pérdida de patrimonio público originada en los pasos dados durante el régimen de Pinochet recaigan sobre el conjunto de los chilenos. La pérdida patrimonial del sector público toma otra expresión,

no desaparece. Ella, no debe olvidarse, se generó a partir de recursos entregados desde el Banco Central a empresas pertenecientes a grandes grupos económicos en cesación de pagos, que luego se transformó en compromiso fiscal con el instituto emisor.

Un segundo ejemplo actual. El Banco Central tiene pendiente el proceso destinado a vender las acciones recibidas en pago del Banco de Santiago para cancelarle su obligación subordinada. Esta venta que se iba a efectuar durante 1997 se postergó por la caída de los mercados bursátiles que provocó la crisis asiática. Esta operación al materializarse, en el momento que sea, conducirá a que se consolide la pérdida experimentada por el Banco Central de operaciones que en sus inicios fueron destinadas a salvar de la quiebra al banco que a comienzos de los años ochenta era controlado por el grupo económico Cruzat-Larraín. Estas pérdidas suman varios miles de millones de dólares.

Otro ejemplo. El Banco de Chile, por el mecanismo de las obligaciones subordinadas y al acogerse a la alternativa de cancelarla en nada menos que cuarenta años sigue funcionando en base a patrimonio público, dado que sus obligaciones con el Banco Central superan su capital y reservas. Al mismo tiempo, continúa siendo beneficiado con un subsidio público, dado que la tasa de interés que le cancela al instituto emisor por la deuda es muy inferior a la existente en el mercado, con mayor razón luego de la violenta alza de las mismas impuesta a comienzos de 1998 en los marcos de las denominadas políticas de ajuste. El Banco de Chile tiene también la particularidad, ya anotada al hablar del grupo Yuraszcek, de un

persona je encargado de una privatización - en este caso Adolfo Rojas - que al finalizar el proceso que se le encargó queda presidiendo la institución privatizada. No ha sido precisamente la actitud ética la característica de numerosos personeros de alta figuración en el aparato económico de la dictadura y que mantienen, en muchos casos, actualmente siempre elevadas posiciones de poder en la economía.

Igualmente, sigue pesando negativamente sobre el patrimonio público la decisión adoptada en los años de dictadura - también a comienzos de la década de los ochenta -, durante los procesos de renegociación de la deuda externa, que hicieron a la República de Chile hacerse cargo de endeudamiento externo privado, en especial del existente en las instituciones financieras. Como consecuencia de esta determinación antinacional, en que se acató la exigencia de los bancos acreedores, la deuda externa pública que en 1982 ascendía a US\$ 6.660 millones, mientras la privada alcanzaba a US\$ 10.493 millones; en 1987 se transformó a US\$ 16.380 millones de deuda pública y sólo US\$ 3.738 de deuda privada. En consecuencia, la República de Chile se hizo cargo de una deuda privada - que en muchos casos los acreedores no habrían podido rescatar por la insolvencia en que cayeron los deudores - de varios miles de millones de dólares, que ha estado sirviendo y pagando los correspondientes intereses. Cuando se habla de prepago externo de deuda fiscal básicamente corresponde a estos compromisos.

Este recuento parcial, tomado como base a acontecimientos en curso - para refutar que puedan considerarse sólo acontecimientos del pasado - muestra que la pérdida causada al patrimonio público durante los años de dictadura alcanzó a muchos miles de millones de dólares. Monto que sería aún mayor si se contabilizasen las privatizaciones, frecuentemente realizadas también con pérdidas patrimoniales; la entrega a intereses privados de grandes yacimientos de cobre cuya explotación ha-

bía sido reservada al Estado por la ley de nacionalización del cobre promulgada durante el Gobierno de la Unidad Popular; o los subsidios concedidos por el Banco Central a las deudas en moneda extranjera, fundamentalmente a grandes intereses económicos, luego de ponerse final sistema de cambio fijo en 1982.

El Despojo de la Renta Cuprífera y Minera.

Uno de los mayores despojos al patrimonio público en los años de dictadura se materializó cuando se promulgó una ley de rango constitucional - que como tantas otras sigue vigente - entregando la propiedad sobre los yacimientos del Estado, establecida incluso en la constitución pinochetista de 1980, en propiedad a los intereses privados que declarasen o se apoderasen de las respectivas pertenencias. De esta manera, los consorcios presentes en el negocio minero no sólo obtienen la ganancia propia de una actividad empresarial, sino la renta diferencial existentes en todas las principales miras en territorio chileno, particularmente las cupríferas. Esta renta diferencial pertenece en rigor al conjunto de los chilenos y ha sido arrebatada por consorcios privados, básicamente transnacionales, a medida que la participación de Codelco en la producción cuprífera se fue jibarizando y el capital privado ha penetrado más fuertemente en otros sectores de la minería. Este tema por su magnitud, por los cuantiosos recursos que se encuentran en juego, tiene una trascendencia tan grande como la que en su momento revistió la nacionalización del cobre.

Las rentabilidades obtenidas por la gran minería privada cuprífera son extraordinariamente elevadas. Un punto de referencia obligada y necesaria para entender su magnitud es comparando sus resultados con los obtenidos por Codelco. En 1996, la empresa estatal registró ventas por US\$ 2.940 millones y obtuvo excedentes - tras pasados en su integridad al fisco - por US\$ 1.103 millones. La rentabilidad sobre las ventas alcanzó, por consiguien-

te, a un elevado 37,5%. En tanto, la minería privada cuprífera produjo un 61% del total. Ello permite estimar sus ventas en unos US\$ 4.600 millones. Su rentabilidad sobre las ventas - por tratarse de minerales mucho más recientes que los de Codelco - debe necesariamente ser superior al de la empresa estatal. El secretario general de la presidencia, Juan Villarzú, la ha cifrado en un «anormal» 50% antes de impuestos. Por tanto, los excedentes antes de impuestos serían del orden de los US\$ 2.300 millones, a lo cual después de impuestos deberían deducirse los tributos cancelados por las empresas mineras, los cuales de acuerdo a documentos del Servicio de Impuestos Internos hechos públicos por el senador Lavanderos, sumaron apenas US\$ 139 millones.

De manera, que las utilidades después de impuestos ascendieron a unos US\$ 2.160 millones. Si se aplicase un impuesto sobre las ventas de 25% - que dejaría una rentabilidad similar en manos de las empresas privadas de la gran minería, muy alta a nivel mundial - se producirían sólo en el cobre ingresos fiscales adicionales por US\$ 1.080 millones. En años como 1995, con un precio del cobre superior, desde luego, dicho monto resulta considerablemente mayor y en ejercicios como el actual, en que el precio del cobre se encuentra deprimido, sería menor.

El impuesto a establecerse debe necesariamente aplicarse sobre las ventas u otro indicador que evite los múltiples resquicios que utilizan estas empresas para reducir su nivel de impuestos, llegándose a casos extremos como el de La Disputada, explotada por el consorcio de origen norteamericano Exxon Co., «que en sus quince años de producción - como ha recordado The Wall Street Journal - nunca ha pagado ningún impuesto al gobierno chileno, según datos del Servicio de Impuestos Internos». Esta figura, Exxon la ha logrado en un alto porcentaje haciendo aparecer sus pasivos como créditos de la casa matriz, sacando recursos de Chile bajo la forma de pago de inte-

reses y no de remesa de utilidades. En 1990, por ejemplo, de acuerdo a antecedentes publicados por «Minería Chilena» (julio de 1991), «estos pagos de intereses representaron un 21% de las ventas».

El senador Carlos Ominami ha recalcado que las empresas mineras cargan sus divisiones chilenas con mucha deuda y repatrian los fondos que generan como pago de los intereses, los cuales pagan impuestos de sólo 4%, en comparación con el 35% que debe cancelarse de tratarse de remesas de utilidades. Esta situación más que justifica la determinación del Comité de Inversiones Extranjeras durante el año pasado de modificar la relación inversión/endeudamiento a 50% y 50%, en lugar del mecanismo vigente anteriormente que permitía créditos de hasta 70%, monto que no hace mucho tiempo atrás era incluso superior. De otra parte, dada la libertad de comercialización externa existente, y la carencia de mecanismos de regulación, es enteramente razonable suponer que en muchas oportunidades los precios de ventas a empresas pertenecientes al mismo consorcio deben ser menores a los de mercado, para traspasar así utilidades de un país a otro, como lo ha denunciado el senador Jorge Lavandero.

El monto del gravamen, de ser ser del orden de un 25% de las ventas, permitiría a los consorcios que explotan las principales minas de cobre privadas en el país quedar con rentabilidades sobre las ventas, si nos basamos en el cálculo entregado por el ministro Villarzú, de 25%, que continúan siendo muy elevadas a nivel mundial. Del pago de este gravamen debe excluirse expresamente a los yacimientos menores a un determinado nivel de producción, no afectando a la pequeña y a aquella que verdaderamente puede denominarse mediana minería (no la considerada como tal en las estadísticas oficiales que incluye en esta categoría a todas las empresas diferentes a Codelco, aunque se trate de minerales como Escondida, el yacimiento más

grande del mundo en explotación).

En otro plano, la magnitud del gravamen debería ser diferenciado, estableciéndose porcentajes menores en la medida que se incorpore mayor valor agregado en el país, fundiéndose o refinándose, excluyéndose de impuesto si es elaborado en territorio nacional. Un porcentaje de los ingresos extraordinarios así generados sería oportuno destinarlos al desarrollo de las regiones en donde se encuentran enclavados los yacimientos, para propender a un crecimiento nacional más descentralizado y favorecer así a las zonas que aportan estas riquezas.

Un impuesto de esta naturaleza tiene un claro significado nacional. Desde luego su aprobación será posible si se cuenta con un respaldo muy amplio, capaz de vencer la furibunda reacción en contra de los sectores afectados, y los intereses políticos, académicos y de comunicación que lo rechazan. Como ha constatado The Wall Street Journal, en su reportaje sobre el tema (7/10/97), «las empresas mineras -entre las que se cuentan titanes mundiales como Phelps Dodge Co., de EE.UU.; Broken Hill Proprietary Co., de Australia; y Mitsubishi Co., de Japón- han recibido el respaldo de los políticos conservadores de oposición y de algunos influyentes centros de estudios vinculados al ex gobierno militar de Pinochet. La Cámara de Comercio de EE.UU. en Chile - añade la publicación - también se ha manifestado en contra de cualquier impuesto nuevo a las minas. Sin embargo, - reconoce The Wall Street Journal - existe un amplio grado de simpatía con la idea.» Es este respaldo nacional el que debe hacerse escuchar.

Uno de los principales argumentos entregados en contra del establecimiento de este impuesto se apoya en una argumentación falsa, dada tanto por la Sociedad Nacional de Minería como por ejecutivos de las empresas transnacionales, al señalar que se cometería un acto discriminatorio. La verdad es absolu-

tamente al revés. Las grandes empresas mineras se ven favorecidas por una doble discriminación. De una parte, porque ellas, como todas las posiciones monopólicas en la explotación de recursos naturales, se apoderan de una renta extra que no les pertenece y que no proviene de su gestión empresarial. Es una renta que corresponde al conjunto de los chilenos. Esta renta no la obtiene la enorme mayoría de las actividades empresariales.

De otro lado, casi todas las grandes empresas mineras están constituidas como «sociedades contractuales mineras», las cuales no quedan afectas al impuesto adicional que pagan los inversionistas extranjeros por la remesa de utilidades al exterior. Se establece así en su beneficio una nueva discriminación. La Ley Minera de 1982 terminó con la disposición constitucional de que «el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas». Estas determinaciones discriminatorias, contrarias al interés nacional, son las que deben erradicarse.

Igualmente, los mismos sectores dan como argumento contrario que un impuesto a la minería no consideraría el carácter «riesgoso y cíclico» de esta actividad, entregando como ejemplo de ello la caída en el precio del cobre producido a consecuencia de la crisis asiática y de la sobreoferta en los mercados internacionales provocada en gran medida por las transnacionales presentes en la economía chilena. La baja en los precios significa - al ser el impuesto sobre las ventas - que el tributo automáticamente se reduciría. Pero, además, debe tenerse en cuenta que las rentas diferenciales no desaparecen con los cursos cíclicos, que significan en la fase de crisis la salida del mercado de algunos productores de menores tamaños o costos más elevados, como acontece actualmente en Chile en la pequeña y mediana minería, así como a nivel internacional. La renta diferencial persiste y la apoderación ilegítima, por lo tanto, también.

¿ Quién responde por estas pérdidas enormes al patrimonio público?. Son asuntos que deben ponerse completamente sobre la mesa y mostrar crudamente tanto la magnitud del daño al patrimonio público como las personas o los intereses beneficiados en cada caso, constituyéndose muchas veces en elementos poderosos en conformar las grandes concentraciones patrimoniales que caracterizan a la sociedad chilena. A lo menos debe establecerse plenamente la verdad histórica y evitarse que estas

pérdidas sigan dándose a futuro. Mejor aún sería si ello sirviera para recuperar las pérdidas sufridas por el patrimonio público, perteneciente a todos los chilenos.

El juicio público, y en todo tipo de tribunas, a Pinochet y al pinochetismo, como puede apreciarse por los antecedentes entregados, debe tomarse desde muchos ángulos. Constituye una gran tarea nacional. XXI

"Nuevo pacto" ; un paso en la legitimación del Militarismo

Juan Arriagada
Investigador de ICAL

El proceso de acuerdos entre representantes del gran empresariado, las FFAA y políticos de la "oposición democrática" y de derecha, originó el particularísimo proceso chileno de **"Tránsito a la democracia"** en los marcos de la Constitución del 80. También ha implicado la búsqueda de un "nuevo pacto" entre los círculos económicos-político dominantes y de altos mandos militares.

En este "nuevo pacto" es central el acuerdo sobre nuevas misiones y responsabilidades institucionales de las FFAA, más allá de las funciones netamente militares.

Esta concepción se concentró en la Constitución del 80.

Diseñada la "transición democrática" bajo esa ley principal, los mandos militares han logrado bajo gobiernos de la concertación importantes avances en uno de sus objetivos medulares **la legitimidad de las posiciones conquistadas bajo la dictadura**.

Pues para ellos era claro que, ese momento de la transición para las FFAA estaría marcado por el cuestionamiento a la institución militar, por el hecho que, "El prestigio de los cuerpos armados estará gravemente deteriorado por un masivo sentimiento de odiosidad y desprecio que despertará el recuerdo de las atrocidades y arbitrariedades en que incurrieron las tropas durante la etapa represiva" (Carlos Prats Memorias, Testimonio de un Soldado, 1984)

El proclamado éxito en estas materias del gobierno del Presidente Eduardo Frei y particularmente de la gestión de su ministro de defensa, Edmundo Pérez Yoma, no está en haber asumido esa realidad, incorporando a las instituciones armadas al proceso democrático, a través de una profunda reestructuración de mandos y concepciones. El éxito de la Concertación no está en haber hecho realidad las recomendaciones del informe Rettig, o las reformas constitucionales a las leyes orgánicas constitucionales. Su éxito reside en haber dado un elemento de estabilidad al modelo socio económico actual al lograr un importante grado de consenso con los mandos militares, particularmente con Augusto Pinochet, sobre la base de legitimar para ello instituciones, mandos y concepciones—las mismas que terminaron con el profesionalismo de las instituciones armadas y que posibilitaron el desarrollo democrático del país hasta 1973. Lo legitimado no implica por tanto, un triunfo democrático, es por el contrario una aceptación de elementos del militarismo profundamente peligrosos para el desarrollo democrático y pacífico del país.

La conformación de una "bancada militar" en el Senado a partir de 1998, encabezada por Augusto Pinochet, y con participación de otros ex Comandantes en Jefe reafirma el peligro en curso a que conduce la política hasta hoy aplicada en estas materias.

El tiempo político para un despliegue más público de estos consensos, lo ha aportado el

termino del juicio por el asesinato del ex Ministro de Defensa. Orlando Letelier y el encarcelamiento en Punta Peuco del ex jefe de la Dina, general (r) Manuel Contreras, en Octubre de 1995, con lo cual "oficialmente" se ha dado término a uno de los temas más difíciles para el acuerdo; las violaciones de los DDHH por instituciones y uniformados.

Diversos hechos dan cuenta de estos acercamientos y acuerdos. Las formulaciones en común por parte de representantes del ejecutivo, del Congreso, de los altos mandos de las FFAA, de las instituciones privadas vinculadas al centro o la derecha política, en 12 talleres, de un "LIBRO BLANCO", definido como "el primer documento en democracia referido al rol específico de las FFAA", (EM04. 07. 97). El que ha motivado un decreto del presidente Eduardo Frei y expresiones conciliatorias de Augusto Pinochet que "La madures de un país. . . sacudido de tiempo en tiempo por crisis internas y externas aconseja reemplazar el dilema de "la mantquilla o los cañones", por una política de defensa estable y moderna" (EM22. 08. 97).

Las acciones que se realizan en torno al pase de Pinochet grafican "las excelentes relaciones cívico-militares" existentes, pero también la dimensión de la "operación blanqueo" de sus crímenes y tropelías. La última Parada Militar realizada en honor del ex dictador, considerada además la mayor demostración militar de este siglo, con participación de autoridades civiles, religiosas, militares, ilustra demasiado bien sobre el significado de la "transición democrática" en estas materias.

El marco internacional es también proclive a este tipo de desarrollos. Lo centrales el tránsito hacia una nueva forma de dominio internacional, con EEUU como única superpotencia mundial y la configuración de diversos bloques económicos-políticos-militares. Tránsito caracterizado entre otras cosas por un activo uso de la fuerza militar (guerras,

intervencionales, chantajes de la superpotencia y bloqueos sobre diversas naciones) tras el dominio de los mercados. Este tránsito en su etapa inicial, tras el desplome del socialismo del Este europeo, se caracterizó por la reducción del mercado de las Armas. En la actualidad ello ha cambiado se ha morigerado la reducción del gasto militar, elevado las ventas (tras 7 años de descenso, 1996 fue el segundo año de crecimiento de esas ventas, 36. 900 millones de dólares 1995 y 40 millones en 1996, Instituto de Estudios Estratégicos, IISS, EM. 14. 10. 97) y la confrontación por el mercado de las armas, influyendo ello en la situación de Latinoamérica país. El reciente levantamiento de la moratoria de las ventas de armas sofisticadas de EEUU, ha motivado la apreciación del ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, que "se corre el riesgo de echar por tierra los limitados logros que hemos alcanzado en el ámbito de la desmilitarización democrática" en América Latina (EM03. 08. 97).

De este "nuevo pacto" conviene destacar algunas características y objetivos.

1. "Consenso a la chilena"; no subordinación de las FFAA al poder civil.

El "nuevo pacto" se ha viabilizado sobre la base del avance de dos acuerdos primarios; "el consenso básico alcanzado por la sociedad chilena en torno a la economía de mercado como el único sistema político que puede facilitar. . . un acuerdo sobre la igualdad social" es "la democracia" (E. P. Y. marzo 1995. Doc. Min. Defensa). Existiendo la necesidad de consensuar el "20% de la Constitución no consolidada" para tener en "sólo texto en el cual identificamos". (Eduardo Pérez, ibid.).

El tercer tema del acuerdo; la nueva relación cívico-militar, polémico de por sí, es el que está en curso. Su aspecto principal; la subordinación de las FFAA al poder civil soberanamente resuelto sigue siendo materia

resuelta. la fórmula de consenso ha sido la propuesta por el Ministerio de Defensa 'no recrear, sino repotenciar' (Documento Min. Def. 03. 05).

Solo momentos de crisis han motivado a algunas autoridades a explicitar más abiertamente esta realidad. Así el propio Presidente de la República. Eduardo Frei, afirmó, en medio de la crisis por el caso Contreras, que 'la reconciliación entre los chilenos está pendiente. . . El gobierno ha enfrentado delicadas situaciones. . . la ciudadanía ha experimentado las limitaciones que tiene nuestra democracia. . . algunas instituciones de la república están lejos de funcionar restringidas por disposiciones ajenas a nuestras tradiciones constitucionales. . . nuestra democracia no requiere de organismos que la protejan de sí misma. . . Es tiempo que miremos sin temores el funcionamiento de nuestra democracia, sin tuteladas ni resguardos que menoscaban la dignidad de los ciudadanos, en cuya soberanía descansa su existencia y legitimidad' (L. E. 22. 08. 95).

Diez días después de estas declaraciones de altos mandos, rechazarían por segunda vez, bajo gobiernos de la Concertación, la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de las FFAA, planteada por el Presidente Frei en su discurso (E. M 30. 08. 95) previamente a estas declaraciones, tras el mitin militar de punta Peuco, el propio Presidente Eduardo Frei solidarizará por 'razones de Estado' al consejo de Defensa del Estado desistirse en el caso Valmoral de enjuiciar al hijo mayor de Pinochet por fraude al fisco (LE 27. 07. 95).

El Mercurio', asume esta realidad afirmando que 'LAS FFAA y los servicios de seguridad son evidentemente un poder. . . y se saca muy poco con ignorar esta realidad. . . los llamados poderes fácticos, entendidos como la influencia de los diversos estamentos de la comunidad, son deseables respetables y convenientes para la marcha sana de una nación' (EM. 09. 02. 96) como señaló el dirigente socialista

Clodomiro Almeyda, la Concertación ha sido débil en su actitud hacia las FFAA, 'al tratar de no tocarlas, ni con el pétalo de una rosa' . . . 'se observa la militarización de la sociedad chilena, en la que hay un Estado dentro de otro Estado. La reforma (al sistema judicial) no toca la justicia militar, y así preserva el hecho no democrático que la justicia militar mantenga una competencia que le permita tener una jurisdicción en los asuntos públicos'. (L. E. 3. 08. 97). Por ello, la actitud mezquina y obstructora del Ministerio de defensa actual hacia la memoria y la justicia en el caso del general Carlos Prats, quien sostenía que 'Como fuerza armada de un Estado de derecho, el Ejército conoce y cumple la premisa de que le está vedado deliberar a las alternativas políticas nacionales por lo tanto no compete calificar aquellos actos de los poderes del Estado que resultan conflictivos en el libre juego de una democracia, puesto que cada uno de ellos tienen atribuciones y responsabilidades constitucionales, exclusivas y definidas' (MEMORIAS). testimonio de un Soldado. Carlos Prats G. Sept. 1984).

Mesquinos logros alcanzados en esta materia muestran que el objetivo democrático esencial ; la subordinación militar al poder soberanamente resuelto no está planteado como un desafío principal por parte de los gobiernos de la Concertación.

2 La legitimación del desacato militar al poder civil.

En la política comunicacional oficial el tema del militarismo pareciera ser cosa del pasado. Pero crisis y minicrisis, en la relación interpoderes, que irrumpen con notable regularidad en la actual "transición ejemplar", obligan a considerarlo como un factor fundamental de la actualidad real. Una de sus características es el desacato, la desobediencia, hacia el poder civil.

El historial en estas materias es largo y recurrente; cartas del General NN en 1990, al comienzo del gobierno de Aylwin; rechazo del

ejército a la petición presidencial de entrega de los archivos de la Dina -CNI, junio 1990; ejercicio en la "enlace" en diciembre 1990; público redazo de las tres instituciones militares al informe de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia, abril 1991; "boinazo", el 28 de mayo de 1993; rechazo a las propuestas presidenciales de reforma constitucional para la remodelación de mandos, 1993 y 1995; maniobras de desacato y presión militar para negociar la entrega del general Manuel Contreras y del brigadier Pedro Espinoza, entre junio y octubre de 1995; o a la más reciente el cuestionamiento y delimitación por parte del general Pinochet del acuerdo de maniobras militares conjuntas acordadas entre los gobiernos de Chile y Argentina, Agosto 1997.

Los momentos de tensión que estas acciones originan, orientan públicamente del curso que llevan las negociaciones entre el poder militar y el civil, en la definición de áreas de influencia. A través de este intrincado proceso se va conformando la "democracia" acorde a la Constitución del 80. que círculos militares denominan "militocracia", por el reemplazo de la soberanía popular por los "garantes de la institucionalidad", los altos mandos de las FFAA. a la vez da cuenta de uno de los rasgos fundamentales del militarismo actual "El militarismo es una forma de Estado en la cual el Ejército juega un papel preponderante". (Alvaro Quiroga, El "prusianismo" en las fuerzas Armadas chilenas, Cuadernos de Orientación Socialista", N° 14-15. Abril 1983).

El accionar timorato del mando político ante estos fenómenos marca el carácter débil y conciliador del nuevo "escalón político", en reemplazo del carácter enérgico y digno de jefes de Estado como el Presidente Salvador Allende. Como contrapartida **el poder militar ha ubicado al chantaje de la fuerza**, como una forma legítima "de expresar sus malestares, teniendo como límite eso sí- los marcos de su propia Constitución.

Aunque el consenso predominante atenúa los conflictos, estos fenómenos perviven y resurgirán ante cualquier decisión democrática de reducir las esferas de influencia del militarismo en la sociedad. Las acciones de chantaje militar sobre la población, persistirán, aunque no sean ya encabezadas por Augusto Pinochet.

El monopolio de la fuerza y la asimetría de resultados de las negociaciones

Característica del proceso de acuerdo es también la clara asimetría en las concesiones hechas por ambos actores; gobierno y mandos militares.

La concertación de partidos por la Democracia ha aceptado el costo mayor; Enmarcó el proceso de transición en los límites de la Constitución del 80, pese a sus cuestionamientos previos; mantuvo a Augusto Pinochet como jefe del ejército durante sus dos períodos de gobierno; aumentó y legitimó un gasto militar que estima hasta 1986 como excesivo, permitió un alto nivel de autonomía/desacato de los institutos armados en los que no promovió modificaciones de importancia, como los que había recomendado la Comisión Rettig; no puso atajo al sobredimensionamiento de la justicia militar, al contrario aceptó la continuidad de ese proceso anormal; consensuó la aplicación de hecho de ley de amnistía y permitió, por tanto, la consiguiente impunidad de las violaciones de los DDHH, extendida a nuevas acciones bajo su propia acción gubernamental (caso Berrios, 1992, diversas situaciones vinculadas al servicio obligatorio).

A siete años de gobierno concertacionista la apreciación de instituciones especializadas en la materia es que las FFAA mantienen "una **alta influencia en la política chilena**" y a nivel Latinoamericano no sólo ostentan el mayor gasto porcentual, sino que son también "el **poder militar más significativo**" informe 1996 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, (IISS). Ello constituye uno de los rasgos destaca-

dos del actual militarismo latinoamericano. En opinión del estudioso colombiano Edgar Caicedo ''Se trata de una cuestión más que de cantidad, cualitativa. No depende tanto de la magnitud del cuerpo castrense y del volumen del armamento, sino de cómo gravita en la política del Estado, de la razón de su surgimiento y del ambiente ideológico y político que crea en su torno. . . el fenómeno militarista emerge yuxtapuesto al Estado burgués, sino que consiste en la transformación de ese mismo Estado a una condición tal en que la insidencia del factor militar pasa a ser sustancial, constitutiva, suya'' (E. Caicedo. **Militares y Militarismo**, Edic. fondo Editora Sudamer. 1989).

Los altos mandos han aceptado la existencia de un poder civil con incidencia mayor en áreas, como las protocolares, las relaciones externas, las económicas. Y la coexistencia en otras como las presupuestarias, la seguridad interna, o la nominación de altos mandos. También han aceptado y participan con esmero en distinto tipo de seminario y comisiones promovidos desde el área civil y política, generando ellos también sus propias instancias de discusión más pública con el escalón civil.

Han aceptado el repliegue en el plano de la política contingente, actuando sí más activamente por la vía de operaciones de inteligencia en situaciones o casos que estiman de trascendencia mayor (**aborto de la precandidatura presidencial de Sebastián Piñera, 1993; denuncias por consumo de drogas en el parlamento, aportando a su desprestigio acciones contra la Dirección de investigaciones, que implicaron la caída de Horacio Toro y el permanente ostigamiento contra su actual Director Nelson Mery**). Esta autoeliminación política se ha suspendido en los períodos de crisis (el diputado Jorge Schaulsohn denunció 18 intervenciones políticas de altos mandos del Ejército en caso encarcelamiento Manuel Contreras, 1995 y el Presidente de Renovación Nacional,

Andrés Allamand, calificó en medio de estas crisis como ''Comisión Política'' al cuerpo de Generales de la institución). El costo mayor que ha debido absorber ha sido el encarcelamiento del ex jefe de la Dina Manuel Contreras y otros pocos funcionarios militares, responsables de violaciones a los DDHH en un recinto especialmente para este objetivo, bajo su propia custodia y una más formal de Gendamería. También el desplazamiento del Director general de Carabineros, Rodolfo Stange, y un acercamiento mayor de su reemplazante, el general Fernando Cordero al Gobierno (Votación favorable al Gobierno en nominación de representantes del Consejo de Seguridad Nacional en el Tribunal Constitucional, marzo 1997) entra también en los costos que ha debido asumir el poder militar.

En esta asimetría de concesiones, las diversas expresiones de fuerza del poder militar, usadas como elementos de chantaje, han jugado un importante rol, delimitando y reduciendo las iniciales demandas democráticas concertacionistas.

La Concertación que tuvo su origen y su acceso al gobierno en base a fuertes movilizaciones populares y a la activa participación social, se ha negado sistemáticamente durante sus dos períodos a hacer de ellas un elemento de contrapeso al chantaje.

Se puede concluir que los ayer ''opositores democráticos'' a la dictadura han mostrado mayor capacidad de aceptación asimilación de las normas impuestas por ésta, que su contraparte, los mandos militares, en la aceptación de normativas democráticas.

Mientras éstos han rechazado explícita o implícitamente toda reforma parcial orientada a restituir parte del poder civil sobre la institución militar, el concertacionismo ha sido permeable a la aceptación y convivencia con diversas expresiones del militarismo.

4. ¿El retiro de Augusto Pinochet; fin de la transición en las FFAA?

Condición obligatoria para el proceso de consensos en curso es la relación con el otrora dictador y aún hoy comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, unido a una progresiva labor de '**Blanqueo**' de su régimen. La petición inicial de renuncia a éste por parte del Presidente Patricio Aylwin, terminó en el implícito reconocimiento y valoración del período anterior (alabanzas a sus éxitos económicos; y valoración de su aporte a la '**transición democrática**').

Augusto Pinochet considerado ya en la década del 80 un obstáculo para el desarrollo del modelo económico por él impuesto (problemas de estabilidad interna, dificultades en la inserción internacional), es asumido como una necesidad para la '**estabilidad de la transición**' **asi se ha castrado un elemento democrático básico; el debilitamiento del militarismo a través del desplazamiento de Pinochet de sus posiciones de poder.**

Asumido Augusto Pinochet, como una '**razón de Estado**', se suceden las declaraciones ministeriales y gubernamentales en su defensa interna e internacional. No siendo necesario ya, que lo haga su propia institución. Es el gobierno chileno el que promueve la defensa del dictador ante la repulsa que mantienen sectores democráticos en diferentes países. Las últimas acciones han sido las motivadas en la indignación de organizaciones de derechos humanos, sociales e institucionales de Ecuador por la presencia del Dictador en la junta de Comandantes en jefe de los Ejércitos Americanos, en Octubre de 1997.

La llegada del empresario DC Edmundo Pérez Yoma al Ministerio de Defensa, al asumir **explícitamente la legitimación nacional e internacional** del exdictador, ha sido factor decisivo en el acelerado avance del '**nuevo pacto**'. Sus posiciones, críticas inicialmente al interior de la

concertación (agradecimientos a Israel por no haber participado del bloqueo democrático sobre la dictadura; presiones por terminar con el caso de los pinocheques; defensa desde Madrid, abril de 1997, del rol de los institutos militares en el período dictatorial en respuesta a las aseveraciones del ex Presidente de la República Patricio Aylwin), vistas inicialmente como expresiones poco afortunadas, se impondrán a la larga, por su lógica vinculada al segundo gobierno concertacionista; los temas de la agenda son de presente y futuro, no del pasado. Es política es la que ha llevado a la avergonzante actitud del Diputado socialista José Viera Gallo ante el jefe subrogante del Ejército, tras sus declaraciones que Pinochet habría metido las manos''.

La salida de Pinochet, condicionada por su propia Constitución, se trabaja en base a su visión de que '**no me iré hasta que no deje solucionadas todas las situaciones institucionales pendiente. . .**' (LT 26. 12. 93). El propósito gubernamental se ha orientado a facilitar a esas soluciones. De allí el esfuerzo del ministerio de defensa por delimitar al máximo el juicio por el caso Prats en Argentina, las presiones por dejar encaminada la libertad condicional para Manuel Contreras y Pedro Espinoza.

A lo cual se une la reciente solicitud del Ministerio público Militar a la corte Suprema pidiendo el cierre de 200 procesos en los tribunales y el sobreseimiento definitivo de 640 causas más, que afectan a militares en base a la ley de admistía (EM 24. 09. 97).

Sobre esas bases se prepara con boato la despedida del '**primer infante de la Patria**', a más tardar en Marzo de 1998.

En el libreto oficial el fin de la carrera del militar más antiguo del mundo, se trabaja comunicacionalmente tanto en lo nacional como internacional como el fin de la '**ejemplar transición chilena**' a la democracia, en su área más difícil, la militar. La decisión de este de constituirse en '**Senador**

vitalicio'' desarma parte importante de la construcción gubernamental y particularmente del ministerio de defensa orientada a prefijar como ''tiempo para reformas'' el período post retiro de éste.

Aunque la salida de Pinochet del mando del Ejército es un hecho relevante, su reemplazante será en término de cambios significativos en los institutos militares, particularmente de esa institución. Las visiones militaristas, anticomunistas, vinculadas a la doctrina de seguridad nacional y al terrorismo de Estado que él encarnó, continuarán reproduciéndose, como ha ocurrido durante los regímenes gubernamentales de la concertación. A su vez la política de ''blanqueo'' de sus acciones, ha posibilitado su autodesignación como senador vitalicio, y elemento central de la ''bancada militar'' en formación en el Senado. Pinochet quedará ''expuesto'' a la lucha política, pero unido umbilicalmente a su institución como figura emblemática de ella.

5. Mercados, militarismo y Defensa

El desplome de los regímenes socialistas de Europa del Este, particularmente de la URSS, y la propia dinámica concentradora y hegemónica en la economía, revitalizó en una nueva dimensión la lucha por los mercados y el rol de la fuerza militar en su distribución.

Los fines de la década del 80 y más de la primera mitad de la del 90 han estado marcados por guerras vinculadas a motivos religiosos, o étnicos, pero unidas también a la redefinición de mercados y zonas de influencia. Guerras como las de Chechenia, Yugoslavia, o la del Medio Oriente reflejan la magnitud y dimensión de estos fenómenos.

El general John Shalikhshvili, Jefe del Estado Mayor Conjunto de los EEUU, declaró que la ''doctrina que es el núcleo y motivación de nuestra estrategia ''es '' que en la democracia los mercados libres crean prosperidad y satis-

facción y éstas conducen a la paz'' , Debemos mantenernos en nuestro papel de nación que va a la cabeza del mundo. Seguimos siendo la única superpotencia que queda. . . El hecho que seamos la nación que encabeza el Mundo Libre ha hecho que seamos más ricos y más prósperos. Nos ha proporcionado la influencia para diseñar el orden económico del mundo en una forma tal que favorece a nuestros propios sistemas y requerimientos económicos. Nos ha permitido amoldar las respuestas de la comunidad internacional. . . '' (Serv. Inf. Embaj. EEUU 18. 03. 94)

La extensión de la OTAN hasta las fronteras de RUSIA, el despliegue nuevamente de tropas alemanas y japonesas, fuera de sus fronteras, tras 40 años de prohibición, forman parte también de este peligroso proceso de dominio transnacional.

Esta lucha por el dominio de los mercados lleva implícita el despliegue de los elementos militaristas que también influyen en nuestra realidad.

Esta temática es área de encuentro y desencuentros entre el poder civil y militar.

Para el acercamiento de posiciones el Ministro de Defensa plantea que; ''**Somos una potencia mediana, involucrada en procesos de integración y apertura que involucran riesgos, pero también oportunidades; con reducidos-aunque crecientes intereses en otras latitudes y aún con serios desafíos de pobreza que superar. Pero también con la exigencia de un papel distinto al que tradicionalmente hemos tenido en el ámbito mundial'' . . . '' Chile está adquiriendo responsabilidad de protagonista efectivo y no virtual, en el mundo y, particularmente en el territorio americano'' . . . Las tendencias y variables. . . nos apremian a analizar y proponer los siguientes puntos:**

***'' revisar la concepción, llámenos la ''clásica'', que la comunidad de defensa tiene de las amenazas que enfrentamos y los riesgos consiguientes;**

* 'evaluar la eficacia de los actuales mecanismos de seguridad continental, proponiendo incluso su modificación';

* considerar el compromiso de Chile en otras áreas;

* sopesar y seleccionar, de acuerdo a lo que nuestra sociedad está preparada para ofrecer y como contrapartida los compromisos que estamos adquiriendo, el aporte de Chile a la paz cuando la solución jurídica de un conflicto no sea posible'. (Doc. Min. Defensa 07. 03. 95).

Así, a partir de la definición de 'unapotencia mediana' Edmundo Pérez ofrece al poder militar atractivos, que bajo su propio régimen no pudieron tener; misiones internacionales, rol más activo en América Latina y preocupación por los 'reducidos pero crecientes intereses en otras latitudes'. También sostendrá 'que ellas' **tengan instrucción militar a nivel OAN'** (E. M. 02. 04. 97). Pinochet ya ha aceptado lo primero, precisando con sorprendente prudencia- que la participación en misiones internacionales de paz de ONU' debe tener como fundamento el entregar una ayuda humanitaria y no el empleo coercitivo de la fuerza para imponer la paz' (EM 22. 08. 97).

Esta relación entre dimensión económica del país y fuerza militar será punto de acercamiento entre especialistas del Ministerio de Defensa y mandos militares bajo el criterio de la '**Dinámica de la defensa'**'. por lo que el diario 'El Mercurio' sostiene que, ello obliga a que '**La política disuasiva (de defensa sea complemento fundamental de la política exterior y ella significa reaccionar con toda la tecnología (Militar) que se pueda obtener según los recursos que se disponen'** (EM. 03. 96).

Esta '**dinámica de la defensa'**' aparece como complemento de la agresiva inserción económica internacional. Entre 1990 y 1995 'capitales chilenos' han adquirido la propiedad total o parcial o de 196 empresas en el extranjero, por un total de 2, 277 millones de

dólares. En esta conquista y defensa de mercados el tonomás polémico lo colocan las 'inversiones chilenas' en el exterior y particularmente en los países limítrofes. Argentina con US\$ 6. 858 millones de dólares (19%) y Bolivia concentran parte importante de los US\$ 10. 700 millones que constituyen esta inversión a junio de 1996. (Estudio de la Cámara de Comercio, 1996).

La agresividad del expansionismo capitalista chileno transnacional hacia América Latina, particularmente hacia Argentina, Perú Bolivia y la identidad que se intenta producir entre esos capitales y el 'interés nacional', son fenómenos, que preocupan. Personeros como el diplomático José Miguel Barros, ha traído a la actualidad una carta dirigida por el historiador Diego Barros Arana al Presidente Aníbal Pinto el 31 de Marzo de 1877, en que aquel señala; '**Yo creo que bajo ningún aspecto está en nuestro interés esto de hacer cuestión diplomática por cada palo que se da a un chileno o por cada peso que se le quita (en exterior)... pero que porque tratan mal a uno o muchos chilenos que se olvidan de su patria, vaya Chile a entrar en cuestiones que puedan conducir a una guerra o algo parecido, me parece un remedio peor que la enfermedad'**.

6 Mercosur, ALCA y política de EEUU.

La integración de Chile en el Mercosur, con un mercado de doscientos millones ha abierto un interesante proceso, que incide abiertamente en las definiciones de las políticas de defensa, que generan tensiones adicionales con construcciones militaristas predominantes en los institutos militares y elementos de roce con los EEUU.

Sin concepción, ni decisión integracionista, los gobiernos concertacionistas motivados fundamentalmente por la dinámica económica, intentaron primero vincular el país al Nafta. Fracasados esos intentos el Gobierno intentó cabalgar en dos monturas; incorporarse al Mercosur, camino propicio para exportaciones del sector industrial y de servicios, y a la

vez impulsar la propuesta norteamericana, el ALCA. Nuevas dificultades comerciales y cambio en prioridades de la expansión de los grupos económicos nacionales acercaron más a Chile al Mercosur (''Desde el punto de vista comercial'' pertenecer al Mercosur es '' esencialmente más interesante'' que hacerlo con el Nafta es la apreciación. ej. de Eliodoro Matte, Mapa Actual de la Extrema Riqueza. Hugo Fazio, pp176 LOM Ediciones 1997).

Esta relación político-económica tardía, pero positiva, ha iniciado un proceso que acerca a Chile a sus congéneres latinoamericanos y que choca con la visión enclaustradora del militarismo. Postura que ha incidido, sin ser el único factor, en la política zigzagueante que han mantenido los gobiernos de la Concertación en estas materias.

EEUU no ha escatimado esfuerzos para presionar en contra de este acuerdo económico que rompe su monopolio diplomático económico, basado en el bilateralismo, o en el tipo de organizaciones ''americanas'', como la OEA. Esta actitud se hace más agresiva al considerar que el principal país del bloqueo, Brasil, consideraba esta articulación paso previo para las negociaciones económicas con los EEUU.

A través del Banco Mundial, EEUU ha acusado a MERCOSUR de ''**proteccionismo e indiferencia**'' (E.M. 2. 11. 96) y presiona porque éste **profundice la apertura hacia afuera del bloque**'' (EM06. 07. 97). El diario ''La Nación de Buenos Aires, informada recientemente; ''**EL MERCOSUR GOZA DE BUENA SALUD, PERO PUEDE TENER UN ADVERSARIO TEMIBLE**. Nada menos que los EEUU ''una controversia no es lógicamente algo bienvenido, ni en Brasilia, ni en Buenos Aires. Tampoco en las otras capitales del MERCOSUR ni en Santiago de Chile, donde según fuentes autorizadas, Eduardo Frei ya se inclinó definitivamente por el ingreso al MERCOSUR antes que se inclinó definitivamente por el ingreso al MERCOSUR antes que se concrete la asociación

al NAFTA'' (EM06. 07. 97). Por ello, promovido fundamentalmente por militares brasileños, se han venido produciendo intercambios y reflexiones sobre coordinaciones militares en el MERCOSUR, pues como sostuvo el general de brigada brasileño Paulo Roberto Yog '' **el MERCOSUR PUEDE PROPORCIONAR LA SIEMPRE DE UNA DEFENSA EN BLOQUE CONTRA AMENAZAS COMUNES**'' (E. M. 25. 06. 97). Un camino interesante, si es que estas amenazas son las externas y no se orienta el uso de estas coordinaciones para confrontar problemas internos, contra el ''Terrorismo'' y la ''subversión'', por la formación e historia previa de algunos de estos mandos, como lo ha mostrado un reciente documento proveniente de círculos del Ministerio de Defensa de Argentina, (EM30 07. 97), o como fue la propuesta del alto mando del Ejército chileno en la Conferencia de Ejércitos Americanos de 1986.

Es en este complejo cuadro que es necesario considerar las últimas medidas de EEUU; el término del embargo en la venta de armas sofisticadas a países de América Latina (Brasil, Chile, entre los más interesados) y el reciente anuncio de dar a Argentina el título de ''**Aliado Principal no Miembro de la Otan**'', división para reinar, reinar, han sido tácticas permanentes del imperio para imponer sus intereses a Latinoamérica. A la vez siempre han existido personajes como Carlos Menem. Presidente de Argentina, dispuestos a recibir migajas por hacer la labor sucia de dividir desde dentro las intenciones de actitud independientes de los EEUU. Tampoco aportan en esta relación con Argentina las estrechas vinculaciones militares chilenas con Inglaterra.

La reacción oficial chilena ante este anuncio ha estado muy marcada por la necesidad del acuerdo interno con los mandos militares. **LA PROCLAMADA ACTITUD ''independientes''**, de Chile ante EEUU es naturalmente interesante, si no sólo lo fue por lo ocurrido con Argentina y se compadeciera con una actitud de soberanía geoeconómica y de mayor independencia internacional. Si esta actitud '' in-

dependiente'' jugara a favor de un curso de integración latinoamericana, sería naturalmente más que interesante. Pero, más parecen frases hechas para indicar la buena recepción que al interior del Gobierno tiene el malestar militar enraizado lejanamente en la aplicación de la Enmienda Kennedy por las violaciones a los derechos humanos.

7. hipótesis de conflicto y militarismo.

Para la defensa, los desafíos actuales no son temas de fácil resolución. La línea principal es una corriente de complementariedad económica, con presencia de capitales nacionales y transnacionales, pero que pudiera abrir espacios a una positiva línea integracionista con países concebidos durante décadas como ''enemigos potenciales''. Secundariamente surge también la visión de ciudadanos de países limítrofes de estar ante ''**la reedición de un expansionismo chileno**'' en el extremo sur del continente, que conlleva pérdida de bienes estatales, liquidación de conquistas sociales y contribuye a la transnacionalización de sus conquistas sociales y contribuye a la transnacionalización de sus economías.

Protestas en Buenos Aires contra empresas energéticas ''chilenas'', o en la Paz contra los nuevos dueños ''chilenos'' de la Empresa de FFCC, así como encuestas de opinión muestran lo contradictorio de estos fenómenos. La disminución en un 43% del ritmo de inversión en Bolivia, en 1996, tras las manifestaciones en la paz con quema de banderas chilenas y apedreos a empresas ''chilenas'' en el curso de este año, lo ocurrido con la participación de capitalistas ''chilenos'' en la obligación a la reiterada intervención del embajador chileno en ese país, por el ''trato discriminatorio a estos capitales'', indicaría la complejidad de las nuevas relaciones.

A esta complejidad se une la importancia creciente del Océano Pacífico en el comercio mundial y la perspectiva de construcción de corredor biooceánicos, transformando a los

países de la costa del Pacífico en entrada/salida entre los países del Asia y el centro de América del Sur hacia Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Chile tienen la necesidad objetiva de la integración. Pero también los intereses privados y transnacionales, existentes tras estas propuestas, tienden muchas veces a fortalecer más las relaciones de competencia desleal, que la complementariedad/integración como el camino más promisorio). El mismo peso de estos trae también fricciones. Asuntos como el uso de corredores, transporte, aduana acceso a puertos, etc. son complejos para la definición de una política de defensa nacional.

Estas corrientes de complementariedad económica entre Chile, Argentina Mercosur encuentran dificultades en la generación de corrientes similares en el plan militar. Con Perú, proclamado por Fujimori ''Potencia del Pacífico el proceso es aún más dificultoso.

Un conocido defensor del militarismo en Chile, el general Alejandro Medina sostiene que ''muchas de las reivindicaciones vecinales de terrenos siguen vigentes en la zona, así como algunas intenciones de expansionismo y la misma integración económica podría generar un proceso cada vez más generalizado de intervención en la política interna de cada nación'' (EM10. 12. 96)

La reducción por parte del jefe del Ejército. Augusto Pinochet, de las ''maniobras militares combinadas'' chileno argentinas, dispuestas por el gobierno de Chile, (EM 17. 07. 97) a **simples ejercicios conjuntos**, y que terminarán definitivamente en ''ejercicios computacionales'' (EM03. 09. 97) indica las tensiones que genera el intento de distanciamiento de las hipótesis tradicionales en las visiones militaristas predominantes en Chile.

Interesante en la argumentación de Pinochet es ''La falta de un enemigo común'' para la realización de las maniobras con unidades militares de los EEUU la duda es ¿cuál es el ene-

migo común para Chile, en este caso. (La armada realizó la 38 operación Unitas con la Armada de EEUU, sept 1997. EM16. 08. 97).

Ya en 1996, tras una nota secreta enviada por las FFAA al gobierno el general Hugo Jaque jefe de la VI División del Ejército planteó abiertamente la preocupación militar por no ser consultados acerca de los eventuales riesgos de los recursos "chilenos" en el exterior. Jaque adelantó **'que serían problemáticas las inversiones en electricidad en Argentina si no se respaldaban fuertemente para respaldar exigencias.**

Sostuvo que en Bolivia y Perú podría ocurrir algo parecido por ningún país latinoamericano abriría totalmente sus fronteras, pese a sus buenos deseos'' (EM13. 10. 96). Según ''El Mercurio'', con las declaraciones de Jaque quiso recordar ''Que hay constituciones como las de EEUU que entregan a las FFAA la misión de ser brazo ejecutivo de su política exterior'' (EM13. 10. 96).

Reafirmando la relación entre hipótesis de conflicto-intereses económicos y países limítrofes, el cientista político, vinculado al poder militar, Emilio Meneses sostiene que **'la defensa no es un problema de territorio, si no que incluye el resguardo de los intereses y de los bienes de cada Estado debe velar.** Siempre las guerras se han producido por problemas de intereses o valores entre naciones por los cuales los países están dispuestos a usar la fuerza'' De aquí la falacia que se sostuvo en el gobierno de Aylwin en el sentido que resolviendo nuestros conflictos territoriales se solucionaban los conflictos con los países vecinos'' (EM07. 02. 97)

El jefe de la Armada argentina, almirante Enrique Molina, ejemplificó la nueva situación surgida con las inversiones chilenas, mencionando la posibilidad que un conflicto en la central hidroeléctrica de ''El Chocón'' bajo control empresarial chileno, indicando que su país ''no estaría en actitud de desplegar sus fuerzas de seguridad para

controlar un conflicto en el cual se verían involucrados intereses de otro país. . . que en ese caso podría existir un pedido de Chile para asegurar su patrimonio con la utilización de sus propias fuerzas en territorio ''argentino'' (EM04. 10. 96).

El Libro de la Defensa Nacional de Chile da cuenta de este contradictorio proceso al reafirmar las hipótesis de conflicto tradicionales del País. Argentina Perú, Bolivia, añadiendo luego que tiene baja la probabilidad de ocurrencia. Brasil y Argentina pese a las vueltas de su Presidente, en su relación mutua han sido más explícitos, al descartar la hipótesis de conflicto en sus fronteras, dar pasos hacia su desmilitarización y maniobras militares conjuntas, a las cuales se ha incorporado también Uruguay. Naturalmente la decisión de EEUU de declarar a Argentina ''Aliado principal no Membro de la Otan'', es un dardo contra su antiguo aliado principal, Brasil y un elemento de fricción en el proceso de acercamiento político-militares en desarrollo.

En conclusión se puede afirmar, que siendo la tendencia en el continente la superación de antiguas hipótesis de conflicto y el surgimiento de nuevas amenazas, externas vinculadas al carácter unipolar del actual dominio, las visiones geopolíticas del militarismo, negadas a políticas de integración/desarme, se mantienen como un lastre para procesos de complementariedad económica y de integración en ciernes. La acción de militaristas chilenos, argentinos o peruanos, de mantener encendidos focos de conflictos limítrofes, alimenta sus necesidades de gastos, tropas, armamentos, pero no favorece el necesario proceso de acercamiento a que conduce la complementariedad económica actual.

8. Militarismo, armamentismo y gasto.

Siendo tendencia mundial la reducción del gasto militar, Chile ha continuado

incrementando su gasto militar. Este es punto esencial del 'nuevo pacto'. Con US\$2.760 millones, un 3.5% del PIB, de gasto militar para 1996, (Documento Cenda, enero 1996) Chile se ubica en el primer lugar en toda América Latina (Naciones Unidas. Informe para el desarrollo. EM 26. 01. 97). tal información, coincidente con las entregadas por el Instituto Internacional sobre la Paz de Estocolmo, Sipri, el Instituto Internacional para los Estudios Estratégicos (IISS) de Londres y el Instituto de Relaciones Internacionales (IRIS) de París (EM 0. 05. 96), ha merecido sistemáticamente el rechazo gubernamental. Se firma que el gasto militar sólo alcanza al 1.8% del PIB (EM 7. 05. 96-28. 01. 97) dejando fuera el gasto de una política militarizada, los gastos previsionales y los ingresos propios de las instituciones militares.

En esta materia el esfuerzo común Gobierno-FFAA, (convenio también con sus congéneres de Argentina) es pedir que instituciones como el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional diseñen una metodología de medición del gasto (EM 18. 07. 97). Se pretende 'resolver' este problema invalidando por vía de instituciones más vinculadas a los EEUU, las cifras de prestigiosos centros internacionales no gubernamentales.

La validación para este gasto está dada; por el rol de las FFAA de 'garantes de la institucionalidad'; por la reafirmación de las hipótesis tradicionales de conflicto, según las cuales podemos **enfrentar simultáneamente a tres enemigos potenciales** (Argentina, Perú, Bolivia). Por tanto, se sostiene, el dimensionamiento militar debe ser acorde a esta potencialidad del conflicto (EM Edo. Santos, Ministerio de Defensa, 7. 05. 96); -y el correlato que debe existir entre la potencia económica del País. su poder militar (lógica de la '**Dinámica de la defensa**) y su presencia internacional.

El cambio en la postura concertacionista frente al tema ha sido impactante. Si el período

dictatorial el gasto militar, US\$1.600 millones en 1988, según cálculo del actual senador Carlos Ominami, se estimaba '**excesivo**'; en el primer gobierno de la concertación dicho gasto se estimó '**prudente**' y '**necesario**' y tuvo ligeros aumentos; en el gobierno del Presidente Eduardo Frei se lo estimó un '**mínimo para la sobrevivencia de las FFAA**', agregándose afirmaciones por parte del Ministro de Defensa que '**los sueldos de las FFAA han caído en un 30%**', Ello ha conducido a que junto al gasto indicado haya que considerar como aportes extras un 18% de reajuste (4,5% para concepto de salud y 13,5% para sueldos) en 1996 (EM 16. 05. 96) y \$16 mil millones acordados en 1997 para evitar la desertión profesional desde los institutos armados. Lo criticable en ello no es el mejoramiento de los ingresos de este criticable en ello no es mejoramiento de los ingresos de este importante número de chilenos, sino el rechazo que reciben peticiones similares de funcionarios fiscales, o de trabajadores vinculados al aparato estatal, generándose así situaciones de privilegio que aíslan aún más a las instituciones militares de la ciudadanía. Otro aspecto significativo del gasto es la magnitud del gasto reservado de las instituciones militares. Refiriéndose al presupuesto 1997, el senador Jorge Lavandero, presidente de la comisión de presupuesto del Senado, denunciaba: 'Los grandes despilfarros se dan en las FFAA, Mientras los gastos reservados de todo el Gobierno no suman más de 30 mil millones de pesos, sólo los Ejército llegan a esa misma cantidad, mientras que los de las FFAA, en conjunto, suman 80 mil millones de pesos' (EM 26. 09. 97).

Recuérdese que el diputado Vicente Sota denunció en 1991 que el gasto reservado de Pinochet era de US\$3.000.000)

A lo anterior se une la preocupación por el patrimonio real de los institutos armados y la autonomía de que gozan para su manejo. Por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales estimaba que el 11% de la superficie de la Región Metropolitana es de propiedad del Ejército (Revisión análisis 11. 11. 91). (disponiendo la Arma

da de porcentajes aún mayores de la ciudad portuaria de Valparaíso) y junto a ello dispone de una ley, 18.372, aprobada en noviembre de 1989 que deja en sus manos "la representación del Fisco para adquirir, a cualquier título, bienes raíces para instituciones y para enajenarlos".

Voceros militares y gubernamentales niegan que Chile sea el país de mayor gasto militar porcentual en América Latina.

También rechazan las acusaciones de que Chile es parte de una carrera armamentista en el cono Sur.

El rechazo del Presidente de la República, Eduardo Frei, a la "**Pretensión de hacernos responsables de una eventual carrera armamentista en el continente**" (EM Lanzamiento del Libro de la Defensa Nacional, 21.08.97) lamentablemente choca con hechos concretos y con la apreciación responsable de diversas personalidades internacionales.

No se trata de compras menores, ni aisladas. Son adquisiciones que muestran un curso ascendente. Compras principales presupuestadas son 16 a 20 aviones F-16, o modelos similares con un presupuesto para ello del orden de los US\$ 600 millones; 2 submarinos por US 450 millones y 250 tanques Leopard para el Ejército la suma de estas adquisiciones supera con largueza los millones de dólares. A ello se deben agregar un conjunto de otras adquisiciones ya realizadas o en curso.

Argumento central de estas adquisiciones es que "**Chile está renovando equipos y no potenciando sus FFAA**" (EM Edo. Santos. asesor M. Defensa. 07.02.97) y que a la vez implica reestablecer un equilibrio estratégico, producto de las adquisiciones realizadas por países limítrofes en los años 70 y 80 (EM Edo. Santos 19.02.97). A ello se agrega el argumento que Chile tiene hoy "**una política transparente**" de información abierta de las adquisiciones que está estudiando realizar y la

existencia ahora de un Libro Blanco de la Defensa Nacional.

Todo ello interesante, pero no va a lo principal. Chile contribuye con su línea de significativas adquisiciones militares en un período de acuerdos de complementariedad económica, no a la búsqueda de "medidas" de confianza "más reales y sólidas en el tiempo, como es la política de congelación de compras militares para abrir caminos a formas de desarme regional, sino que impulsa la línea opuesta, congraciándose así con el militarismo que encuentra aquí un elemento natural para su desarrollo. A la vez, este tipo de "Transparencia" no implica capacidad de decisión, Militares y ministerio de Defensa han sido muy celosos en impedir que el parlamento tenga acceso a grados de decisión en la compra de armamentos. Así como se ha sido celoso en negar cualquier cambio en la tributación que Codelco debe entregar a las FFAA para la compra de armamento.

El ex Presidente de los EEUU, Jimmy Carter, ha sostenido que la "posible venta" de aviones F-16 a Chile podría ser "**el primer paso en una escalada de armamento sofisticado**" (LE. 22.01.97). El ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, afirmó a su vez "**El pueblo chileno no merece que se gasten 250 millones de dólares en la compra de un avión cuando ni Chile ni los demás estados de la región han podido vencer la pobreza y la desigualdad 'agregando que la compra de 'material bélico sofisticado como son los aviones F-16 'es una invitación 'a los otros a seguirlo, dando paso así a una carrera armamentista' (EM 22.05.97). En su opinión 'la estabilidad política en la región depende de que los militares se subordinen efectivamente al poder civil y de la reducción de la pobreza, pero una carrera armamentista, como la que viene a estimularse (con la decisión de venta de EEUU) conspira contra ambos objetivos' (EM 03.08.97).**

No sólo Chile aporta al peligro espiral armamentista, las presiones del militarismo en la región involucran a muchas naciones. Perú ha hecho significativas adquisiciones, Argentina espera algún aporte importante desde EEUU dada su nueva condición de 'socio'. Un curso distinto es el que han asumido los países de Centroamérica, donde sus Presidentes han concordado una moratoria de compra de armamentos por dos años (EM 06. 08. 97).

El grupo de Río resolvió crear un grupo de trabajo de estudio sobre la carrera armamentista en la región lo que indica que estamos ante un fenómeno real. (EM. 18. 05. 97).

9. Impunidad, olvido y militarismo.

La agenda que ha debido sortear el 'nuevo pacto' es amplia en temas, así como lo es número de actos nacionales e internacionales que a ella han contribuido (destacando EEUU y España entre los últimos). Las responsabilidades militares en las violaciones de los derechos humanos es el tema que mayores contradicciones y fricciones ha introducido entre los partidarios del consenso en curso, abortando intentos anteriores.

Por ello el fin del caso Letelier fue visionado por estos sectores como el término a este cuestionamiento ciudadano. Y el propio alto mando del Ejército hizo su aporte a ello con la entrega de 'dos chivos expiatorios' los condenados oficiales Manuel Contreras y Pedro Espinoza.

La tesis del 'olvido' para estas materias, sostenida por Pinochet se ha abierto paso también hacia la Concertación.

El Ministro de Defensa, desde sus primeras declaraciones que 'Las FFAA no tienen datos oficiales sobre los desaparecidos', que esos son temas del pasado y que la vía para resolverlos es sólo la judicial, abrió un camino que no era el de la neutralidad, sino el de la impunidad ante el tema. El proceso judicial en Argentina por el Asesinato del ex comandante

en jefe del Ejército, general Carlos Prats y su Señora esposa, Sofía Cuthbert, ha motivado no pocas presiones y negociaciones desde el Ministerio de Defensa con sus congéneres argentinos y sobre las autoridades nacionales para evitar un curso que pudiera acarrear sorpresas desagradables para el entendimiento actual. Lo propio ocurre con diversas situaciones que siguen cuestionando al poder militar, caso Berrios en Uruguay, asesinato del concripto Pedro Soto y otras.

Por ello la acusación de la fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasis) contra el Ministro Pérez Yoma, de Diciembre de 1994, de contribuir a la impunidad, habrá que ampliarla al propósito de formular una política de defensa consensuada sobre esa base.

Los tribunales principales del país realizan también su aporte a este consenso aplicando, tras el término del caso Letelier, la ley de admistía, haciendo innecesaria una ley interpretativa u otra alternativa, que podría ocasionar fricciones.

Mientras la Ministra de Justicia, Soledad Alvear, y el Fiscal Militar, Fernando Torres, realizan gestiones en España, el Ministerio de RREE cataloga de 'inconducente' y un enjuiciamiento al proceso político Chileno' la intención de familiares de ciudadanos españoles de buscar en tribunales de su país justicia por las tropelías cometidas por el dictador y su equipo (EM 26. 06. 97). Justicia que la transición chilena no les ha dado.

En esta línea del olvido y la impunidad debe agregarse la situación de más de 400 uniformados constitucionalistas perseguidos por la fidelidad al pensamiento constitucionalista vigente hasta septiembre de 1973. Como sostiene el general Carlos Prats, 'No fueron las FFAA ni carabineros las que infringieron el mandato constitucional de sometimiento al poder civil. No fue la mayoría de sus oficiales y suboficiales, ni menos sus conscriptos, la que abjuró del compromiso

solemne que contrajo con la patria al recibir su investidura de uniformado'', fue la ''responsabilidad de la cúpula militar ''la que se rebeló ''contra el régimen constitucional '' (Memorias. Testimonios de un soldado. Sept. 1984). Esos hombres que no traicionaron su juramento no reciben hasta hoy, por presión militar e identificación democrática justo reconocimiento.

CONCLUSIONES

El ''nuevo pacto'' de los sectores dominantes y las FFAA conforma un bloque hegemónico de largo alcance, funcional al modelo neoliberal y al capital transnacionalizado.

Las FFAA son aceptadas como elemento regulador del comportamiento social en el marco de la Constitución de 1980, que consolidó el diseño de ''Democracia protegida'' formulado por la dictadura. Las FFAA son las cauteladoras del orden institucional de la República.

La mantención del modelo explica la asignación de un rol privilegiado para las FFAA y Carabineros, con altos grados de autonomización del poder civil, y la legitimación de sus actuaciones durante la dictadura, incluyendo la represión y los críme-

nes contra la humanidad.

La política gubernamental de acuerdos que prometía la promoción de algunas reformas parciales, luego del retiro de Pinochet del mando del Ejército, no muestra vitalidad, tras los últimos hechos que conducen a un Senado para 1998 más reaccionario, y una peligrosa inbricación entre ''bancada militar'' destinadas a actuar conjuntamente.

La complejidad de los fenómenos económicos y sociales en curso en que pugnan tendencias a la globalización, a la integración regional y afirmaciones de identidad nacional generará tensiones que afectarán a las FFAA que no parecen dispuestas a la interlocución democrática ni aceptan someterse a la soberanía popular. El papel de Estados Unidos, potencia dominante en el continente y única superpotencia mundial, crea crecientes contradicciones. La contradicción mercosur-ALCA es en este plano fundamental.

La contradicción principal entre modelo neoliberal y los intereses de la mayoría de la población se extiende a la contradicción entre democracia/institucionalidad protegida de la que forma parte el militarismo. De la resolución de ella, depende la posibilidad de un futuro democrático. XXI



HOMENAJE

Combatiente de todas las causas justas (a Manuel Piñeiro)

Marta Harneccker

Se fue una noche para volver muy pronto y no regresó. El viaje era por pocos días, la despedida fue corta. Manuel tenía todavía que leer algunos papeles antes de partir al II Frente Oriental "Frank País" -para conmemorar el 40 aniversario de su creación- y yo tenía que recopilar energías para continuar un trabajo urgente al día siguiente. Le prepare su maletín y me despedí. "Prepárame libros tuyos para algunos compañeros" -me dijo-. (Se refería a mi libro: "Haciendo posible lo imposible: La izquierda en el umbral del siglo XXI"). Era gran propagandista y divulgador de mi obra. Yo tenía conciencia de cuanto él valoraba mi trabajo y eso era muy importante para mí. Como tenía que levantarse a las cinco de la mañana y no quería despertarme durmió algo más de una hora en la hamaca de la terraza y partió silenciosamente. Esa noche fue la última vez que lo vi sentado en la cocina-comedor de nuestra casa, donde solía trabajar por las madrugadas leyendo papeles y mirando simultáneamente videos. Para un fumador empedernido como él ese era uno de sus espacios -habíamos llegado al acuerdo de que desde el pasillo que queda próxima la cocina y hacia el interior de la casa no se podía fumar-.

Tres días antes de cumplir sesenta y cinco años, un lamentable accidente terminó con su vida -una vida completamente dedicada a apoyar las luchas por construir un mundo mejor, más justo y solidario-. Cuando llegué a la clínica con nuestra hija, Camila, estaba semiinconsciente y en menos de una hora ines-

peradamente murió. Por ello no pudimos despedirnos, pero nos queda el consuelo de saber que al menos no sufrió.

Muchos de los que habían compartido con él en la Embajada de México poco antes, no podían creer la noticia. "Se veía tan vital, tan contento, de tan buen humor" -me decían. Yo sabía que no era para consolarme, él me había hablado por teléfono al llegar de Santiago de Cuba. Regresaba emocionado y feliz de ese encuentro con tantos compañeros de lucha. Revivir recuerdos, escuchar y contar anécdotas que el tiempo no había podido borrar de su memoria, admirarse del trayecto recorrido y de los cambios sufridos por aquella zona de combate debido a las transformaciones revolucionarias, sentirse cerca de todos esos hombres y mujeres que, con su entrega y espíritu de lucha, hicieron posible el triunfo de enero del 59, había llenado su alma de cálidas sensaciones que se expresaban a través de su rostro y de sus gestos.

La noche anterior lo habíamos visto en el noticiero de la televisión cubana irradiando simpatía y alegría, y planteando, con el humor que lo caracterizaba: "Ahora el peligro que corremos todos estos veteranos es que cuando empezemos a hacernos cuentos de la historia veamos hasta donde mantenemos una buena memoria e inconscientemente no exageramos los hechos en que todos hemos participado."

Lo había conocido en Cuba, en 1972, en la celebración de un 26 de julio. Fue un amor a

primera vista. Soy una de las pocas personas a las que el golpe militar contra Salvador Allende en Chile favoreció en su vida personal. Lo que en ese verano cubano parecía una relación imposible, se transformó muy pronto en una posibilidad real.

El exiliome condujo al lado de aquel hombre que era capaz de planificar las más audaces y arriesgadas empresas y al mismo tiempo tener una gran sensibilidad para las cosas pequeñas. Recuerdo sus diarias llamadas en el momento mismo en que el sol se comenzaba a esconder en el horizonte. Parecía quererme decir: se va luz, pero quedo yo que soy tu luz.

Poco a poco tuve que aprender a convivir con un hombre cuya vida personal estaba completamente subordinada a los intereses de la revolución. Son incontables las veces en que nuestros planes fueron derrumbados por inesperados acontecimientos que obligaban a modificarlos. Yo, una mujer organizada, tuve que adaptarme a esa constante incertidumbre y confieso que nunca llegué a lograrlo totalmente.

Debí aprender a controlar los celos que sentía por tantos compañeros que me robaban el escaso tiempo que teníamos para estar juntos. Noches y fines de semana entraba y salía gente de nuestra casa. Eran compañeros cubanos, latinoamericanos o de otras latitudes, que venían a buscar consejos y orientaciones, mientras él satisfacía su avidez de información acerca de sus países. Manuel sabía darse tiempo para escucharlos con atención y nunca olvidaba preguntarles por sus asuntos personales: la familia, el hijo enfermo, el problema íntimo. El envío de libros y periódicos era una demanda constante al despedirse.

No conozco a nadie que haya sido su subordinado en alguna de las distintas etapas de su vida que no guarde de él los mejores recuerdos: mientras él fue jefe, jamás un funcionario amonestado o sancionado dejó de contar con su especial atención. La mayor parte de ellos, pasada la sanción, continuaron siendo sus fie-

les colaboradores. Lo vi apoyar a muchos compañeros cuando consideraba que habían sido tratados injustamente sin tener en cuenta las consecuencias que de ello se podrían derivar.

Durante muchos años trabajó muy cerca de Fidel y siempre fue su más fiel defensor. Si alguna vez tuvo opiniones discrepantes nunca lo manifestó públicamente. Su lealtad a la revolución no tenía límites. Tanto empeño puso en colaborar con el movimiento guerrillero latinoamericano, en momentos en que la dirección de la Revolución estimaba que ese era el camino a seguir -tanto por la situación explosiva del área, como por la misma necesidad de consolidar la solitaria revolución caribeña-, como en convocar a empresarios de la región a invertir en Cuba, dada nueva situación económica creada por la caída del bloque soviético.

Era una persona que jamás buscaba protagonismo y que nunca reivindicó para sí los éxitos que inspiraba. Mantuvo su anonimato hasta unos meses atrás, cuando dio su primera entrevista sobre el Che en la revista Tricontinental. Desde entonces sufrió el asedio de periodistas de todas partes del mundo.

Manuel trabajaba duramente pero también gozaba intensamente en los pocos momentos que le quedaban libres. Una comida sencilla pero sabrosa, una siesta en la hamaca en medio de una agradable brisa, unas horas en la playa, una buena película, los bellos atardeceres tropicales, no le eran indiferentes. Bailaba maravillosamente bien, con ese ritmo caribeño que no es fácil de seguir por nosotros, los del sur del continente.

Su fino sentido del humor era una de sus rasgos más destacados. No había reunión social en la que él no fuera centro de un animado grupo que celebrara sus inesperadas salidas con fuertes carcajadas. En la casa, por el contrario, era muy poco comunicativo. Jamás permitió que aflorara ninguna de sus preocupaciones o sufrimientos. Su radical optimismo le llevaba a ver

salidas a una de las mayores dificultades.

Su creatividad era asombrosa. Quien venía a consultarle una o dos ideas salía cargado de un fardo de nuevas ideas. Si algo le molestaba era la inercia de algunos compañeros que reaccionaban demasiado lentamente ante las cambiantes situaciones.

Sentía una especial inclinación por los niños pequeños, lograba establecer con ellos un diálogo extraordinariamente fértil; para muchos de estos niños el tío de la barba era el tío preferido. Fue eso lo que me decidió a tener hijos con él aunque mi decisión inicial era no tenerlos. Supe que no había podido gozar de los primeros momentos de la vida de Manolito, su primer hijo con Lorna, debido a sus responsabilidades guerrilleras. Luego su primera mujer se accidentó y no pudo tener más hijos. Manuel guardaba esa frustración en el corazón y yo decidí subsanarla. Fue la determinación más im-

portante de mi existencia. Camila llenó nuestras vidas de ternura y alegría. Los escasos pero intensos momentos que él podía dedicarle convirtieron su existencia en algo más pleno. Éramos una familia feliz, la pequeña familia que constituimos con Camila, la familia mayor en la que incluíamos a Manolito, su esposa Lilibian, su hijita Gabriela y su primera esposa, Lorna, que llegó a ser una gran amiga para mí, y la gran familia de todos los fieles compañeros y amigos que se extendía hasta tierras lejanas del planeta.

Para todos nosotros, como para todos los compañeros que lo conocieron y aprendieron a respetarlo, admirarlo y quererlo como a un hermano y amigo, él no ha muerto, él vive y vivirá para siempre porque sus combates serán nuestros combates y sus sueños serán nuestros sueños.

Gracias Manuel por el ejemplo de tu vida, ya nadie te podrá separar jamás de nuestras esperanzas. XXI

Curso de Otoño

"EL CAPITAL" DE K. MARX

Objetivos generales del Curso:

Conocer la primera mano de la obra fundamental que permite una comprensión del modo capitalista de producción desde el punto de vista de la Economía Política. Comprender de esta manera los mecanismos que ocultan las categorías básicas que sustentan este sistema social y cómo se presentan en la superficie, en confrontación y crítica con otras concepciones de la economía.

Contenido del Curso:

Se hará un estudio completo de los tres libros que componen la obra de Marx. Este estudio significa una lectura de la obra por parte del alumno y su comentario detallado durante el curso, de cada uno de sus capítulos y secciones.

Profesores:

Coordinadores: Galo Edelstein y Manuel Riesco

Otros profesores invitados a sesiones específicas.

Este curso está dirigido a toda persona que tenga hábitos de estudio y lectura.

Evaluación del Curso:

El estudiante será evaluado periódicamente a través de trabajos para la casa. Se entregará al final de cada semestre un certificado con el rendimiento del alumno.

Duración del Curso:

3 semestres, una vez por semana, días lunes de las 19 a las 21:00 hrs.

Inicio de Clases: 27 de Abril de 1998

Lugar: Sede del CENDA, Vergara 578 (Entre Toesca y Gay)

Inscripciones: 688 37 60 - 688 37 62 - 688 37 63

Valor del Curso: 15.000 (quince mil pesos) semestrales

Curso de Otoño

TALLER: " 1789-1989 : EL Advenimiento de la Modernidad "

Objetivo General:

El taller se propone la lectura activa de los cuatro libros de la obra de ERIC HOBSBAWN, uno de los principales historiadores contemporáneos.

Relatores:

Manuel Riesco - Patricio Rivas - María Eugenia Hortvitz - Tomás Moulian
Willy Thayer - Gabriel Salazar.

1789 - 1878: " La Epoca de las Revoluciones "

1870 - 1878: " La Era del Capital "

1870 - 1914: " La Era del Imperio "

1914 - 1989: " La Era de los Extremos "

Horario:

Inicio de Clases: 30 de Abril de 1998

Lugar: Sede del CENDA, Vergara 578 (Entre Toesca y Gay)

Inscripciones: 688 37 60 - 688 37 62 - 688 37 63

